

Le recomendamos al lector que coja aire, pues necesitará aguantar la respiración en estas primeras páginas de inmersión profunda en la desfachatez intelectual.

Durante la crisis humanitaria de los refugiados de la guerra de Siria, la opinión pública occidental se estremeció ante la foto de un niño ahogado en una playa de Turquía. Jon Juaristi publicó entonces una columna en ABC de la que reproduciremos este fragmento:

"¿Qué saben los fugitivos sirios? Saben que llegar al corazón de la Europa rica requiere llegar antes al corazón de los europeos, y por eso traen niños. Niños que arrojan al otro lado de fronteras teóricamente infranqueables o que tramban en las vías del tren. Saben que, allá en su tierra de origen, estos efectos patéticos (enfriados en una exposición retórica de la desesperación) no valen con los asesinos basistas o yihadistas, a los que niños más, niños muertos, importa muy poco, pero a los europeos los despiertan sentimientos de culpa que deben eliminar cuanto antes porque están convencidos de que la culpa es física y produce cáncer".

El texto tiene un evidente ánimo provocador. Habla con condescendencia sobre las reacciones de indignación, compasión y rechazo que producen la muerte de los niños de Europa floresta y blanqueada. Juaristi piensa que los niños muertos son como cascadas frías que caen por las vías del tren, útil para abrir las puertas del corazón. No vienen porque sepanse de ellos. No, vienen para tocar la fibra sensible del burgués europeo. Es curioso, pero uno decía ETA lo mismo cuando moría un hijo de un guardia civil en un atentado con coche bomba? Los apologetas del asesinato terrorista empleaban un argumento bastante parecido al de Juaristi: según ellos, los guardias civiles manipulaban a sus hijos, los colocaban como "escudos humanos", por lo que no había que caer en la trampa del sentimentalismo: un examen frío de la situación arrojaba la conclusión de que la responsabilidad última de la muerte de los niños correspondía a sus padres por colocarlos allí.

Fernando Savater intervino en un programa televisivo sobre la tauromaquía y tuvo la ocurrencia de defender las corridas de toros en estos términos:

"Si a algunos de los seis millones de parados que hay en este momento en el país se les ofreciese llevar la vida que lleva un toro bravo, es decir, vivir en uno de los pasajes más hermosos del mundo durante prácticamente toda su existencia, tratado con mimo y con todo tipo de curiosidades, perteneciendo a una especie de la que solo una infima minoría va a ir a la plaza y, luego, como pago de eso, solamente pasar los últimos quince minutos de la vida matada, que son probablemente muchos menos de los que probablemente pasaremos nosotros en nuestra vida, habría gente, a montones, que por tener esa oportunidad aceptaría la vida del toro bravo".

Resulta difícil imaginar qué imagen del parado pueda tener Savater. Parece pensar que se trata de un ser desesperado, incapaz de defender su dignidad, que con tal de llevar

IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA

una buena vida está dispuesto a ser la víctima de una sesión letal de tortura, realizada además en público, a la vista de una multitud de espectadores. Un argumento como este produciría incomodidad incluso en una discusión de bar. Supongo que hay muchas razones para defender la "fiesta nacional", pero, de todas ellas, esta es acaso la más monstruosa.

Pérez de Arca lleva mucho tiempo opinando sobre la vida pública en España. Siempre tiene opiniones rotundas, tajantes, y utiliza un tono visceral, alejado del análisis, para dar rienda suelta a sus demandas. En varios artículos de opinión se ha referido al expresidente José María Aznar como "el peor dirigente que ha tenido España desde Fernando VII". Aznar que las variaciones de su discurso son muy dispares y vagan del elogio al desprecio, pero afirma que Aznar no ha sido para que

LA DESFACHATEZ INTELLECTUAL

Escritores e intelectuales ante la política

resulta que el propio Azca, en entrevistas y otros formatos, se haya declarado un "exiliado" porque decidió abandonar Barcelona e irse a vivir a Madrid. Hay que tener un ego bien puesto para presentar una decisión así como un "exilio", sobre todo en un país como el nuestro que ha tenido en el pasado experiencias desparadoras de exilio auténtico. Se trata de una banalización que los nacionalistas españoles celebran con regocijo, pero supongo que dejará posada a la gente que considere algo de sentido común.

El rey Juan Carlos I anunció su abdicación el 2 de junio de 2014. A los pocos días, el diario *El País* publicaba un especial en el que la plana mayor de sus escritores, periodistas e intelectuales, en el número de la figura de puse nota ("Ifigenia González primera vez tabilidad de libertad"); y Francisco Basterra remató la buena recordando que "las últimas cuatro décadas han sido sin duda los mejores 40 años

de nuestras vidas". Y, desde luego lo han sido, pero no precisamente por obra de Juan Carlos I ni el progreso económico, ni el Estado de derecho ni el orden democrático fueran una graciosa concesión de su majestad. Por supuesto, ni una referencia a los negocios turbios, a la fortuna acumulada durante su reinado o a sus ambiciones peligrosas. Al pasar por alto cualquier atisbo de crítica, parecía suponerse que la figura del rey no soportaba un juicio global de su trayectoria y servicio. Lo lógico habría sido ofrecer un análisis algo más ecuánime, en el que se destacara su papel crucial en la transición a la democracia sin por ello obviar sus tejemanejes económicos. La acumulación de artículos buenos fue una demostración de la decadencia de aquellos que en su día José Luis López Aranguren llamó, no sin cierta exageración, "el intelecto colectivo" del postfranquismo. Javier Cercas, aficionado a los freyes rebeldes y lapidarias, llevó tan lejos el elogio que terminó cayendo en exageraciones sin cuento. El título de su artículo, "Sin el Rey no habría democracia", era ya un exceso, aunque no puedo asegurar si había salido de su pluma o era resultado de la intervención del periódico. El texto, de hecho, mostraba algo semejante tesis pero en su afán por exaltar a Juan Carlos I

mostraba un claro peligro de una notable ignorancia retórica que se emplea los riesgos de un enfrentamiento causado por las demandas de los periféricos: "Ignorar los errores de reinado de Juan Carlos I han sido los mejores de nuestra historia moderna, los de mayor libertad y prosperidad, es simplemente ignorar nuestra historia moderna. Y esa ignorancia de nuestro presente puede devolvernos lo peor de nuestro pasado". Aparte de que, como he dicho antes, la libertad y prosperidad de España no son "obra" de Juan Carlos I, es importante subrayar que, por mucho que los españoles ignoren el presente, nadie nos va a devolver a pasado alguno. Ni va a volver la dictadura ni hay riesgo alguno de que en España pueda haber una nueva guerra civil. Unos mínimos conocimientos de política comparada confirman la vacuidad de este tipo de afirmaciones. Sencillamente, los países desarrollados con niveles de renta per cápita como el de España jamás sufren guerras civiles: este tipo de conflictos surge únicamente en países con bajo desarrollo económico y Estados débiles incapaces de imponer el orden.

La lista de ilustraciones y ejemplos podría continuar su buen rato. Estos son solo algunos extralidos al tuntún. A lo largo de este libro el lector encontrará múltiples citas que van en la misma línea que las reproducidas hasta el momento. Se caracterizan (o das ellas por una mezcla de frivolidad en los contenidos y preferencia en la forma estilística. Empleando un tono soberbio, pleno de contundencia, se realiza una afirmación redundante, en la que no hay rastro de duda o matiz. Y ese estilo hinchado de certidumbre, que se corresponde tan perfectamente con lo que el sociólogo Diego Gambetta ha llamado "machismo discursivo", sirve para disfrazar ocurrencias y argumentos poco informados



CATARATA

La desfachatez intelectual está muy extendida en nuestra esfera pública. Muchos de los intelectuales españoles de mayor prestigio y visibilidad, casi siempre escritores y hombres de letras, se caracterizan por participar en el debate político con ideas superficiales y frívolas, expuestas en un tono tajante y prepotente. La desfachatez intelectual se sostiene sobre una impunidad generalizada, que nace de la ausencia de una crítica explícita a las opiniones de las principales figuras de nuestra clase intelectual. En este libro se presentan abundantes ejemplos de opiniones mal planteadas, sin atención a los hechos ni a las reglas básicas de la argumentación, en temas diversos como el nacionalismo, el terrorismo y la crisis. Nuestros intelectuales de mayor fama no salen bien parados. Frente a la figura del intelectual que pontifica sobre cualquier asunto, se apuesta por una esfera pública más plural, menos personalista y con filtros más eficaces que eleven el nivel de nuestro debate político.

IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA PROFESOR DE CIENCIA POLÍTICA EN LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID. HA SIDO PROFESOR EN LAS UNIVERSIDADES DE SALAMANCA, POMPEU FABRA Y COMPLUTENSE, ASÍ COMO PROFESOR VISITANTE EN LA UNIVERSIDAD DE YALE. ES AUTOR DE NUMEROSOS LIBROS Y ARTÍCULOS ACADÉMICOS SOBRE VIOLENCIA POLÍTICA, TEORÍA DE LA DEMOCRACIA, POLÍTICA COMPARADA Y POLÍTICA ESPAÑOLA. SUS ÚLTIMOS LIBROS SON *ATADO Y MAL ATADO. EL SUICIDIO INSTITUCIONAL DEL FRANQUISMO Y EL SURGIMIENTO DE LA DEMOCRACIA* (ALIANZA, 2014) Y *LA IMPOTENCIA DEMOCRÁTICA. SOBRE LA CRISIS POLÍTICA ESPAÑOLA* (LOS LIBROS DE LA CATARATA, 2014). ES COLABORADOR HABITUAL DEL PERIÓDICO DIGITAL *INFOLIBRE* Y DE LA REVISTA DIGITAL *CTXT*.

Ignacio Sánchez-Cuenca

La desfachatez intelectual

ESCRITORES E INTELLECTUALES ANTE LA POLÍTICA



DISEÑO DE CUBIERTA: PABLO NANCLARES © IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA, 2016
© LOS LIBROS DE LA CATARATA, 2016
FUENCARRAL, 70

28004 Madrid

TEL. 91 532 20 77

FAX. 91 532 43 34

WWW.CATARATA.ORG

LA DESFACHATEZ INTELECTUAL.

ESCRITORES E INTELCTUALES ANTE LA POLÍTICA

ISBN (EPUB): 978-84-9097-136-9

ISBN (PAPEL): 978-84-9097-110-9

DEPÓSITO LEGAL: M-3.789-2016

IBIC: JP/KNTJ

ESTE LIBRO HA SIDO EDITADO PARA SER DISTRIBUIDO. LA INTENCIÓN DE LOS EDITORES ES QUE SEA UTILIZADO LO MÁS AMPLIAMENTE POSIBLE, QUE SEAN ADQUIRIDOS ORIGINALES PARA PERMITIR LA EDICIÓN DE OTROS NUEVOS Y QUE, DE REPRODUCIR PARTES, SE HAGA CONSTAR EL TÍTULO Y LA AUTORÍA.

INTRODUCCIÓN

Le recomiendo al lector que coja aire, pues necesitará aguantar la respiración en estas primeras páginas de inmersión profunda en la desfachatez intelectual.

Durante la crisis humanitaria de los refugiados de la guerra de Siria, la opinión pública occidental se estremeció ante la foto de un niño ahogado en una playa de Turquía. Jon Juaristi publicó entonces una columna en *ABC* de la que reproduzco este fragmento:

¿Qué saben los fugitivos sirios? Saben que llegar al corazón de la Europa rica requiere llegar antes al corazón de los europeos, y por eso traen niños. Niños que arrojan al otro lado de fronteras teóricamente infranqueables o que tumban en las vías del tren. Saben que, allá en su tierra de origen, estos efectos patéticos (codificados en una espontánea retórica de la desesperación) no valen con los asesinos baasistas o yihadistas, a los que niño más, niño menos, importa muy poco, pero a los europeos les despiertan sentimientos de culpa que deben eliminar cuanto antes porque están convencidos de que la culpa es tóxica y produce cáncer [\[1\]](#).

El texto tiene un evidente ánimo provocador. Habla con condescendencia sobre las reacciones de indignación, compasión y rechazo que produce la suerte de los miles de refugiados sirios que quieren entrar en Europa. Juaristi no se deja arrastrar por la “retórica de la desesperación” e ironiza sobre la culpa que sienten los europeos biempensantes. A diferencia de la masa, él es consciente de que los sirios están hurgando en la mala conciencia europea: explotan a sus hijos, los traen en las peores condiciones para que una Europa llorosa y blanda acepte acogerlos. Juaristi piensa que los niños sirios son algo

así como escudos humanos (¡los tumban en las vías del tren!), utilizados por sus padres para abrir las puertas de la fortaleza occidental. No vienen porque sus padres no quieran separarse de ellos. No, vienen para tocar la fibra sensible del burgués europeo. Es curioso, pero ¿no decía ETA lo mismo cuando moría un hijo de un guardia civil en un atentado con coche bomba? Los apologetas del asesinato terrorista empleaban un argumento bastante parecido al de Juaristi: según ellos, los guardias civiles manipulaban a sus hijos, los colocaban como “escudos humanos”, por lo que no había que caer en la trampa del sentimentalismo; un examen frío de la situación arrojaba la conclusión de que la responsabilidad última de la muerte de los niños correspondía a sus padres por colocarlos allí.

Fernando Savater intervino en un programa televisivo sobre la tauromaquia y tuvo la ocurrencia de defender las corridas de toros en estos términos:

Si a algunos de los seis millones de parados que hay en este momento en el país se les ofreciese llevar la vida que lleva un toro bravo, es decir, vivir en uno de los paisajes más hermosos del mundo durante prácticamente toda su existencia, tratado con mimo y con todo tipo de comodidades, perteneciendo a una especie de la que solo una ínfima minoría va a ir a la plaza y, luego, como pago de eso, solamente pasar los últimos quince minutos de la vida malos, que son probablemente muchos menos de los que probablemente pasaremos nosotros en nuestra vida, habría gente, a montones, que por tener esa oportunidad aceptaría la vida del toro bravo [\[2\]](#).

Resulta difícil imaginar qué imagen del parado pueda tener Savater. Parece pensar que se trata de un ser desesperado, incapaz de defender su dignidad, que con tal de llevar una buena vida está dispuesto a ser la víctima de una sesión letal de tortura, realizada además en público, a la vista de sus conciudadanos, en medio de un jolgorio. Un argumento como este produciría incomodidad incluso en una discusión de bar. Supongo que hay muchas razones para defender la “fiesta nacional”, pero, de todas ellas, esta es acaso la más mostrenca.

Félix de Azúa lleva mucho tiempo opinando sobre la vida pública en España. Siempre tiene opiniones rotundas, tajantes, y utiliza un tono visceral, alejado del análisis, para dar rienda suelta a sus demonios. En varios artículos

de opinión se ha referido al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como “el peor dirigente que ha soportado España desde Fernando VII” [3]. Es natural que las valoraciones sobre Zapatero sean muy dispares y vayan del entusiasmo al aborrecimiento, pero afirmar que Zapatero ha sido peor que Francisco Franco y Miguel Primo de Rivera, por limitarnos al siglo XX, suena más bien estafalario. Fue esta coletilla de “el peor dirigente desde Fernando VII” una fórmula que en los círculos más reaccionarios de Madrid se propagaba entre enormes risotadas durante la etapa de gobierno socialista entre 2004 y 2011. Que Azúa, hombre de una sensibilidad estética exquisita, haya hecho suyo el lugar común de la derecha más cerril y lo propague a través de las siempre solemnes tribunas del diario *El País*, dice mucho sobre la impunidad con la que opinan algunos de nuestros intelectuales. No menos chocante resulta que el propio Azúa, en entrevistas y otros formatos, se haya declarado un “exiliado” porque decidió abandonar Barcelona e irse a vivir a Madrid [4]. Hay que tener un ego bien puesto para presentar una decisión así como un “exilio”, sobre todo en un país como el nuestro que ha tenido en el pasado experiencias desgarradoras de exilio auténtico. Se trata de una banalización que los nacionalistas españoles celebran con regocijo, pero supongo que dejará pasmada a la gente que conserve algo de sentido común.

El rey Juan Carlos I anunció su abdicación el 2 de junio de 2014. A los pocos días, el diario *El País* publicaba un especial en el que la plana mayor de sus escritores, periodistas e intelectuales lanzaba ditirambos acartonados, en el más fiel estilo del antiguo NO-DO, a la figura del monarca. Juan Luis Cebrián le puso nota (“sobresaliente cum laude”); Felipe González añadió que el rey “nos da por primera vez en 300 años un periodo de estabilidad democrática y de convivencia en libertad”; y Francisco Basterra remató la faena recordando que “las últimas cuatro décadas han sido sin duda los mejores 40 años de nuestras vidas”. Y desde luego lo han sido, pero no precisamente por obra de Juan Carlos I: ni el progreso económico, ni el Estado de derecho ni el orden democrático fueron una graciosa concesión de su majestad. Por supuesto, ni una referencia a los negocios turbios, a la fortuna acumulada durante su reinado o a sus amistades peligrosas. Al pasar por alto cualquier atisbo de crítica, parecía suponerse que la figura del rey no soportaba un juicio global de su trayectoria y servicio. Lo lógico habría sido ofrecer un análisis algo más ecuánime, en el que se destacara su papel crucial en la transición a la democracia sin por ello silenciar sus tejemanejes

económicos. La acumulación de artículos huecos fue una demostración de la decadencia de aquello que en su día José Luis López Aranguren llamó, no sin cierta exageración, “el intelectual colectivo” del postfranquismo. Javier Cercas, aficionado a las frases redondas y lapidarias, llevó tan lejos el elogio que terminó cayendo en exageraciones sin cuento. El título de su artículo, “Sin el Rey no habría democracia”, era ya un exceso, aunque no puedo asegurar si había salido de su pluma o era resultado de la intervención del periódico. El texto, de hecho, matizaba algo semejante tesis, pero, en su afán por ensalzar a Juan Carlos, se llegaba a afirmar que el 23 de febrero de 1981 fue “el día en que empieza de veras la democracia y terminan el franquismo y la Guerra Civil” [5]. Quizá sea un tropo literario, pero a mí me suena más bien a frase absurda: la Guerra Civil había acabado en 1939 y el franquismo en 1977, se ponga Cercas como se ponga. Para cerrar su artículo, el autor dejaba en el aire el ominoso peligro de una nueva guerra civil, truco retórico que se emplea para alertar sobre los riesgos de un enfrentamiento fratricida causado por las demandas de los nacionalismos periféricos: “Ignorar que los casi cuarenta años de reinado de Juan Carlos I han sido los mejores de nuestra historia moderna, los de mayor libertad y prosperidad, es simplemente ignorar nuestra historia moderna. Y esa ignorancia de nuestro presente puede devolvernos lo peor de nuestro pasado”. Aparte de que, como he dicho antes, la libertad y prosperidad de España no son “obra” de Juan Carlos I, es importante subrayar que, por mucho que los españoles ignoren el presente, nadie nos va a devolver a pasado alguno. Ni va a volver la dictadura ni hay riesgo alguno de que en España pueda haber una nueva guerra civil. Unos mínimos conocimientos de política comparada confirman la vacuidad de este tipo de afirmaciones. Sencillamente, los países desarrollados con niveles de renta per cápita como el de España jamás sufren guerras civiles; este tipo de conflictos surge únicamente en países con bajo desarrollo económico y Estados débiles incapaces de imponer el orden.

La lista de ilustraciones y ejemplos podría continuar un buen rato. Estos son solo algunos extraídos al tuntún. A lo largo de este libro el lector encontrará múltiples citas que van en la misma línea que las reproducidas hasta el momento. Se caracterizan todas ellas por una mezcla de frivolidad en los contenidos y prepotencia en la forma estilística. Empleando un tono sobrado, pleno de contundencia, se realiza una afirmación retumbante, en la que no hay rastro de duda o matiz. Y ese estilo henchido de certidumbre, que se

corresponde tan perfectamente con lo que el sociólogo Diego Gambetta ha llamado “machismo discursivo” (véase el capítulo 1), sirve para disfrazar ocurrencias y argumentos poco informados y mal contruidos.

Son muchos los ejemplos de intelectuales que han interpretado el reconocimiento público que reciben por su obra literaria o ensayística como una forma de impunidad. Llegados a cierto punto de “consagración”, saben que digan lo que digan, por muy arbitrario o absurdo que resulte, nadie les va a mover la silla. Es como si la acumulación de malas ideas y opiniones infundadas no tuviera apenas impacto sobre su reputación, de modo que ningún periódico se atreverá a prescindir de sus servicios, ni las editoriales rechazarán sus manuscritos ni les dejarán de invitar a conferencias, cursos de verano y demás actos culturales y académicos.

Esta suerte de impunidad está muy generalizada en las letras españolas, pero me atrevería a afirmar que resulta especialmente acusada entre aquellos que adquirieron visibilidad y protagonismo durante los primeros años de la democracia y siguen escribiendo hoy como lo hacían entonces, sin pausa ni interrupción, con más de cuatro décadas de experiencia a sus espaldas. Ellos apenas han cambiado (han cambiado mucho ideológicamente, desde luego, pero no en la manera en la que intervienen en el debate público) y, sin embargo, el país ha pasado por una transformación muy profunda. El nivel de preparación de las nuevas generaciones (entre las que no me cuento, por cierto) es muy superior al de las anteriores. Así, lo que pudo ser un análisis novedoso y ocurrente en los primeros ochenta, hoy puede haberse convertido en algo muy anticuado. La generación de la Transición, que vivió unas circunstancias completamente extraordinarias, fue en gran medida autodidacta, por lo que presenta ciertas limitaciones formativas (las propias de una licenciatura en Derecho o en Filosofía y Letras en la universidad española de la época) que se han ido haciendo más evidentes con el paso del tiempo.

Pensemos en el análisis político: es obvio que ha evolucionado muchísimo. Así como en los años ochenta y aún en la década siguiente el debate sobre la política se realizaba en términos muy superficiales y literarios, con grandes dosis de subjetivismo, hoy contamos con numerosos expertos deseosos de participar en dicho debate aportando argumentos que tienen más base que la pura ocurrencia. Los escritores consolidados, no obstante, continúan opinando sobre política sin haber hecho un mínimo esfuerzo por aprender y estudiar lo que se sabe, con mayor o menor fundamento, sobre ciertos temas acerca de los

cuales no tienen reparo a la hora de ofrecer tesis rotundas.

La aparición en las nuevas generaciones de gente con mayor preparación intelectual para hablar sobre temas políticos (corrupción, nacionalismo, terrorismo, relaciones internacionales, integración europea, administración pública, financiación autonómica, partidos políticos, etc.) ha sido clave para poner en evidencia el estilo del viejo intelectual que cree que puede opinar sobre cualquier asunto sin haber hecho unas lecturas mínimas al respecto.

El problema se agrava porque estos intelectuales consagrados, muchos de ellos consumidos por la vanidad de los personajes que han creado, aceptan muy mal la crítica. Cualquier desacuerdo, por muy razonado que esté, lo entienden como un ataque personal, como un intento de desprestigiarlos, fruto de la envidia y el rencor. En consecuencia, cuando se dignan a contestar, lo suelen hacer en términos personales, atacando a quien ose rechistarles. Desde sus tribunas, prefieren evitar el debate y el intercambio de argumentos, lo que no es incompatible con lanzar dardos cargados de mala uva contra los que no opinan como ellos. Su objetivo es ofrecer opiniones, no someterlas a un examen crítico en una conversación colectiva. Son opiniones con sello personal, con marca propia, que están asociadas a un autor único e irrepetible. El debate, pues, queda reducido a desautorizar a quien piensa distinto, sin entrar en demasiados detalles acerca de las razones para defender una postura determinada. Con excesiva frecuencia, la desautorización se lleva a cabo de forma oblicua, no mencionando el nombre de quien sostiene una idea diferente; así sucede sobre todo cuando se considera que dicho nombre está por debajo en el escalafón, por lo que hacerse eco del mismo supondría favorecer un innecesario ascenso en la jerarquía de las letras.

La calidad del debate público se resiente como consecuencia de estos modos. En general, tengo la impresión de que las voces principales en dicho debate se han ido quedando caducas y obsoletas. La llegada de la crisis en 2008 sirvió para hacer más visible la decadencia de las “grandes firmas”. Sus temas favoritos suelen girar siempre en torno al nacionalismo y el ser de España, verdaderas obsesiones patrias: España como problema, el futuro de la nación española, un proyecto para España, España ante sus desafíos territoriales, España ante Europa, los fantasmas del pasado de España, el reto de España ante un mundo global y así sucesivamente. Por eso, cuando la crisis comienza a hacer estragos y aumentan la desigualdad y la injusticia social, apenas tienen nada que decir. No conectan con los problemas cotidianos de la

crisis: los desahucios, la emigración de los jóvenes, la pobreza energética, los recortes sociales, la congelación de las ayudas a la dependencia, el paro de larga duración, las ayudas a los bancos, las políticas de austeridad..., nada de esto despierta su interés. Necesitan el plan Ibarretxe o el *procés* de Artur Mas para inspirarse y dar lo mejor de sí mismos. Ahí se encuentran en su salsa. Como, por lo demás, son sensibles a las modas y tendencias, cuando oyen campanas de que, por ejemplo, la desigualdad es un tema de creciente importancia más allá de nuestras fronteras, empiezan a hacer referencia al fenómeno, pero con retraso y solo tras el éxito de Piketty, a pesar de que en España numerosos expertos llevaban tiempo, bastante antes de la publicación de *El capital en el siglo XX*, insistiendo sobre el aumento de la desigualdad [6]. De la misma manera, “las grandes firmas” rara vez escriben sobre lo que sucede fuera de España, ni acuden a lo ocurrido en otros países para poner la realidad española en perspectiva. El resultado suele ser un análisis muy provinciano de lo que sucede en nuestro país. Esta especie de aislacionismo o autarquía intelectual constituye uno de los rasgos más definitorios de nuestro debate público. Si se quiere expresar de otro modo, podría afirmarse que el “casticismo” sigue muy presente entre los escritores e intelectuales con mayor presencia mediática e influencia social.

Javier Varela, en su análisis histórico de los intelectuales, ya mostró que la obsesión con el problema nacional viene de lejos. Y también señaló que la principal limitación intelectual de los escritores y ensayistas de la generación del 98 en adelante fue su aproximación estética y moral al tema de España. En el fondo, cuando hablaban sobre los problemas de la patria, hablaban sobre sí mismos: “Ocupados en la tarea de la creación literaria, obsesionados en la invención de su personalidad, el intelectual español llevó hacia la política los valores estéticos; tendió a confundir su privadísima moral —heroica, sublime— con la moral pública” [7]. Resulta fascinante que un siglo después sigamos en las mismas. Las intervenciones políticas de Antonio Muñoz Molina, muy celebradas por el *establishment* cultural del país, se basan en muchos casos en la contraposición entre unos valores morales encarnados por él mismo y la traición a dichos valores por parte de una clase política ignorante y sin visión que condena a España a mantenerse en un atraso secular. La política pasa a ser el reflejo de las deficiencias morales de nuestra clase dirigente. La misma posición parece advertirse en la denuncia furiosa que hace Azúa de las elites españolas e idéntica solución moral y privada propone para hacer frente a la

barbarie que nos rodea:

Un individualismo radical es la única salida que concibo para las tribulaciones que se avecinan. Eso es, para mí, la política en su sentido más honesto: lo que cada cual lleva a cabo desde su responsabilidad, con imaginación e iniciativa, para impedir los atropellos del poder [8].

No puedo imaginar una confesión más descarnada que esta sobre la confusión entre política y moral individual. Revela una cierta bancarrota intelectual, una impotencia acusada para entender las soluciones políticas a las “tribulaciones que se avecinan”. Ante la dificultad de abordar políticamente los problemas del presente, el intelectual prefiere cultivar su personalidad y constituirse en referente o ejemplo para los demás.

Varela va más allá y sitúa en esta aproximación moralizante a la realidad política el origen de los cambios ideológicos que los intelectuales vienen recorriendo en sus biografías personales desde el 98 hasta el presente. De la misma manera que Ortega y Gasset fue a lo largo de su vida liberal, conservador, socialista, demócrata, etc., algunos de los más egregios intelectuales de nuestro tiempo han pasado por el marxismo-leninismo, la socialdemocracia y el liberalismo, para acabar recalando en posiciones que solo cabe calificar de reaccionarias. Por supuesto, todo el mundo tiene derecho a evolucionar ideológicamente y no puede sino celebrarse que, quienes defendieran dogmáticamente el marxismo-leninismo en su juventud, hayan acabado después defendiendo el liberalismo (por más que lo hagan con el mismo dogmatismo que entonces). Pero dicho esto, no es fácil despejar la impresión de que hay un elemento de frivolidad intelectual en esos virajes tan pronunciados.

No me parece injusto afirmar que los intelectuales de mayor visibilidad social y mediática no han estado a la altura de las circunstancias durante la crisis. En todo caso, se han podido sumar a las proclamas regeneracionistas de tantos economistas y juristas, proclamas que constituirán el centro de atención del capítulo final de este libro. El discurso de literatos y ensayistas sigue anclado en la perenne querrela nacional y cuando sale de esos parámetros se mueve entre vaguedades y lugares comunes que delatan una ignorancia preocupante sobre el funcionamiento de la economía y la política. No quiero

decir con ello que el debate deba ser monopolizado por expertos. Todo el mundo tiene derecho a intervenir en la esfera pública, faltaría más. Pero se deben exigir unos mínimos, de manera que las intervenciones ante el público tengan más nivel que la conversación propia del casino decimonónico. Es enriquecedor que un intelectual generalista se empape de conocimientos y haga una contribución fundamentada, que probablemente será más valiosa que la del experto con anteojeras y una perspectiva muy estrecha; lo que está de más es que el intelectual hable de oídas y derrape. No defiendo, pues, una tesis gremial, consistente en reservar la tribuna y la columna al especialista; lo que defiendo es que las reglas que se emplean para juzgar si un argumento está bien construido y tiene a la realidad de su parte se apliquen a todos por igual, incluyendo a los escritores más consagrados.

No vale disculpar el análisis especialmente obtuso de algún intelectual consolidado apelando a su obra “seria”, a sus libros de filosofía o a sus novelas. Alguien puede ser un grandísimo escritor de novelas y versos y, sin embargo, descolgarse en la prensa o en una tertulia con los argumentos más peregrinos sobre algún otro asunto. La conclusión a la que habrá que llegar en tal caso no puede ser que dicho escritor sea un fraude, sino, más bien, que se trata de un gran escritor y un pésimo opinador. A pesar de que nuestros intelectuales encuentren inconcebible que puedan fallar en algo, intentaré mostrar a lo largo de estas páginas que sus opiniones sobre asuntos públicos suelen caracterizarse por la superficialidad y la vaguedad. En este sentido, mi propósito es bien distinto al del polémico libro de Gregorio Morán, *El cura y los mandarines* [9]: Morán hace juicios sumarios, cargados de adjetivos, muchos de ellos hirientes y ofensivos, sobre la producción intelectual de escritores, pensadores y ensayistas, entrando en el fondo de sus trabajos [10]. Es una opción legítima, por supuesto, que requiere grandes facultades, pues Morán opina con igual suficiencia sobre marxismo, lógica matemática y estilos literarios; en cualquier caso, no es la opción que yo he tomado. Así, el lector podrá ver que someto las ideas de Antonio Muñoz Molina sobre la crisis española a una crítica dura, pero no entro a valorar sus novelas, que probablemente merezcan los elogios más entusiastas; lo mismo puedo decir sobre las ideas políticas de César Molinas o de Luis Garicano, que a mi juicio carecen del suficiente rigor, lo cual no impide que sean excelentes profesionales de la economía. Mi intención no es, por tanto, destruir la reputación de nadie en los campos en los que destacan, sino tan solo llamar la

atención sobre la pobreza de su argumentación cuando intervienen en la esfera pública a propósito de temas que no conocen en profundidad y sobre los cuales, en la mayoría de los casos, no tienen nada especialmente interesante que aportar.

También es este libro diferente del recientemente escrito por Víctor Lapuente, *El retorno de los chamanes*, que intenta construir una teoría general y se lanza a defender tesis enormes sobre la influencia determinante del debate público y la retórica política en las trayectorias económicas, sociales y políticas de los países [\[11\]](#). Mi ánimo es mucho más modesto: en los términos del propio Lapuente, este es un libro solamente exploratorio, cuyo objetivo consiste en señalar los excesos lamentables que se producen en nuestra esfera pública como consecuencia de la falta de filtros en la publicación de opiniones y de la impunidad reinante en el mundo de las letras (no pasa factura escribir de oídas o decir tonterías como las que he citado al principio de estas páginas).

Cuando me puse a escribir estas páginas, noté de inmediato lo solitario de este ejercicio. Casi nadie señala con nombres y apellidos a los responsables de propalar en la esfera pública malos argumentos y emplear un estilo de intervención más estético que analítico. Al contrario, lo que domina es una actitud generalizadamente hipócrita, consistente en hablar bien en público de las ideas de cierto autor y luego ponerle a caer de un burro en privado. Así, mucha gente comenta en tono de confidencia lo mucho que le desagradan los excesos de Félix de Azúa o lo repetitivos que se han vuelto los artículos políticos de Fernando Savater. Sin embargo, casi nadie “se toma la molestia” de hacerlo en público. Unos porque desde una posición un tanto olímpica consideran que no vale la pena, que es una distracción con respecto a quehaceres más urgentes y trascendentes; otros, sencillamente, porque no quieren buscarse problemas. El mundo de las letras es bastante pequeño y los efectos de cuestionar a ciertas figuras pueden terminar siendo fuente de complicaciones. Imaginemos que alguien critica a Fernando Savater, quizá el más público de nuestros intelectuales públicos: no cabe descartar que en *El País* se sientan ofendidos y consideren un “empecinado” al autor de la crítica, que, a su vez, encontrará dificultades para publicar en *Claves de la Razón Práctica*, revista del grupo PRISA dirigida por Fernando Savater, pero también para que le concedan el Premio Anagrama de Ensayo, en cuyo jurado ha estado Savater muchísimos años, o el Premio Espasa de Ensayo, en el que

también estuvo un tiempo, y así hasta el aburrimiento. Lo mismo cabe decir de muchos otros figurones con múltiples y largos tentáculos en los medios de comunicación y editoriales de este país.

El caso es que, por un motivo u otro, la crítica con nombre y apellidos tiende a ser infrecuente en el mundo de las letras. De este modo, va consolidándose la impunidad a la que antes me refería. Los escritores más influyentes pueden decir casi todo lo que les venga en gana sin anticipar por ello crítica alguna. De hecho, la crítica se vuelve tan rara que quien la practica en alguna ocasión puede parecer un demente o un iluminado.

También influye en la ausencia de una crítica abierta la red de complicidades que va tejiéndose a base de encuentros en los múltiples actos culturales que jalonan la vida pública española, ya sea en forma de conferencias, mesas redondas, cursos universitarios, o bien en forma de proyectos editoriales, manifiestos o lo que se tercié. No son tantos quienes participan en la esfera pública, así que la probabilidad de que coincidan es elevada. En el momento en que se traban relaciones personales y expectativas futuras de lo que podríamos llamar “apoyo mutuo”, la opción de la crítica pierde mucho de su atractivo.

A lo largo de los años, he ido publicando algunos artículos de prensa sobre escritores, intelectuales y política. Primero lo hice en el diario *El País*, medio en el que colaboré entre 1998 y 2013 y que siempre me trató con gran generosidad. Durante los años de la crisis me fui desencantando de *El País*, que ha llegado a convertirse en un periódico que me resulta totalmente ajeno en sus planteamientos, prioridades y firmas. Lo mismo les ha sucedido a numerosos viejos lectores del periódico y, de otra manera, a muchos jóvenes que ya no se molestan ni en conocerlo. Por ello, acepté en 2013 la invitación de dos grandes periodistas, Jesús Maraña y Manuel Rico, para colaborar regularmente en *infoLibre* y esporádicamente en *tintaLibre* (a mi juicio, una de las revistas más interesantes que se publican en España). En 2015 me sumé además a otro proyecto de gran calidad, la revista digital *Ctxt*, dirigida por otro excelente periodista y escritor, Miguel Mora. En estos medios he ido escribiendo nuevos artículos sobre el tema de los intelectuales y la política, a mayor ritmo que en el pasado. Como es lógico, el tema tiende a generar polémica y también, por qué no reconocerlo, cierto “morbo”, ya que hay un número no despreciable de lectores que echan de menos un debate franco, sin sobrentendidos, sin esas alusiones veladas que solo los afectados entienden.

Pensé, pues, que había llegado el momento de utilizar esos materiales como punto de partida para preparar un libro breve, que es este que ahora tiene el lector en sus manos.

El formato libro me permite presentar las ideas con más calma y despejar algunos malentendidos y contestar a algunas críticas que aquellos artículos despertaron [\[12\]](#). Según he indicado anteriormente, mi propósito no es, como algunos creyeron en su momento, “que se quiten los escritores y los filósofos que aquí llegamos los científicos sociales (economistas, politólogos, sociólogos)”. Mi posición no es en absoluto esa. Creo, efectivamente, que en España los escritores intervienen demasiado en los asuntos públicos, mucho más, por ejemplo, que en los países anglosajones, y que esa sobreabundancia de literatos es en última instancia reveladora sobre cómo se concibe el debate público en España, lleno de apelaciones ideológicas muy genéricas, de exhibicionismo moral, de afirmación del subjetivismo más ramplón y con poco gusto por el detalle y el rigor analítico. Yo no me quejaría tanto sobre la omnipresencia de los literatos si el nivel de sus intervenciones fuera más elevado. Pero, por desgracia, hay innumerables ejemplos de cómo opinan sin haberse informado suficientemente. No se molestan en averiguar lo que se sabe sobre ciertos temas ni lo que se opina fuera de nuestras fronteras.

En el capítulo primero del libro abordo esta cuestión, tratando de argumentar que los escritores empiezan a patinar en el momento en el que se meten en disquisiciones sobre las relaciones causales entre fenómenos sociales, políticos y económicos, como cuando hablan de los factores que han producido la crisis, cuando opinan acerca de los efectos de distintas políticas antiterroristas o cuando entran a valorar las consecuencias de las diversas leyes educativas que se han aprobado en democracia. Ante este tipo de cuestiones, se dejan llevar por prejuicios y lugares comunes que circulan por la esfera pública. En cambio, cuando utilizan la escritura para la denuncia, la defensa de ciertos valores, la disección de un político o el análisis de la retórica ideológica suelen brillar por encima de los demás. En este sentido, el discurso sobre los males de la patria es especialmente resbaladizo para el escritor, toda vez que la explicación y remedio de dichos males remite ineludiblemente a sus causas. En este primer capítulo ofrezco abundantes ejemplos de cómo muchos literatos yerran tanto en el tono como en fondo.

Por supuesto, soy consciente de que al hablar de “los escritores” estoy cometiendo un abuso, generalizando más de la cuenta, y que no todos los

literatos comparten el estilo que tanto critico en estas páginas. Podría haber introducido en cada frase una matización en forma de “la mayoría de los escritores...”, “los escritores suelen...”, “son muchos los escritores que...”, pero el texto se habría vuelto quizá demasiado pesado. He preferido abandonar en ocasiones los matices, para dar así mayor fluidez a la exposición, y lanzar esta advertencia al comienzo del libro, en esta introducción.

Los otros dos capítulos están escritos en un registro algo diferente. Los protagonistas ya no son solo los escritores, pues me ocupo también de los intelectuales en general, incluyendo entre los mismos a ensayistas, pensadores, periodistas y académicos que intervienen en el debate público. A su vez, los ejemplos no son simplemente barbaridades, excesos o disparates, sino tesis o enfoques que entran en el terreno de la legítima discrepancia y sobre los que, por tanto, cabría en principio mantener un intercambio fructífero. En la práctica, dicho intercambio no tiene lugar y nos encontramos más bien con argumentos endebles, consignas que se repiten de un autor a otro, supuestos no contrastados y respeto acrítico a las opiniones de los figurones.

Los temas que he elegido en este segundo capítulo son el terrorismo y el nacionalismo. Más allá del interés sustantivo que estos asuntos pueden despertar, el análisis de los debates sobre los mismos resulta crucial para entender un fenómeno muy extendido, pero que rara vez reconocen sus protagonistas: la descarada derechización de tantos y tantos intelectuales que en su juventud defendieron consignas revolucionarias y anticapitalistas y hoy han recalado en un conservadurismo escéptico y refunfuñador. Sin entrar a realizar juicios de valor sobre dicha evolución, sí parece legítimo plantear algunas dudas sobre el tipo de coherencia intelectual que demuestra que quien en los setenta era todavía revolucionario, o partidario de la violencia, en los ochenta se hizo socialdemócrata, en los noventa, liberal, y más recientemente, conservador. Teniendo en cuenta que dichos cambios se producen siempre de acuerdo con el espíritu de los tiempos, a favor de la corriente dominante y en manada, cabe preguntarse por la seriedad y consistencia de los posicionamientos políticos de nuestras figuras públicas. El momento más delicado en este circuito ideológico se da no en el tránsito de las ideas revolucionarias a las socialdemócratas, sino en el de las socialdemócratas a las liberales o conservadoras. Es entonces cuando se consuma un cambio fundamental de valores. La legión de intelectuales que en España han dado ese

paso lo han hecho, en la mayoría de los casos, motivados por los problemas que el terrorismo y el nacionalismo suscitan. El nacionalismo, especialmente, se ha convertido en una verdadera obsesión para muchos de ellos. Preguntado por el problema más grave al que se enfrentan los españoles, Fernando Savater lo tiene claro: “Sin lugar a dudas, y desde hace tiempo, el nacionalismo catalán” [\[13\]](#). Quizá lo sea, quién sabe, pero no está de más recordar que España tiene la segunda tasa de paro más alta de Europa, que se ha convertido en uno de los países más desiguales del continente, que mucha gente ha quedado en la estacada durante la crisis, que hay tramas de corrupción que están erosionando la legitimidad democrática y de las instituciones, *etc.* Nada de todo esto, sin embargo, supera en gravedad al nacionalismo catalán, según la reputada opinión de Savater y de tantos otros que opinan como él, a juzgar por el entusiasmo y la excitación que traslucen cuando se ocupan de Cataluña.

Se ha producido un evidente recalentamiento con el asunto nacionalista. Son muchos los intelectuales que han llegado a la conclusión de que la izquierda está ciega, que contemporiza con el nacionalismo (e incluso con el terrorismo), por lo que hay que desprenderse de anteojeras ideológicas y abordar el problema sin prejuicios, abiertamente, como una cuestión moral en la que el bien se enfrenta al mal. La moralización de la política ha llevado a la adopción de actitudes intransigentes y doctrinarias y a la acusación de indignidad hacia todos aquellos que no compartan sus puntos de vista. Debo reconocer, en forma de autocrítica, que durante algún tiempo me dejé llevar por el vendaval antinacionalista y moralizante, así que un lector con paciencia podrá encontrar algunos artículos míos del pasado que incurren en el tipo de errores que señalo en el capítulo 2. En mi descarga, diré también que fue un periodo no demasiado largo; visto ahora, me doy cuenta de que no tenía aún las lecturas ni los viajes suficientes para advertir las falacias que circulan con mayor frecuencia. En este sentido, a pesar de que algunos de nuestros más destacados intelectuales sigan insistiendo en que el nacionalismo se “cura” viajando o leyendo, intentaré mostrar que muchos de los argumentos que forman parte del repertorio oficial de “antinacionalismo” visceral proceden de una falta de claridad conceptual y de una ausencia de lecturas básicas sobre la relación entre democracia y nación: son ellos quienes deberían desprenderse del casticismo en sus diatribas obtusamente antinacionalistas.

El examen de los debates en torno al terrorismo y el nacionalismo permite

confirmar algunas de las tesis a las que antes me he referido. Así como muchos escritores e intelectuales han desempeñado un papel ejemplar en la denuncia y deslegitimación del terrorismo etarra, luego, cuando han intentado ir más allá, elaborando teorías sobre las causas del terrorismo o estableciendo qué tipo de política antiterrorista es más eficaz, han actuado de forma harto cuestionable. Mientras la denuncia es una cuestión de valores, las teorías y las políticas requieren otro tipo de registro argumental. En España se han confundido y mezclado ambas cosas, de manera que tenemos a un número elevado de personas pontificando sobre el origen del nacionalismo y del terrorismo, sobre cómo tratar políticamente con movimientos nacionalistas y sobre cómo llevar a cabo la política antiterrorista.

El capítulo final trata sobre la crisis económica. En la primera parte del mismo, someto a escrutinio un libro que ha obtenido todos los parabienes posibles, *Todo lo que era sólido*, de Antonio Muñoz Molina [\[14\]](#). El autor defiende tesis que, despojadas de su buen estilo literario, no pueden ser tomadas seriamente, como que la razón por la que a España la crisis le pilló con el pie cambiado fue porque estábamos demasiado absortos en los debates sobre la memoria histórica o que el origen último de nuestra crisis económica reside en la pujanza del nacionalismo en la política española. Sería ciertamente un descubrimiento si España fuera una excepción mundial en cuanto al origen de la crisis: mientras que hay un consenso académico muy consolidado de que el problema se produce por la acumulación de diversos excesos financieros que dan lugar a una sobreabundancia de crédito y a la consiguiente formación de burbujas como la inmobiliaria, Muñoz Molina afirma que en la base de la crisis española está la fragmentación de la soberanía causada por el nacionalismo. Por muy bien que escriba el autor referido, algo muy profundo falla en nuestra esfera pública cuando se lanzan elogios sin fin a un libro que defiende una tesis tan extravagante.

Muñoz Molina, como tantos otros intelectuales, no puede acabar su libro sin aportar su particular lista de reformas para regenerar España. En la segunda parte del capítulo analizo con cierto detalle el reformismo regeneracionista que ha florecido durante la crisis. Se caracteriza por partir de diagnósticos más bien superficiales y concluir con listas de “hay que”: “hay que” reformar la justicia, “hay que” reformar la financiación de los partidos, “hay que” reformar nuestro sistema educativo, *etc.* Se nota claramente un cierto voluntarismo legislativo o regulativo, pues la reflexión sobre cómo vencer las

posibles resistencias sociales o cómo compensar a los perdedores o a los más perjudicados por estas reformas está más bien ausente. El supuesto de partida establece que con una adecuada estructura de incentivos puede modificarse el *statu quo* en la dirección que uno desee. Desde este punto de vista, sería muy sencillo transformar el país, bastaría con diseñar bien los incentivos: si no se hace así, es porque los políticos son torpes o defienden intereses creados. En realidad, una amplia experiencia comparada sobre el grado de éxito de las reformas económicas e institucionales nos dice que las cosas son bastante más complicadas: muchas veces no basta con proporcionar incentivos, pues pueden surgir resistencias sociales de muy diverso tipo, resistencias que tienen que ver con características como los niveles de confianza interpersonal, el nivel educativo de la población, el grado de desigualdad o la existencia de formas jerárquicas de organización social. Estas características pueden provocar fuertes inercias históricas que no siempre cabe superar mediante un uso inteligente del BOE.

Me centro en dos figuras de indiscutible éxito mediático, César Molinas y Luis Garicano, dos economistas que cuando escriben sobre la regeneración política de España dejan de lado los niveles de exigencia y rigor intelectual que practican en su disciplina y acaban realizando un análisis de la política más próximo al de un tertuliano que al de un académico preocupado por su país. Quizá el episodio más divertido sea el éxito que ha tenido el dichoso y vacío concepto de las “elites extractivas”, que utilizo como ejemplo máximo del reformismo gaseoso que nos invade. No es que yo me oponga a las reformas: también a mí me gusta soñar con que tengamos un mercado de trabajo eficiente como el de los países anglosajones, un Estado de bienestar como el de los países escandinavos, un federalismo más cooperativo como el alemán y así sucesivamente. La tarea, sin embargo, es hercúlea y parece reservada a gentes no menos visionarias que aquel doctor Frankenstein que con trozos de cadáveres consiguió dar la vida a su desgraciada criatura.

En nuestro país hay mucha gente con preparación suficiente y ganas de renovar y mejorar el nivel de nuestro debate público sobre la política. Sin embargo, las editoriales, los grandes grupos de comunicación y, por qué no decirlo, gran parte del público siguen prefiriendo al intelectual clásico que además de una escritura eficaz y elegante, con fuerte voluntad de estilo, ofrece juicios apodícticos y temerarios sobre temas complejos. El debate, en lugar de convertirse en un intercambio iluminador de argumentos y datos, se queda en

un pase de modelos, en una feria de vanidades, en la que cada uno considera que la prioridad consiste en reafirmar su personalidad rodeándose de un conjunto de opiniones característico, que marque un estilo propio. Los excesos, las burradas, las extravagancias no solo no debilitan al intelectual, sino que incluso contribuyen a marcar aún más su idiosincrasia en el mundo de las letras.

- [1](#) . Jon Juaristi, “Migraciones”, *ABC*, 7/9/2015.
- [2](#) . El vídeo con la intervención de Savater puede verse aquí: <https://www.youtube.com/watch?v=fd2Cz0F3zf8>. La noticia se cubre en *ABC*, 15/5/2013.
- [3](#) . Véase, por ejemplo, Félix de Azúa, “El mañana es cosa del ayer”, *El País*, 3/3/2015.
- [4](#) . Entrevista en *El Mundo*, 3/12/2011, y en *El País*, 21/4/2015.
- [5](#) . Javier Cercas, “Sin el Rey no habría democracia”, *El País*, 2/6/2014.
- [6](#) . Thomas Piketty, *El capital en el siglo XXI*, Barcelona, RBA, 2015 [2013].
- [7](#) . Javier Varela, *La novela de España. Los intelectuales y el problema español*, Madrid, Taurus, 1999, p. 12.
- [8](#) . Félix de Azúa, *Contra Jeremías. Artículos políticos*, Barcelona, Debate, 2013, p. 17.
- [9](#) . Gregorio Morán, *El cura y los mandarines. Historia no oficial del Bosque de los Letrados*, Madrid, Akal, 2014.
- [10](#) . Escribí una reseña crítica del libro de Morán: “Las miserias de las letras españolas”, *tintaLibre*, 22, febrero de 2015, pp. 32-33.
- [11](#) . Víctor Lapuente, *El regreso de los chamanes. Los charlatanes que amenazan el bien común y los profesionales que pueden salvarnos*, Barcelona, Península, 2015. Escribí una reseña crítica del libro de Lapuente: “La culpa es de los cha-cha-chamanes”, *tintaLibre*, 32, enero de 2016, pp. 18-19.
- [12](#) . Por ejemplo, Jorge Urdanoz, “Sánchez-Cuena y los intelectuales”, *infoLibre*, 19/6/2013. Este artículo fue uno de los motivos que me animaron a escribir este libro.
- [13](#) . Entrevista a Fernando Savater, *El Español*, 15/11/2015, en http://www.elespanol.com/saberes/20151113/78992121_0.html
- [14](#) . Antonio Muñoz Molina, *Todo lo que era sólido*, Barcelona, Seix Barral, 2013.

CAPÍTULO 1

LA MALDICIÓN DEL ESCRITOR

Empiezo a escribir estas líneas el primer domingo de junio de 2015. Antes de ponerme a trabajar en este capítulo, echo un vistazo a la prensa. En la revista dominical de *El País* aparece un artículo de Javier Cercas sobre las elecciones parlamentarias del 7 de mayo en Reino Unido y las posibles analogías que puedan establecerse con la situación política española. Se titula “Oxford y el pesimismo”: el autor nos informa, no sin algo de presunción, que se encuentra realizando una estancia en la famosa universidad británica, siendo ese el pretexto que utiliza para lanzarse a comentar los resultados electorales de aquel país.

Su primera reflexión parte de un pequeño error: compara las dimisiones fulminantes (las de Ed Miliband y Nick Clegg) que se produjeron en Gran Bretaña a raíz de los resultados electorales con las que tienen lugar en España, señalando que el único que aquí ha dimitido ha sido “el denostado Rubalcaba”. Sin embargo, debe recordarse que Alfredo Pérez Rubalcaba (a diferencia de los antes mencionados, o del propio Joaquín Almunia, que dimitió en la noche electoral del 12 de marzo de 2000) se limitó a convocar en mayo de 2014, casi tres años después de su estrepitosa derrota del 20 de noviembre de 2011, un congreso en el que no concurrió a la secretaría general. Una espera de tres años no parece ser exactamente una dimisión fulminante como las de sus homólogos británicos. A continuación viene otro comentario ligero, en este caso sobre los fallos de las encuestas británicas y, por extensión, de las españolas. Pone como ejemplo las elecciones catalanas de 2012, pero olvida mencionar elecciones más recientes en las que los sondeos han funcionado muy bien (como en las andaluzas de marzo de 2015) o razonablemente bien (como en las municipales de mayo de 2015). Para

reforzar su observación de que las encuestas suelen ofrecer resultados absurdos, se remite a una catalana publicada en *El Periódico* (no informa de la fecha), en la que el 10% de los votantes del PP se declararon independentistas, algo que le parece insólito o, literalmente, “memorable”. Se nota que Cercas no está familiarizado ni con el mundo de las encuestas ni con los estudios de opinión pública. Según el Barómetro autonómico realizado por el CIS en septiembre de 2012 (Estudio 2956), el 10% de los votantes catalanes del PP en las elecciones generales de noviembre de 2011 creían que España debería ser “un Estado en el que se reconociese a las comunidades autónomas la posibilidad de convertirse en Estados independientes”; asimismo, un 7% de los votantes del PP en Cataluña opinaba que “Cataluña tendría que ser un Estado independiente”. Esto, lejos de mostrar, como supone ingenuamente Cercas, que las encuestas son disparatadas, refleja algo que los expertos en estas cuestiones saben muy bien y desde hace mucho tiempo: que las correlaciones entre actitudes políticas y voto no son perfectas, sobre todo a propósito de asuntos muy complejos y con consecuencias inciertas como este de la independencia. La sociedad es muy variada, los ciudadanos son muy diferentes y suelen registrarse, sobre todo en medio de un proceso político, antes de que llegue el desenlace definitivo, pequeños porcentajes que chocan con las generalizaciones con las que operamos al pensar en política. Sin embargo, esto no es “culpa” de la encuesta, sino, en todo caso, de los propios ciudadanos, que no siempre tienen las ideas tan claras como los analistas. Ocurre en España y en todos los demás países del mundo. Nada “memorable” hay en ello.

Prosigamos. Tras esta introducción, Cercas se mete en honduras y nos ilustra sobre la “crisis de la representatividad” (sic, ¿no debería ser de la representación?) que sufren “casi todas las democracias” (ahí queda eso), aclarando que las causas de esta crisis son dos: la primera, que dentro de un país no todos los votos valen lo mismo, de manera que hay “partidos que necesitan 400.000 votos para conseguir un escaño, mientras que otros solo necesitan 65.000”. Sin embargo, el sesgo territorial lleva existiendo en España desde las elecciones de 1977 y no es seguro que llevemos arrastrando la crisis de la “representatividad” desde entonces. Durante muchas elecciones esta “disfunción” del sistema electoral, si quiere calificársela así, ha estado presente sin afectar a su legitimidad. Por ello, resulta bastante arriesgado considerar que la crisis política española, que se manifiesta en niveles ínfimos

de confianza en las instituciones y en los partidos, y en una insatisfacción profunda con el funcionamiento de la democracia, se deba precisamente a lo que los colegas oxonienses de Cercas llaman *malapportionment*. La falta de proporcionalidad en la magnitud de los distritos electorales es un problema serio, pero cabe dudar de que sea un determinante fundamental de nuestra reciente crisis. La segunda causa que apunta es la degeneración de la democracia en partitocracia, es decir, “la colonización de los Estados por los partidos”. Sobre esto habría mucho que hablar, pues, al igual que sucede con el peso desproporcional de las provincias en el sistema electoral, el Estado lleva “colonizado” por los partidos mucho tiempo, si bien la crisis de “representatividad” es bastante reciente: los síntomas de pérdida de legitimidad del sistema democrático se acentúan sobre todo durante la crisis económica. En 2007, aunque la colonización del Estado por los partidos estaba ya muy avanzada, la satisfacción de los españoles con la democracia estaba por encima de la de los daneses, según datos del *Eurobarómetro*. Llama la atención que Cercas no se pare a considerar como una posible causa de la crisis de la representación los malos resultados económicos de España, la injusticia en el reparto de los sacrificios o la puesta en práctica de políticas que vienen impuestas o determinadas por instancias supranacionales como la Comisión o el Banco Central Europeo. La pregunta que surge es qué tipo de teorías maneja Cercas acerca del funcionamiento de la democracia para concluir que la causa tiene que ver con las reglas electorales. ¿Conoce Cercas los debates sobre este asunto? ¿Por qué el problema electoral solo se hace visible cuando las condiciones económicas son malas? Si no tiene respuestas bien razonadas sobre estos asuntos, y todo parece indicar que no las tiene, ¿para qué se mete en estos líos? ¿Verdaderamente piensa que tiene una perspectiva original que ofrecer sobre la crisis de la democracia representativa?

Muchas de las afirmaciones empíricas que realiza Cercas en este artículo son inexactas y los argumentos que ofrece, pobres e incompletos. No es una buena justificación recordar que se trata de un artículo de una revista dominical de un periódico: el lector no puede ser menospreciado de ese modo. No cuesta tanto afinar con los datos, documentarse un poco y refinar los argumentos. El artículo no tiene por qué volverse más aburrido. Este tipo de superficialidad en el análisis es, como iremos viendo, una característica muy extendida entre los escritores metidos a comentaristas de la vida pública, lo

que hace todavía más incomprensible la densidad de escritores en los medios.

Como he apuntado en la introducción, uno de los aspectos más llamativos del debate público en España es la presencia protagonista de los literatos. Y no para hablar precisamente de literatura, sino de cuanto asunto se les ponga a tiro, ya sea político, económico, histórico o cultural. Que los escritores hablaran de literatura sería comprensible, pero si llamo la atención sobre su ubicuidad en los medios es por su tendencia irrefrenable a esparcir opiniones sobre los temas más variados. Basta echar un vistazo a los periódicos, en papel o digital, de izquierdas o de derechas, para confirmar esta apreciación. *El País* es el que tiene una mayor saturación de escritores: colaboran de forma regular (o lo han hecho en el pasado) autores como Juan José Millás, Félix de Azúa, Javier Marías, Antonio Muñoz Molina, Fernando Savater, Rosa Montero, Almudena Grandes, Mario Vargas Llosa, Manuel Rivas, Julio Llamazares, Elvira Lindo, el propio Javier Cercas y muchos otros. Por supuesto, si abrimos la búsqueda a colaboradores esporádicos que contribuyen con artículos de opinión, entonces la lista se hace interminable. En los otros medios la presencia no es tan agobiante, pero en las páginas de *El Mundo* puede encontrarse a Antonio Gala, Fernando Sánchez Dragó, Luis Antonio de Villena y Eduardo Mendicutti. En *ABC*, a Juan Manuel de Prada y Gabriel Albiac. En *La Razón*, a Ángela Vallvey y Francisco Nieva. En la prensa de izquierdas también hay escritores: en el *diario.es*, Antonio Orejudo, Rafael Reig, Isaac Rosa y Suso del Toro; en *infoLibre*, Luis García Montero y Benjamín Prado.

En un principio, alguien podría pensar que nada de malo hay en esta proliferación de escritores en los medios. Al contrario, los escritores, por su dominio del lenguaje, merecen tener un papel destacado en el debate público. Dado que su estilo es manifiestamente superior al de periodistas, economistas, académicos, etc., por lo menos que llenen la prensa de buena prosa, parecen pensar muchos.

Un primer elemento para sospechar que hay algo extraño en el espacio que ocupan los escritores en el debate público español consiste en observar qué sucede en otros lugares. Mi impresión es que en otros países el público consideraría anómalo que los literatos se metieran en la refriega sobre la descentralización territorial, el sistema educativo, los procesos de paz, la integración europea, el sistema electoral, la guerra en Oriente Medio y otros muchos temas similares que requieren cierto estudio. Prueben a buscar

escritores que participen en estos debates regularmente desde las páginas de *The New York Times*, *The Washington Post*, *The Guardian* o *The Independent*, por mencionar cuatro periódicos de referencia en lengua inglesa, y díganme cuántos encuentran. Les aseguro que son muchos menos que en España.

¿Quiénes escriben entonces en estos medios anglosajones? Por lo pronto, periodistas. Una diferencia importante con España (o con los países de tradición latina) es que en los países anglosajones las fronteras entre la academia y el periodismo son más porosas: hay muchos periodistas que son verdaderos expertos en ciertos temas y que pueden escribir libros tan profundos y rigurosos como los académicos (y, en ocasiones, más que ellos). Abundan los ejemplos. Uno de ellos es Martin Wolf, quien escribe sobre economía desde las páginas del *Financial Times* y ha publicado recientemente un libro fundamental sobre la crisis económica [15]. Wolf estudió una de las carreras más prestigiosas en Oxford, una combinación de filosofía, política y economía, y luego continuó con un máster económico en el Nuffield College. Tiene, pues, una fuerte preparación intelectual, que pone al servicio de análisis incisivos, claros y rigurosos sobre la marcha de la economía, al margen de que se esté de acuerdo o no con los mismos. Otro ejemplo podría ser Thomas Friedman, el célebre columnista del *The New York Times*, un experto en asuntos internacionales, con opiniones muy controvertidas, y autor de algunos libros de gran éxito como *The World is Flat*, su obra principal sobre la globalización [16]. Friedman tiene también una sólida formación universitaria, lo que le permite escribir con rigor y fundamento, si bien su estilo no deja de ser periodístico. O Jon Lee Anderson, el periodista especializado en conflictos violentos, que ha escrito innumerables reportajes en *The New Yorker*, y autor de una importante biografía sobre Che Guevara. Y muchísimos otros que no menciono por no cansar al lector.

En el mundo anglosajón, además de estos periodistas de primera línea, hay un número importante de personas que andan a medio camino entre el periodismo, la política y la universidad. Son gente que trabaja en *think-tanks*, fundaciones, ONG, institutos, etc., combinando ciertos conocimientos prácticos, teóricos y, sobre todo, una perspectiva no exclusivamente centrada en la coyuntura.

Ante las aportaciones de periodistas especializados, expertos y personas que conocen el terreno, ¿qué pueden ofrecer exactamente los escritores en Estados Unidos o Gran Bretaña? No quiero decir que no les quede hueco, pero

tienen que esforzarse mucho para encontrarlo.

En España la situación es radicalmente diferente. Para empezar, muchos de los periodistas de mayor visibilidad tienen una vocación más literaria que analítica. Su máxima aspiración es llegar a escribir noveladamente sobre la política, como se pone de manifiesto en los libros que publican, preñados de diálogos inventados y descripciones engañosamente precisas. A los autores parece importarles más la anécdota y el detalle que las ideas y la argumentación. El relato queda contaminado por la voluntad de estilo. El resultado puede llegar a ser bastante incómodo para un lector poco comprensivo. Saco un párrafo al azar de un libro típico del género, *Amarga victoria*, de Pedro J. Ramírez:

Tender is the night. La noche está hecha para la ternura de las pequeñas bobadas mientras la tormenta lo bloquea todo. Pero el quitanieves de la actualidad es también hoy demasiado potente. La llegada de los Rato —fuera máscaras— ha puesto el toro en suerte [17].

¡Qué densidad de metáforas! El toro en suerte, el quitanieves de la actualidad, las máscaras, la tormenta. Más Rato: en su biografía política de Aznar, Jorge Herrera e Isabel Durán describen así este entrañable encuentro.

Los tres matrimonios, José María Aznar y Ana Botella, Pedro Arriola y Celia Villalobos y Rodrigo Rato y Gela Alarcó, se conocen en 1983 durante una cena organizada por Rodrigo en el restaurante Viridiana de Madrid. Gela es aún la novia del diputado del PP por Cádiz, pero Celia, nada más echarle el ojo, le dice:

—Esta te caza, Rodrigo. Ahora sí que no tienes nada que hacer. Empieza a comprarte el chaqué porque pronto acabas ante el altar.

—No digas tonterías. ¡Qué tontas sois las mujeres! —responde Rato, uno de los pocos *solteros de oro* del PP [18].

En fin, esta es la profundidad intelectual de mucho libro político en nuestro país. No es que no contenga información, sino que el grueso de la información que se proporciona es perfectamente irrelevante. Se utiliza un tono preciso y

exacto para el detalle superfluo, no para hablar de las situaciones y comportamientos que se pretende analizar. Por descontado, las fuentes no se mencionan, o se mencionan muy vagamente. Las notas, a pie de página o al final, suelen ser inexistentes; y lo mismo sucede con las referencias bibliográficas. Y todo ello en beneficio de la fluidez del relato. Puede que no toda la responsabilidad de la baja calidad de estos productos recaiga sobre los autores, puesto que las editoriales presionan enormemente para que el libro llegue al gran público, lo que supone eliminar toda complicación intelectual a fin de que la historia enganche, que se lea como un thriller y que convierta a los protagonistas en personajes literarios. Qué le importa al lector de dónde haya sacado el autor la información, que los detalles sean una recreación literaria o que los diálogos sean inverificables, siempre y cuando el libro se lea bien y se venda por miles. No sé de dónde sacarán los editores la idea de que el lector español es alérgico a la prosa no literaria y a las notas a pie de página, pero lo cierto es que siempre operan con ese supuesto.

En ocasiones, ese periodismo mezclado con mala literatura puede llegar a arruinar por completo un libro. Creo que esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la última y polémica obra de Pilar Urbano, *La gran desmemoria* [19]. La autora ha ido amasando durante años un gran volumen de información sobre los sucesos relativos al fallido golpe del 23-F gracias a confidencias de gente enterada, confesiones de los protagonistas, informes de inteligencia y otros materiales semejantes. Para cualquier investigador, toda esa información constituye una mina de oro. De hecho, a través de sus páginas, puede ir espigándose, con gran esfuerzo, declaraciones muy tardías de colaboradores próximos al rey Juan Carlos y a Adolfo Suárez que ponen en entredicho aspectos relevantes del relato consensuado y mil veces contado desde los ámbitos del periodismo y la historia. En manos de Urbano, por desgracia, este material empírico se utiliza como combustible con el que alimentar un relato que se quiere novelado y que tiene muy escaso valor literario (“Suárez ha hecho una pausa, un silencio, para que el rey diga algo, pero el rey calla, enfurruñado. Con la punta del mocasín, le da un chute enérgico a un pedrusco y lo lanza lejos”, p. 550). Por supuesto, ese tratamiento novelado, trufado de diálogos e incluso escenas inventadas resta credibilidad a los hechos que se narran, de manera que todos aquellos que están en desacuerdo con las tesis de la autora pueden desacreditarlas fácilmente apelando a la mezcla de ficción y realidad y a la falta de sistematicidad que recorre el libro entero.

Quizá sea un juicio errado, pero tengo la impresión de que en un país tan literario como el nuestro hay más periodistas que aspiran a escribir novelas que a escribir buena crónica política o ensayo periodístico. Así, son muchos los periodistas que se han atrevido con la novela, hasta Hermann Tertsch, Isabel San Sebastián y José María Carrascal lo han hecho; algunos periodistas han acabado incluso convirtiéndose en escritores profesionales (Julia Navarro, Arturo Pérez-Reverte, Rosa Montero). En los últimos tiempos, se ha puesto especialmente de moda que periodistas de televisión den el paso de publicar novela (casi siempre sentimental), con buena acogida entre el público lector.

Hay, desde luego, otros periodistas cuya aspiración es más ensayística que literaria. En este caso, se agradece la ausencia de diálogos inventados y de adjetivos coloridos, pero es a cambio de otro tipo de vicios, quizá aún más insoportables: la generalización sin base, la afirmación campanuda, la reproducción de lugares comunes, la obsesión con el tema de España... Lo más grave, sin duda, es la impresión global de arbitrariedad, en el sentido de que el autor podría haber dicho justamente lo contrario de lo que defiende sin necesidad de alterar demasiado la base empírica del libro, que suele ser más bien escuálida. Yo entiendo que para escribir, por ejemplo, un ensayo de pensamiento no sea imprescindible un trabajo empírico exhaustivo (importa más la imaginación, la desenvoltura intelectual y un buen conocimiento de la tradición filosófica), pero si hablamos de ensayo político es preciso hacerse cargo de la realidad con un detalle que resulta ajeno al ensayismo periodístico español medio. El tema dominante es el de los “males de la patria” y el enfoque suele ser el de recuperar unos ideales siempre traicionados por una clase política que no está a la altura de las circunstancias. En el capítulo final tendré oportunidad de comentar algunos ensayos recientes sobre la crisis económica y política que azota al país, por lo que no diré nada más en este momento.

Ante las graves limitaciones del libro periodístico en España, se abre un hueco que algunos otros pueden querer llenar. En principio, podrían haber sido los académicos, pero hay varios obstáculos que acaban impidiendo el desembarco universitario. Si bien es cierto que en los países latinos el académico interviene en los debates públicos con más frecuencia que su homólogo anglosajón, no puede con todo evitar el pago de un cierto coste reputacional. La gran visibilidad que se adquiere a través de la presencia

mediática tiene como contrapartida el desdén de los colegas, pues se considera que alguien que participe demasiado a menudo en la prensa y los medios acaba pensando y escribiendo como un “tertuliano”; es decir, alguien que olvida las enseñanzas que puede proporcionar el saber académico a la hora de entender la realidad y pasa a desarrollar ocurrencias y comentar acontecimientos coyunturales sin añadir valor alguno. Dentro del campo de conocimiento al que pertenezco, las ciencias sociales, es frecuente encontrar profesores universitarios que han abandonado todo compromiso con la investigación y se dedican a cultivar la columna de opinión, la conferencia magistral, el coloquio, la mesa redonda, la entrevista, así como el ensayo elegante pero más bien vacío, sin aporte de ideas originales, pero que sin embargo recibe grandes elogios en los suplementos culturales de los periódicos. Por supuesto, el profesor asimilado al periodista (una suerte de renegado a los ojos de la comunidad universitaria) suele defenderse haciendo mofa del amaneramiento esotérico del académico, de su incapacidad para escribir en un lenguaje llano y directo ideas que interesen a un público culto y no solamente a una pequeña comunidad de investigadores que comparten códigos estilísticos y supuestos teóricos que resultan extraños o incomprensibles a los demás.

El profesor universitario se encuentra así ante un dilema difícil de resolver; se debate entre transformarse en periodista, accediendo a la “fama” que conlleva ser leído por una masa relativamente amplia de lectores, o mantenerse en su torre de marfil haciendo una investigación cuya relevancia social es dudosa. Una forma habitual de alcanzar un equilibrio entre estos dos extremos consiste en culminar una trayectoria investigadora brillante y exitosa con una implicación creciente en el debate público. Este es el modelo que, por ejemplo, han seguido en Estados Unidos economistas como Paul Krugman o Joseph Stiglitz, quienes ya no necesitan seguir demostrando sus habilidades académicas y pueden permitirse el lujo de intervenir cuanto quieran en los medios. En España, desgraciadamente, esa evolución es menos frecuente; la tendencia dominante es la del profesor que, desde muy pronto, antes de haber demostrado capacidad alguna para llevar a cabo una investigación fructífera, se deja arrastrar por la tentación mediática y acaba escribiendo como un tertuliano, más culto que la media y mejor informado sin duda, pero tertuliano al fin y al cabo. Hay casos especialmente extremos, como el del sociólogo Amando de Miguel, discípulo en origen de Juan Linz, que produjo una

investigación interesante y rigurosa en la fase final del franquismo y poco a poco fue deslizándose hacia el puro opinionismo. Lo más frecuente es que el académico metido en los medios evolucione hacia la nada intelectual: un estilo pulido y sugerente, una exposición organizada, una defensa de lugares comunes y tesis que no desentonen ni chirríen en el *establishment*, en fin, el mejor método para garantizar que no dejen de llegar invitaciones a los más variados actos y proyectos.

No resulta sorprendente, pues, que los escritores aprovechen el vacío que dejan periodistas y académicos para ganar protagonismo a través de su colaboración constante en los medios de comunicación. Por lo demás, se trata de una tradición bien asentada en España, que se remonta probablemente a la generación del 98, cuando los escritores irrumpieron con fuerza en el debate sobre la decadencia del país. Es la época en la que surge el intelectual contemporáneo; de hecho, el año de referencia de esta generación coincide con el del célebre “J’accuse” de Zola en Francia. El escritor salta a la primera línea de la política, ya sea para denunciar abusos de poder o para proponer un camino de salvación de la patria. En España, la característica esencial que se manifiesta en los escritores del 98 preocupados por la política es un acusado moralismo. Andreu Navarra, en su estudio sobre el regeneracionismo, cita este texto elocuente de Unamuno: “Todos estamos mintiendo al hablar de regeneración, puesto que nadie piensa en serio en regenerarse a sí mismo” [20]. Ante la incapacidad para pensar en términos políticos sobre la solución a los problemas económicos y sociales del país, el escritor no ve otra solución que una transformación íntima de la persona: la reforma de la nación empieza por uno mismo. En la práctica, esto supone que el escritor acabe proponiéndose como ejemplo inspirador para la ciudadanía. Se trata del intelectual insobornable que se enfrenta al Estado, que repudia a los politicastos y a quien asquea la mediocridad de la vida parlamentaria. De ahí la importancia que adquiere la educación como instrumento clave de regeneración individual.

El moralismo del escritor se construye sobre la desesperación que siente ante su país y sus conciudadanos, que viven aborregados e imposibilitan con sus actitudes y vicios el progreso de la nación. Surge aquí una dialéctica de amor-odio con España que está presente desde hace ya más de un siglo y que se traduce en un ejercicio algo masoquista de “psicología de los pueblos”. Ortega, en su conferencia sobre la vieja y la nueva política, habla del pueblo español “más como esforzado que inteligente”, sumido en un interminable

letargo. En una carta privada escrita durante su estancia alemana, en 1907, había ido más lejos, afirmando que “los españoles han sido siempre una raza simiesca, un arrabal de humanidad” [21]. En 2015, Javier Marías nos dice que España es un país “adanista e idiota”: “A veces tengo la sensación de que este es un país definitivamente idiota, en la escasa medida en que puede generalizarse, claro” [22]. Unos meses antes había empezado así otro artículo: “Es sabido que este es un país deliberadamente desmemoriado, por la cuenta que le trae. También que es un país de extremos, y que muchos de sus habitantes pasan de uno a otro sin efectuar el recorrido, sin que los veamos desplazarse. Están en un lugar y de pronto en el contrario, sin explicaciones, sin evolución, sin proceso” [23]. Y se cierra con esta sentencia: “España siempre llega a todo tarde y con olvido”. Por supuesto, frente a todas estas debilidades, fracasos y corrupciones de España, se alza el escritor lúcido e incómodo al que no le tiembla el pulso en la denuncia de los vicios nacionales.

En un libro inefable de recopilación de artículos publicados en *ABC*, Juan Manuel de Prada, quien propone un concepto nuevo para entender nuestra sociedad, el concepto de “demogresca”, ofrece esta caracterización completamente tópica del pueblo español:

La imagen de los españoles como pueblo reñidor, enzarzado en querellas ancestrales, es habitual en nuestra literatura; y las guerras que jalonan nuestra historia parecen confirmar esta caracterización. En las últimas décadas, cuando parecía que, con el advenimiento de la democracia, el cainismo y la división social serían al final vencidos por una era de paz y delicias universales, descubrimos que la conflictividad sigue siendo, paradójicamente, la nota distintiva de nuestra sociedad [24].

Mientras que el pueblo español, pese a todas sus deficiencias, conserva siempre una posibilidad de redención a través de una reforma de las actitudes que rescate ese poso de gallardía que queda en el fondo de su espíritu, la clase política no tiene arreglo ninguno. La impugnación de los políticos debe hacerse en los términos más duros y tajantes posibles. Demos la palabra, de nuevo, a Javier Marías:

Esa es la manera en que se ejerce normalmente el poder en España en la actualidad —puro caciquismo—, y más si se posee mayoría absoluta. ¿O no salta a la vista que es la forma de gobernar del PP, de CiU, del PNV, del PSOE, con distintos grados? ¿No es evidente que Rajoy se dijo, al ganar las elecciones: “Dispongo de cuatro años para hacer lo que me dé la gana. No me importa incumplir mis promesas y engañar, me trae sin cuidado a quién dañe y a cuántos, el perjuicio irreversible que cause a mi país. Voy a poner España a mi gusto y al de los míos, en contra de la opinión de los médicos, los profesores, estudiantes y rectores, los jueces y fiscales, los pensionistas, los trabajadores, las clases medias, los pequeños empresarios, los artistas, los científicos, los investigadores, los parados, los dependientes, las mujeres y no digamos los intelectuales. Ya se me ocurrirá un nuevo fraude, cuando toque volver a votar”? [\[25\]](#)

Frente a estos políticos, el intelectual, prosigue Marías, tiene la obligación de señalar “sus abusos y sus imbecilidades, su cinismo y su desfachatez, sus razonamientos grotescos que ya no tratan ni de adecentar”.

Quien más lejos ha ido en el vituperio de la clase política ha sido otro escritor, Arturo Pérez-Reverte, verdadero azote de los representantes y, como no podía ser de otra forma, amigo de Javier Marías. En un artículo publicado en 2009, con el sutil título de “Esa gentuza”, Pérez-Reverte nos hacía partícipes de sus reacciones íntimas al pasar delante del Congreso de los Diputados:

Hay coches oficiales con sus conductores y escoltas, periodistas dando los últimos canutazos junto a la verja, y un tropel de individuos de ambos sexos, encorbatados ellos y peripuestas ellas, saliendo del recinto con los aires que pueden ustedes imaginar. No identifico a casi ninguno, y apenas veo los telediarios; pero al pájaro se le conoce por la cagada. Van pavoneándose graves, importantes, seguros de su papel en los destinos de España, camino del coche o del restaurante donde seguirán trazando líneas maestras de la política nacional y periférica. No pocos salen arrogantes y sobrados como estrellas de la tele, con trajes a medida, zapatos caros y maneras afectadas de nuevos ricos. Oportunistas advenedizos que cada mañana se miran al

espejo para comprobar que están despiertos y celebrar su buena suerte. Diputados, nada menos. Sin tener, algunos, el bachillerato. Ni haber trabajado en su vida. Desconociendo lo que es madrugar para fichar a las nueve de la mañana, o buscar curro fuera de la protección del partido político al que se afiliaron sabiamente desde jovencitos. Sin miedo a la cola del paro. Sin escrúpulos y sin vergüenza. Y en cada ocasión, cuando me cruzo con ese desfile insultante, con ese espectáculo de prepotencia absurda, experimento un intenso desagrado; un malestar íntimo, hecho de indignación y desprecio. No es un acto reflexivo, como digo. Solo visceral. Desprovisto de razón. Un estallido de cólera interior. Las ganas de acercarme a cualquiera de ellos y ciscarme en su puta madre [\[26\]](#).

Debe reconocerse que Pérez-Reverte fue un adelantado a su tiempo, pues su prosa en 2009 anticipaba la oleada de demagogia antipolítica que se ha enseñoreado de buena parte de la sociedad española, hasta el punto de que en su artículo se refiere a los políticos como una “casta”, expresión que luego popularizaría Podemos y que habían adoptado originalmente dos periodistas italianos en un libro publicado en 2007. El tono del artículo recuerda al de un borracho que continúa su perorata cuando todos los parroquianos ya han regresado a sus casas y el bar está a punto de cerrar. Cualquier atisbo de razonamiento queda cegado por el estilo luciferino de su escritura. En las redes sociales, donde el señor Pérez-Reverte es muy activo, ha dejado perlas como esta: “Somos un país de golfos y de gilipollas. Por cada golfo, 100.000 gilipollas”.

No está de más recordar que Pérez-Reverte, que además de periodista y escritor de éxito mundial es académico de la RAE, ha sido condenado en firme por haber plagiado el guion de una película de cine, *Gitano*, habiendo tenido que desembolsar la cantidad de 212.528,94 euros al plagiado [\[27\]](#). Ha habido otras denuncias contra él, aunque no han acabado en los tribunales. Por ejemplo, la escritora mexicana Verónica Murguía declaró que uno de sus artículos había sido copiado por Pérez-Reverte, quien llegó a disculparse [\[28\]](#). Cabría esperar algo más de humildad y prudencia en los juicios del escritor sobre los políticos, pues tan aberrante como que un político robe es que un literato plagie. En cierto modo, el caso de Pérez-Reverte confirma por una vía inesperada sus tesis tremendistas, toda vez que demuestra la impunidad que

imperera en el mundo de las letras, tanta como en el mundo de la política: que la RAE tenga entre sus académicos a un condenado por plagio es motivo de pasmo [29].

El matonismo verbal de Pérez-Reverte es ciertamente un ejemplo extremo, pero no tan infrecuente. Este tono grueso aplicado a la política se encuentra por doquier. Sin ir más lejos, Félix de Azúa ha hecho afirmaciones muy parecidas durante muchos años en artículos publicados en *El País*, consistentes en una impugnación con tintes apocalípticos de los partidos y la clase política. En la introducción que él mismo escribió para un volumen que reúne sus artículos de prensa, presenta este panorama de la política que con seguridad hará las delicias del maestro Pérez-Reverte:

Los políticos profesionales están demasiado corrompidos o dependen tan exageradamente de sus privilegios y sueldos que no van a resolver la situación, sino a prolongarla cuanto puedan. A semejanza de sus colegas italianos, no tienen el menor interés en que nada cambie. Algunas regiones, como Andalucía o Cataluña, arrastran una población cautiva de la corrupción tan enorme como para garantizar la perpetuación de los corruptos en el poder. Y en las zonas más agrestes y reaccionarias, como en el País Vasco, los oligarcas locales han llegado a la conclusión de que es el momento de quedarse con la finca [30].

En un artículo de *El País*, el propio Azúa parece consciente de sus excesos, pero no tanto como para habernos evitado sus juicios sumarísimos:

La así llamada “crisis económica” ha servido para convencernos de que nuestra clase dirigente no solo es incapaz de resolver problemas monstruosos como el del paro, sino que también es incapaz de resolver un crucigrama un poco grande. Evidentemente, ya estoy oyendo a unos cuantos políticos, muchos de ellos amigos míos, que se quejan de esta generalización arbitraria (¿y facha?). De acuerdo, este artículo es injusto con muchos políticos [31].

¿Ustedes entienden algo?

Toda esta prosa tronitronante, cargada de testosterona, de espíritu viril y

faltón, es un reflejo perfecto de la retórica latina que con tanta agudeza analizó Diego Gambetta en su ensayo sobre lo que llama la cultura del “¡claro!”, término con el que se refiere al “machismo discursivo” tan extendido en el sur de Europa y en Latinoamérica [32]. El punto de partida de la cultura del “¡claro!” es la expresión de una opinión tajante y contundente, rotunda, que no deje resquicio a la duda. Por ejemplo, que los políticos son todos unos lerdos y unos zascandiles. Quien comienza así un debate ya tiene mucho ganado. A ver quién se atreve a negarlo y, sobre todo, a ver cómo se refuta una opinión tan acabada como esta. ¿Bastará mostrar algún caso concreto de un político que no nos parezca un lerdo? ¿Y si a nuestro interlocutor el ejemplo que ofrecemos le parece precisamente el colmo de la estulticia? ¿No quedaremos entonces en el más espantoso ridículo ante el sarcasmo con el que nos obsequiará el macho discursivo? ¿Por dónde empezamos a desmontar una tesis así?

Gambetta distingue dos tipos de cultura intelectual, la analítica y la holística. La analítica se basa en ir construyendo un argumento mediante pequeños elementos, algunos de los cuales derivan directamente de los hechos, de la realidad, mientras que otros se van superponiendo según las reglas de la inferencia lógica. Los argumentos en una cultura analítica tienen una preparación lenta, pues requieren pericia en la cuestión que se esté tratando y cierta habilidad intelectual para ir uniendo las diversas partes que componen el razonamiento. Por el contrario, en la cultura holística se supone que el conocimiento constituye un bloque compacto, sin fallas, de manera que quien interviene en la esfera pública tiene opiniones fuertes sobre todo, sea cual sea el objeto del debate. Dichas opiniones se fundamentan en la autoridad de quien las emite. La autoridad epistémica, en este caso, procede de la capacidad para imponer las ideas en el debate, estableciendo un planteamiento de la cuestión que le resulte favorable. Por supuesto, la autoridad es tanto mayor cuanto mayor sea el desparpajo y la osadía con la que se presenten las opiniones.

En la cultura holística, el debate se entiende en términos agónicos, como si fuera un pugilato. Lo que se busca es destrozar al contrario, arrinconarlo y arrearle hasta dejarlo KO. Por eso, el principio supremo establece que no se debe retroceder nunca, pues revelaría debilidad, flojera, falta de convicción. No podemos hacer concesión alguna al rival. No hay margen para la revisión o la rectificación. En cualquier combate cuerpo a cuerpo, las ideas y los

argumentos ceden ante el ataque personal. La descalificación del contrario se transforma en el arma más poderosa para ganar el debate. Recibir un golpe, es decir, admitir algún punto débil en la opinión que se defiende, conlleva de inmediato una pérdida de autoridad intelectual. De ahí que no sea raro que cuando a uno de estos machos discursivos se le muestra la debilidad de su posición responda elevando el tiro, es decir, reafirmandose y aun endureciendo más su tesis y, ya de paso, faltando al otro.

Un elemento esencial en esta concepción agónica del debate es la erudición. El manejo de nombres ilustres, obras clásicas, citas, antecedentes históricos e incluso anécdotas forma parte del armamento intelectual con el que imponerse al otro. En este contexto, un fallo de conocimiento puede acabar arruinando el prestigio del autor, pues los rivales se le echarán encima y lo ridiculizarán hasta el final de sus días. La valoración social del saber enciclopédico y libresco hace que nuestros intelectuales sean generosos con el “nombreo”, pues deben dar cuenta de sus credenciales eruditas. Personalmente, siempre me ha impresionado lo leídos y cultos que son los intelectuales en España comparados con sus colegas en otras latitudes, quienes han tenido que leer de forma más instrumental, al servicio de una investigación o de un proyecto específico, y no por el propósito de acumular conocimiento. Es más, en ocasiones he podido constatar que en encuentros académicos en los que se juntaban pensadores de lugares muy diversos, los españoles e italianos ganaban con claridad en cuanto a familiaridad con distintas tradiciones filosóficas, siendo sus saberes más amplios, aunque luego su contribución intelectual, entendida como aportación original y novedosa, fuera mucho menor.

En la cultura holística, el prestigio del conocimiento, del dominio de autores y corrientes es consecuencia del gran valor que se otorga al ensayo y del poco aprecio que se siente hacia la investigación. No negaré que puede haber un cierto grado de solapamiento entre ensayo e investigación, pero es preciso subrayar sus diferencias. El ensayo deja un hueco amplio para las ideas subjetivas del autor, pero a un alto precio: este debe demostrar, para ser tomado seriamente, que cuenta con una perspectiva vasta y exhaustiva sobre la cual construir su propia opinión. Debido a su personalismo, el ensayo no es un género acumulativo: suele tener sello propio, el autor normalmente demuestra voluntad de estilo y considera que sus ideas no son conjugables con las de sus colegas. La investigación, en cambio, exige una obediencia casi ciega al

método científico: cada afirmación debe venir respaldada por datos y las respuestas a las preguntas han de formularse en términos de hipótesis. Aunque la formulación de hipótesis y la búsqueda de datos con las que contrastarlas puedan entrañar un alto grado de creatividad, los resultados deben ser reproducibles por cualquier otro investigador que se ponga manos a la obra. En la cultura analítica, la investigación tiene al menos tanto prestigio, si no más, que el ensayo. Esto se nota mucho en la esfera pública, donde se valora que una tesis o una posición política vengan avaladas por investigación previa. Evidentemente, el método científico no garantiza que accedamos a una verdad inapelable y definitiva, pero sí nos permite tomar decisiones y argumentar desde una base más sólida que la ocurrencia o el juicio estrictamente subjetivo.

Llama la atención en nuestro debate público que sus participantes no solo no hayan hecho nunca investigación, lo cual es completamente normal, sino que ni siquiera la conozcan o la hayan leído en alguna ocasión. Por supuesto, han podido leer exposiciones de un tema, manuales que resumen opiniones, tratados, compendios y refritos, pero todo eso es algo bastante diferente de la investigación. Esta impone una disciplina intelectual que, si se traslada adecuadamente al ámbito de la esfera pública, obliga a refinar los argumentos y a no dar por bueno el primer dato que se ofrezca. En el capítulo último veremos que hacer investigación no es garantía de nada: como tendré ocasión de argumentar, grandes investigadores del campo de la economía dejan en suspenso sus exigencias de rigor cuando deciden opinar alegremente sobre asuntos políticos. No obstante, aunque no sea una condición suficiente, el empleo de la lógica y el análisis de datos para tratar de explicar los fenómenos que nos interesan resulta un ejercicio más que saludable a la hora de opinar sobre asuntos públicos.

El tipo de cultura genera también diferencias interesantes en la personalidad del intelectual. En general, la cultura holística fomenta la aparición del intelectual prepotente, que mira con desdén a quien no es conocido o no tiene vínculos con él y con sus pares. A lo largo de mi vida académica he tenido la suerte de interactuar con algunos grandes pensadores e investigadores de nuestra época en el ámbito de las ciencias sociales y del pensamiento político. Alguno de ellos era un vanidoso insoportable, sin duda, pero la mayoría me parecieron personas accesibles, dispuestas a escuchar y, más importante, con ansia de seguir aprendiendo, siempre alerta sobre lo que otros tenían que decir

y conscientes de sus lagunas y de lo mucho que no sabían. No quiero resultar pedante o presumido, así que evitaré los nombres, salvo por una anécdota: por razones totalmente azarosas, en una ocasión me tocó desayunar con Eric Hobsbawm en una institución universitaria inglesa, en el año 2002, y me sentí totalmente cohibido y hasta aterrorizado al lado de una eminencia como aquella. Sin embargo, dirigió la conversación con soltura y relajó el ambiente con múltiples preguntas sobre España y la universidad. Nada que ver con el intelectual español, que suele ser un personaje soberbio, que marca las distancias, dejando clara la diferencia de posición de cada uno, y se da unos aires de importancia inexplicables, especialmente si escribe con regularidad en los medios. Salvo que se le pregunte sobre su obra o sus ideas, hablará con fastidio por considerar que su interlocutor no está a su altura. Comparando sin embargo los méritos y contribuciones de unos y otros, resulta realmente chocante que sean los figurones españoles, cuya contribución al saber suele ser más bien magra, quienes se comporten con esa soberbia. A mi juicio, no se trata tanto de un vicio de personalidad como de la consecuencia lógica de la práctica de la cultura holística.

En la cultura holística no se busca el mejor argumento, el de mayor coherencia lógica o el que cuente con un respaldo empírico más sólido. El debate no gira en torno a los argumentos, sino a las personas y su obra. Estas personas son los intelectuales, que en muchos casos suelen ser escritores. El escritor es más que su obra literaria; se rodea de todas sus intervenciones públicas, configurando un sello personal, un estilo propio, unas ideas de marca reconocible. El público está pendiente de la última aportación de Azúa, Marías, Vargas Llosa o Cercas, espera impaciente que el escritor de turno se defina, tome partido en una contienda, ya sea sobre si deben prohibirse los toros o si es conveniente celebrar un referéndum en Cataluña. Surge así el figurón, el intelectual famoso y reconocido, que en las entrevistas afirma que ya solo le gusta releer a los clásicos y que se siente desengañado por el presente, siempre muy por debajo de sus expectativas. Muchos de ellos offician de “intelectual melancólico”, expresión que ha utilizado Jordi Gracia en su imprescindible panfleto sobre lo que llama “el síndrome del narciso herido” [\[33\]](#). Se trata del intelectual que estila el lamento permanente sobre la pérdida de genio, la ausencia de grandes creadores, la banalidad cultural del mundo contemporáneo y que, por mucha atención y reconocimiento que reciba, sigue considerando que no se le hace caso suficiente. La realidad le provoca mal

humor y siempre aparece enrabiado y cascarrabias.

Un ejemplo perfecto de la actitud del intelectual holístico es su queja recurrente sobre la decadencia de la educación: los jóvenes ya no leen, no aprenden a escribir, la universidad se ha transformado en una pesadilla burocrática, se castiga el pensamiento y se premia la producción industrial de artículos académicos que solo interesan a cuatro infelices mal pagados.

Félix de Azúa publicó recientemente un artículo apocalíptico sobre la universidad española [\[34\]](#). Vean uno de sus párrafos:

La Universidad está tan corrompida como las finanzas, los partidos o los sindicatos: es una de las instituciones más corruptas del conjunto institucional español. Por esta razón la enseñanza española es la que recoge la más baja calificación en todo el conjunto europeo, un suspenso que se sucede año tras año con gran regocijo de los partidos políticos.

Azúa debe tener un sensor especial que le permite comparar corrupciones entre instituciones y organizaciones muy diversas. Pero más sorprendente todavía resulta la afirmación de que la “enseñanza española es la que recoge la más baja calificación en todo el conjunto europeo”: ¿de dónde ha sacado el dato? Si Azúa está pensando en los resultados del Informe PISA, España no es el peor país europeo: según los datos de 2012, España sale prácticamente igual que Italia y por encima de Suecia, Croacia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia y Lituania [\[35\]](#). La puntuación española en matemáticas es 484 (494 es la media de la OCDE) y en comprensión lectora, 488 (la media de la OCDE, 496). Según la metáfora utilizada por Julio Carabaña, nuestro experto más reconocido en educación, lo que los resultados de PISA indican es que España llega a la meta dentro del pelotón, con diferencias de unos pocos segundos entre los primeros y los últimos del grupo. Por lo demás, la semblanza que hace Azúa de la universidad es de un simplismo grosero; no se hace cargo de la evolución positiva que se ha producido en muchas universidades y departamentos españoles, que hoy día funcionan según criterios de calidad y cuyos miembros publican a niveles parecidos al de países más desarrollados que el nuestro [\[36\]](#). Otra cosa es que ese tipo de universidad más analítica sea una completa desconocida para el macho discursivo Azúa.

Otro de nuestros expertos en educación, el sociólogo José Saturnino Martínez, ya llamó la atención en 2008 sobre la superficialidad con la que los escritores opinan sobre este tema, quienes se basan más en anécdotas y en experiencias personales que en un examen de los datos disponibles [\[37\]](#). Martínez se refería a algunas afirmaciones tremendistas de Antonio Muñoz Molina, quien vuelve sobre este tema con cierta frecuencia; en un artículo reciente en el suplemento cultural de *El País* nos dejaba esta perla: “El analfabetismo unánime sigue siendo la gran ambición de la clase dirigente y de la clase política en España” [\[38\]](#). Qué frase, es como para esculpir en piedra. Sin embargo, este diagnóstico parece incluso medido al lado de otros opinantes: Gabriel Albiac, por ejemplo, es aún más catastrofista que Azúa y Muñoz Molina juntos. Albiac lleva tiempo obsesionado con la LOGSE, la ley educativa que aprobó el Gobierno socialista en 1990. El registro es muy parecido al de Azúa y Muñoz Molina, aunque los supera en la hipérbole:

De todos los posibles modelos de enseñanza, la LOGSE impuso el más aniquilador. El que condena a muerte a la mayoría más desposeída. El aprobado automático (“promociona por imperativo legal”) era la fórmula. De acuerdo con tal dislate, todo español nacía con las disciplinas escolares aprobadas. Ni un profesor podía suspender a un alumno, ni mucho menos hacerle repetir curso. En su bárbara jerga: el alumno “promocionaba” por el hecho de existir. La enseñanza secundaria completó su colapso. No se podía ya decir que fuera mala. No existía. Los Institutos se trocaron en *parkings*. La enseñanza laboral —que hubiera cubierto un amplio sector del mercado de trabajo— fue declarada “clasista”. Y la igualdad social se materializó en igualdad de destino para todos: paro [\[39\]](#).

Los malvados socialistas no deterioraron el sistema educativo de enseñanza media; sencillamente, lo suprimieron. Se mantuvo el simulacro de que hubiera profesores y estudiantes, pero en realidad los institutos eran un *parking* vigilado de adolescentes embrutecidos. No parece que este sea el tono más constructivo para analizar los resultados de una reforma legal educativa. Martínez ha mostrado la cantidad de prejuicios errados que hay detrás de estas críticas apocalípticas sobre la LOGSE. Por ejemplo, basándose en los datos sobre comprensión lectora de estudiantes de la OCDE, revela que los

licenciados españoles que se formaron con la LOGSE no tienen menos comprensión lectora que los licenciados que se “libraron” de la misma [\[40\]](#). Pero este de la educación es uno de esos asuntos en el que los prejuicios están tan asentados que la realidad pasa desapercibida. Como sabemos, el primero en denunciar la decadencia de la educación fue Sócrates en su polémica con los sofistas y desde entonces el sistema no ha hecho más que empeorar, así que imagínense en qué estado nos encontramos. La mayor parte de las veces, la impresión de que los jóvenes saben cada vez menos y están peor preparados es un mero efecto biográfico, pues mientras los estudiantes que entran en la universidad siguen teniendo 17 o 18 años en el comienzo de cada curso académico, quien valora sus conocimientos es, sin embargo, cada nuevo curso un año más viejo, con un mayor caudal de sabiduría y experiencia. Pero que él se haga más sabio no significa que los jóvenes se vuelvan más necios... Véanse si no estas palabras impagables de Luis Antonio de Villena:

Cuando yo terminé el bachillerato tenía un nivel cultural superior al que tienen los que ahora salen de la universidad. Al final del franquismo había un nivel cultural superior al de hoy. Es un poco triste, pero es verdad. La enseñanza es hoy muy mala y los gobiernos tanto de derechas como de izquierdas han destruido la vida universitaria, la han convertido en una cosa de pacotilla [\[41\]](#).

Juan Manuel de Prada ha ido más lejos que nadie y considera que “pocos instrumentos han sido más beneficiosos para la formación de varias generaciones de españoles como aquellos inolvidables cuadernos de caligrafía Rubio. [...] Al expulsar la caligrafía de las escuelas, no solo hemos renunciado a una belleza quizá perdida para siempre, también hemos contribuido a la difuminación del mundo que nos rodea” [\[42\]](#). Frente a las virtudes de la caligrafía, hemos caído en el papanatismo lingüístico: De Prada arremete contra la enseñanza bilingüe que se ha impuesto en buena parte de la enseñanza pública madrileña, “fruto de la admiración idolátrica y gilipollesca que nuestros politiquillos profesan a lo anglosajón (y, en especial, a lo yanqui)” [\[43\]](#). En fin, casticismo en estado puro.

En la cultura analítica, todo funciona de manera muy distinta. Sobre todo, es más pluralista: hay más voces, más contribuciones puntuales a cargo de personas que en algún asunto tienen algo específico que ofrecer. Esto significa

también que si alguien escribe cosas sin interés, su presencia en la esfera pública puede ser efímera, siendo desplazado por otros que ofrezcan ideas más provechosas. Aunque pueda haber elementos de impunidad, esta es menor que en la cultura holística, donde un escritor que haya alcanzado la fama puede pasarse años publicando en prensa artículos de calidad ínfima sin que se resienta demasiado su reputación y sin que el periódico prescindiera de sus colaboraciones. Esta es una forma de impunidad máxima, muy frecuente en los países latinos. Yo no sé cuántos artículos malos tiene que escribir Félix de Azúa sobre política antes de que alguien reconsidere su talento como articulista. De hecho, en conversaciones que he tenido sobre estos asuntos con gente muy diversa, la reacción con la que me encuentro es casi siempre la disculpa: primero te dan la razón, admitiendo que el autor en cuestión anda perdido, pero a continuación añaden que cómo vas a criticar a un autor que ha escrito novelas y ensayos tan valiosos; puede que su trabajo periodístico no sea lo más brillante de su producción, pero es absurdo meterse por ello con él, tiene una obra abrumadora, ya sabes que por lo demás le gusta provocar y llamar la atención, pero es que él es así, etcétera. En fin, bulas con las que consolidar el principio de autoridad por encima del rigor intelectual.

En la cultura holística, el debate público gira, pues, en torno a grandes personalidades que ocupan posiciones protagónicas y sobre las cuales se produce una división entre fans y detractores incondicionales. Queda muy poco espacio para la crítica razonada, ya que, en general, ante cualquier juicio negativo, el destinatario del mismo lo entiende como fruto del resentimiento, la envidia o el sectarismo ideológico. Se trata de una competición de egos, de gente con aires de importancia, que curiosamente no entran casi nunca en el cuerpo a cuerpo. Se pueden lanzar entre ellos alusiones más o menos veladas, y en ocasiones hasta algún denuedo, pero rara vez entrarán en un debate profundo en el que se atengan al intercambio de argumentos y datos. Estos intelectuales suelen cumplir a rajatabla la regla de no citar por su nombre a un crítico o a un rival. Preferirán recurrir a fórmulas del estilo de “hay quienes en España piensan que...”. Pueden ser varios motivos los que lleven a este ninguneo, entre otros despreciar a quien haya expresado la opinión negativa, así como evitar que el debate continúe. En este libro he procurado evitar esta práctica tan ridícula, mencionando a los escritores e intelectuales por su nombre y apellido, no con la esperanza de que me respondan, cosa que no sucederá, sino por respeto al lector, que no tiene por qué andarse con

sobrentendidos. Es una lástima, en este sentido, que Gracia, en *El intelectual melancólico*, siga a rajatabla esta forma de escritura para iniciados, sin querer molestar a los aludidos a quienes tiene en mente.

Llegados a este punto, creo que son precisas algunas aclaraciones sobre la crítica que estoy realizando a los escritores que intervienen en la esfera pública con sus opiniones sobre la política y la sociedad. En primer lugar, me gustaría subrayar que no hay animosidad alguna contra la literatura como tal ni contra la obra literaria de los autores que estoy mencionando. Tengo el máximo respeto por su producción novelística. Considero, además, que la literatura es también una forma de conocimiento e indagación. De hecho, creo que para entender el fenómeno de la crisis económica y política de España, la aproximación literaria puede ser fundamental e irremplazable. Si tuviera que recomendar a alguien un libro con el que entender lo que la explosión de la burbuja inmobiliaria ha supuesto en España, le propondría la lectura de la extraordinaria novela de Rafael Chirbes, *En la orilla* (2013). Más allá de sus méritos literarios, el libro describe magníficamente la onda expansiva de la crisis sobre distintos estratos sociales (desde el protagonista, Esteban, un ebanista arruinado en un pueblo de Alicante, hasta la mujer latinoamericana que cuida del padre de Esteban) y la calaña de los tipos que consiguieron una fortuna engañando a través de promociones inmobiliarias a una pequeña burguesía con ambiciones de grandeza. Los personajes que circulan por la novela desvelan formas de relación social y aspiraciones vitales que se escapan a cualquier análisis sistemático de la crisis que pueda realizarse desde las ciencias sociales.

En el capítulo último me ocupo de la crisis económica y de los análisis a los que ha dado lugar: como ya comenté en la introducción, comienzo con una extensa crítica de las tesis que ha defendido Antonio Muñoz Molina en su famoso ensayo (paradigma de la cultura holística) *Todo lo que era sólido*. El contraste entre *Todo lo que era sólido* y *En la orilla* resulta del mayor interés: mientras que la obra de Chirbes transmite con gran fidelidad el origen de la crisis, los comportamientos que se asociaron con la burbuja, las aspiraciones de una clase media venida a más, así como los efectos sísmicos del estallido de dicha burbuja, la de Muñoz Molina intenta determinar las causas de la crisis y se equivoca, por falta de preparación y conocimiento del autor, casi en cada página del libro. Así como el objetivo literario de Chirbes resulta factible y, de hecho, queda admirablemente resuelto, sin que haya quizá mejor

formato que la novela para conseguirlo, *Todo lo que era sólido*, en cambio, adopta una forma ensayística y se mete en un terreno pantanoso, careciendo de los medios para salir de la ciénaga.

A veces la contradicción que señalo entre los registros novelístico y ensayístico se encarna en un mismo autor. Así ocurre en el caso sumamente complejo de Mario Vargas Llosa, uno de los grandes escritores del siglo XX y autor de novelas que reconstruyen la vida política con extraordinaria precisión. En su obra reciente, *La fiesta del chivo* (2000), retrata con crudeza suma la vesania de Trujillo y su infierno de represión, aunque, a mi juicio, es *Conversación en la catedral* (1969) su obra cumbre, en la que se describe el efecto deletéreo de la corrupción política y el abuso de poder en todas las capas sociales durante la dictadura del general Odría en Perú. El contraste entre la novela de Vargas Llosa y sus artículos periodísticos sobre política no puede ser mayor. Todo lo que en su literatura es sutileza se transforma en la prensa en opiniones esquemáticas y superficiales. Los artículos en los que expone el catón liberal tienen un cierto aire de catecismo laico y hasta de manual soviético de materialismo dialéctico, por su simpleza y acartonamiento. Su liberalismo económico es primario y la manera de defenderlo se corresponde con una forma especialmente tosca de “machismo discursivo”, consistente en pontificar sin tener a la vista los datos y sin considerar argumentos alternativos a los suyos. Su escritura se vuelve propagandística y previsible, hasta el punto de que es raro poder aprender de sus artículos más políticos.

Vargas Llosa, de todas formas, no siempre se anda en las brumas de la teoría política: en ocasiones le gusta descender a la realidad y asumir sus imperfecciones. Solo así se comprende este mostrenco entusiasmo ante la figura de Esperanza Aguirre, a quien tuvo la ocurrencia de bautizar como la “Juana de Arco del liberalismo”. El artículo no tiene desperdicio. Está escrito en 2012. Para entonces ya era público y notorio que bajo el mandato de Aguirre la trama delictiva “Gürtel” había hecho y deshecho en la Comunidad de Madrid, financiando ilegalmente actos electorales del Partido Popular como recompensa por los servicios que le contrataba el Gobierno de la región. Ya se sabía de la existencia de una fundación pantalla, Fundescam, a la que llegaban fondos generosos y bien nutridos de grandes empresarios que se lucraban con contratos públicos (como Gerardo Díaz Ferrán, el presidente de la CEOE que acabó en la cárcel, o Arturo Fernández, el empresario que

pagaba en negro a sus trabajadores y uno de los consejeros que disfrutó de las archifamosas tarjetas *black* de Caja Madrid/Bankia). También era pública la campaña de odio y destrucción lanzada desde la Consejería de Salud del Gobierno regional contra el doctor Luis Montes, entonces responsable de la unidad de urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés, acusado de asesinar pacientes como si fuera un nazi por ayudar a enfermos terminales a morir dignamente. Los “liberales” madrileños destrozaron su imagen y su carrera. Se sabía, igualmente, que en nombre de esos bellos principios del liberalismo que explica Vargas Llosa, Aguirre y los suyos estaban intentando deshacer la red de la sanidad pública para que hicieran un lucrativo negocio grandes corporaciones privadas como Capio, en las que tienen intereses y obtienen pingües recompensas un buen número de dirigentes del Partido Popular. Y, por supuesto, a nadie se le podía escapar el modo a través del cual Aguirre llegó a la presidencia del Gobierno de Madrid, mediante el soborno a dos diputados socialistas sufragado por una trama de empresarios de la construcción que veían peligrar sus intereses si llegaban los socialistas al poder; ni la imputación de algunos de sus más estrechos colaboradores, como Alberto López Viejo (el encarcelamiento del exvicepresidente Francisco Granados se produjo con posterioridad al artículo de Vargas Llosa); por no mencionar el repugnante caso de su vicepresidente, Ignacio González, a quien un conocido empresario pagó un ático lujoso en Marbella por los contratos suculentos que obtenía de la televisión pública, Telemadrid, que la muy liberal de Aguirre nunca privatizó porque prefirió utilizarla como arma de propaganda partidista sufragada con los impuestos de todos los madrileños. Pues bien, nada de esto le impide a Vargas Llosa escribir con motivo de la dimisión de Aguirre al frente del Gobierno regional que “la vamos a echar mucho de menos. Todos. Los que, como yo, la admirábamos y nos hubiera gustado verla llegar a la Presidencia del Gobierno, convencidos de que, con ella al frente, jamás se hubiera hundido España en una crisis como la que hoy padece” [\[44\]](#). Francamente, el ditirambo parece un tanto exagerado: suponer que la misma crisis que han sufrido casi todos los países occidentales habría pasado de largo en España si hubiera presidido Aguirre el destino de la nación es mucho suponer. Ya sé que estamos en otros tiempos y que el contexto ha cambiado radicalmente, pero unos elogios tan encendidos no pueden dejar de despertar el recuerdo de aquellos otros escritores que tras la muerte de Stalin le llamaban “padre y maestro y camarada”. Es un tipo similar de

ceguera ideológica.

No pienso en absoluto que los escritores tengan una tara que les impide formular ideas razonables en el terreno del análisis político, económico y social. Al contrario, a Vargas Llosa, como a otros tantos escritores excelentes, les sobra capacidad para una empresa de esta naturaleza, si bien casi nunca ponen los medios para llevarla a cabo (se requiere lecturas, conocimientos y disciplina investigadora). No basta con leer la prensa y preguntar a los amigos que saben algo del asunto; se necesita además estar al día de lo que los estudiosos han descubierto al respecto y aprender unos rudimentos sobre el funcionamiento de la economía y de la política. Resulta sonrojante, por poner otra ilustración, que Azúa se lea un libro ligero sobre la crisis escrito por un autor de éxito, Michael Lewis, y dedique un artículo a relatarnos su descubrimiento [\[45\]](#). Revela que, en algunos aspectos, la vida cultural española no ha avanzado tanto desde los tiempos del casino decimonónico.

Mi postura, como ya indiqué en la introducción de este libro, no es gremialista: no pretendo llevar a cabo una impugnación genérica del papel de los escritores en la vida pública. De hecho, me parecería muy empobrecedor que sobre economía solo pudieran escribir los economistas, o sobre política los politólogos. El debate público tiene que estar abierto a todo el mundo, con independencia de su formación y trayectoria intelectual. Ahora bien, el debate debe regirse según unas reglas, sin que quepa hacer excepciones con los escritores. Estos, como el resto de personas que contribuyen con sus ideas y argumentos, deben cumplir unos niveles mínimos de rigor intelectual, de lo contrario se arriesgan a decir ridiculeces.

Es obvio que los escritores no son los únicos que opinan sin ton ni son sobre asuntos políticos y económicos. Pueden traerse a colación muchos textos que no tienen nada que envidiar en cuanto a pobreza argumental y empírica firmados por periodistas y académicos, a veces incluso por especialistas en el tema. Puesto que en este capítulo me centro en los literatos, cabría pensar que me dejo llevar por algún tipo de fobia a su figura; tendría de esta manera un sesgo que viciaría en buena medida la tesis que defiendo aquí. Pero si me centro en los escritores es, como he explicado antes, a causa de su fuerte presencia en el debate público y debido al elevado y merecido prestigio social que poseen gracias a sus creaciones literarias. El problema comienza cuando, valiéndose de dicho prestigio, dan rienda suelta a sus opiniones más personales haciéndolas pasar por análisis. El escritor no puede reclamar una

dispensa argumental por el hecho de que sus novelas obtengan valoraciones excelentes. Una vez que se lanza a la esfera pública, sus tesis están abiertas al examen y la confrontación.

No estoy, por tanto, pidiendo a los escritores que dejen de escribir sobre política; más bien, lo que reclamo es que eleven el nivel de autoexigencia y no sean tan vanidosos como para suponer que todo lo que piensan es digno de ser publicado.

Tampoco estoy diciendo que todos los artículos políticos firmados por escritores resulten faltos de argumentación. El problema surge especialmente a propósito de afirmaciones realizadas sobre cuestiones de hecho y, más importante todavía, sobre relaciones causa-efecto. Es ahí cuando se necesita afinar con los datos y conocer lo que otros han argumentado antes. El estado de la educación, las causas de la corrupción, las consecuencias del sistema electoral, los orígenes de la crisis, los efectos del sistema autonómico... son ejemplos todos ellos de temas en los que debería tenerse un cierto cuidado a la hora de formular tesis rotundas. El síndrome del opinionismo agudo quedó bien reflejado en aquella intervención gloriosa del académico y profesor de literatura, Francisco Rico, en la que establecía que el tabaco no es tan perjudicial como habitualmente se cree. Lo escribió en un desafortunado artículo contra la ley de 2010 que prohibía fumar en lugares públicos. Es perfectamente legítimo que el señor Rico piense que una ley como aquella es “un golpe bajo a la libertad, una muestra de estolidez y una vileza” [46]. Pero entra dentro de lo absurdo que para sostener su tesis (expresada con toda la contundencia del “clarismo” latino) añada que “no pocos de los argumentos contra el tabaco carecen de rigor científico y son simple fruto del desconocimiento. (Como cuando hace unos años el aceite de oliva se consideraba malo para el colesterol)”. El artículo, como no podía ser de otro modo, despertó la ira de muchos lectores, de cuyas quejas se hizo eco la entonces defensora del lector en el diario *El País*, Milagros Pérez Oliva. Ante la oleada de protestas, Rico, en lugar de pedir disculpas y rectificar, envió, como buen “macho discursivo”, una carta desafiante al director del periódico en la que se las daba de listo citando literatura científica sobre el aumento de “la concentración de cotinina (un metabolito de la nicotina, más seguro que esta como biomarcador)” que se produce en los no fumadores como consecuencia de las leyes prohibicionistas, pues los fumadores fuman más en los hogares perjudicando a los demás habitantes del mismo, muchas veces

niños [47]. La pedantería incluía una referencia a un trabajo científico publicado en la *British Academy Review*, si bien cualquier lector mínimamente despierto se daba cuenta de que estaba desviando la atención de la cuestión principal, a saber, su negación de que el tabaco tenga malas consecuencias para la salud.

La manera de argumentar de Francisco Rico no representa sino un caso extremo y pintoresco de la osadía con que en ocasiones intelectuales y escritores intervienen en el debate. La metedura de pata resulta en este caso tan visible porque el autor confunde sus opiniones personales con el conocimiento científico sobre la cuestión. En los ámbitos económico y político, el conocimiento no es tan sólido e inapelable como en medicina, pero aun con todo algunas cosas sí hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo. No tiene sentido que lo poco que sabemos con cierta seguridad se ignore olímpicamente por escritores desinformados y atrevidos [48].

Hay amplio margen en el debate político para evitar la “estolidez” que Rico creía detectar en los políticos socialistas responsables de la ley antitabaco. En lugar de hablar de si el tabaco daña la salud o no, que es un asunto complejo y técnico, el escritor puede abordar el asunto de la prohibición desde el punto de vista de los derechos y libertades. En este terreno, la elocuencia y el poder dialéctico poseen enorme importancia. El debate político no consiste solo en determinar las causas de fenómenos como la crisis económica. Hay amplio margen para debatir sobre ideas y sobre valores, asuntos en los que el intelectual (y especialmente el escritor) descuella frente a periodistas, académicos y políticos. Un buen ejemplo de este tipo de intervención es el de Luis García Montero, quien participa con frecuencia en los medios apelando a los valores políticos que considera suyos, los de una izquierda a la izquierda de la socialdemocracia. El escritor puede denunciar injusticias, recordar la importancia de determinados principios morales y políticos (la solidaridad, el consenso, el cosmopolitismo, la tolerancia, etc.), trazar el perfil de un político, exigir comportamientos más elevados entre quienes tienen altas responsabilidades, fustigar a quienes incurren en prácticas corruptas, reclamar ideales de difícil materialización, etc., y lo hará mucho mejor y con mayor fundamento que cuando oficia de analista y entra en debates “positivos”. Hay además un registro literario con respecto a la política que resulta especialmente saludable y hasta necesario, el de la sátira y la burla, que funciona como válvula de escape cuando la gente se siente muy irritada con el

poder político. En España hay consumados escritores que han practicado el tono satírico con gran ingenio, desde Juan José Millás hasta Rafael Reig.

Debe quedar claro entonces que no pretendo en absoluto acallar la voz de los escritores. Más bien, pienso que deben encontrar el ángulo que les corresponde para hablar de política. Ese ángulo no es el del análisis y la explicación, salvo que se preparen concienzudamente el tema del que se trate y, tras un repaso exhaustivo de lo que sabemos al respecto, se atrevan con alguna nueva hipótesis. Hay otro tipo de intelectuales mejor preparados que ellos para esa tarea. Asimismo, creo que los escritores, por lo general, no son capaces de rechazar la invitación de los medios para que hablen y opinen sobre cualquier asunto. Debido a la peculiar tradición intelectual española, mucho más orientada hacia la literatura y el ensayo que hacia la investigación y la ciencia, los escritores continúan ocupando un espacio excesivo en el debate público. Sin demasiadas diferencias con respecto a los estándares que se establecieron con las generaciones del 98 y del 14, sigue dominando en las opiniones de los escritores un cierto tono casticista y, sobre todo, un planteamiento moral y estético de las cuestiones políticas, derivado de lo que podríamos calificar como una cierta incompreensión del mundo en el que les ha tocado vivir. De ahí que recurran con tanta frecuencia (y tanta virulencia) a la impugnación del presente y exijan un comienzo nuevo, una nueva etapa que barra los vicios de la elite política.

Las fuerzas de la cultura holística española arrastran al escritor a no hacer ascos al análisis positivo, convirtiéndolo en un figurón con opiniones sobre todo. El escritor acaba expresando sus puntos de vista acerca de la crisis del bipartidismo, la tarifa de la luz, la reforma constitucional y cuanto asunto cobre fuerza y protagonismo en la esfera pública.

En España sobran figurones y santones. El perfil del escritor que colabora con los medios enviando artículos de opinión en los que expresa puntos de vista políticos poco razonados, sin haberse informado suficientemente sobre el tema, debería haberse superado hace tiempo. Hay demasiadas voces haciendo ruido con posturas superficiales y cargadas de moralismo. Por muy exitosa que sea la carrera literaria del escritor, no estaría de más que en algún momento este se cuestionara si sus artículos políticos tienen algún valor añadido, si suponen una aportación significativa y valiosa a la esfera pública y si son de mayor calidad que los que podrían elaborar gentes más preparadas, aunque menos conocidas.

- 15 . Martin Wolf, *The Shifts and the Shocks: What We've Learned—and have Still to Learn—from the Financial Crisis*, Londres, Penguin, 2014.
- 16 . Thomas Friedman, *The World is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century*, Nueva York, Farrar, Straus & Giroux, 2005.
- 17 . Pedro J. Ramírez, *Amarga victoria. La crónica oculta del histórico triunfo de Aznar sobre González*, Barcelona, Planeta, 2000, p. 14.
- 18 . Jorge Herrera e Isabel Durán, *Aznar. La vida desconocida de un presidente*, Barcelona, Planeta, 1999, p. 427.
- 19 . Pilar Urbano, *La gran desmemoria*, Barcelona, Planeta, 2014. Publiqué una reseña larga del libro, con el título “Pilar Urbano, el relato del 23-F y la clase dirigente española”, *infoLibre*, 29/4/2014, en http://www.infolibre.es/noticias/opinion/2014/04/29/pilar_urbano_relato_del_clase_dirigente_espanola_.
- 20 . Andreu Navarra, *El regeneracionismo. La continuidad reformista*, Madrid, Cátedra, 2015, p. 213.
- 21 . Citado en Navarra, *El regeneracionismo*, p. 219.
- 22 . Javier Marías, “Un país adanista e idiota”, *El País Semanal*, 1/3/2015.
- 23 . Javier Marías, “Siempre tarde y con olvido”, *El País Semanal*, 14/12/2014.
- 24 . Juan Manuel de Prada, *Dinero, demogresca y otros podemonios*, Barcelona, Planeta, 2015, p. 17.
- 25 . Javier Marías, “Entre el ridículo y la masedumbre”, *El País Semanal*, 26/1/2014.
- 26 . Arturo Pérez-Reverte, “Esa gentuza”, *El Semanal*, 5/7/2009.
- 27 . Véase *ABC*, 16/7/2013, en <http://www.abc.es/cultura/cine/20130715/abci-plagio-perez-reverte-201307151936.html>
- 28 . Sobre la denuncia original en el diario mexicano *La Jornada*, véase aquí: <http://www.jornada.unam.mx/2015/03/17/cultura/a04n1cul>. Sobre el desenlace del caso, con la autora aceptando las disculpas, véase aquí: <http://www.notimerica.com/cultura/noticia-escritora-mexicana-acepta-disculpas-perez-reverte-plagiarle-texto-20150320230248.html>
- 29 . Una de las manifestaciones de la impunidad intelectual que rige en la esfera pública es justamente la manga ancha con el plagio. Son ya muchos los escritores pillados copiando a otros, sin que su reputación haya quedado muy dañada. Algunos casos bien conocidos, sobre los que el lector podrá encontrar abundante información en Internet, son los de Luis Racionero, Lucía Etxebarria (la escritora y concursante de “Campamento de Verano”), Luis Alberto de Cuenca, Camilo José Cela, etc.
- 30 . Félix de Azúa, *Contra Jeremías*, p. 15.
- 31 . Félix de Azúa, “Sobre lo insoportable”, *El País*, 30/4/2013.
- 32 . Diego Gambetta, “‘Claro!’: An Essay on Discursive Machismo”, en Jon Elster (ed.), *Deliberative Democracy*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, pp. 19-43.
- 33 . Jordi Gracia, *El intelectual melancólico. Un panfleto*, Barcelona, Anagrama, 2011.
- 34 . Félix de Azúa, “Podemos: un partido de profesores”, *El País*, 1/12/2014.
- 35 . Véase http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA2012_Overview_ESP-FINAL.pdf
- 36 . Sin necesidad de salir de las páginas de *El País*, véanse por ejemplo los datos que proporciona Daniel Peña, “Las universidades españolas en los ‘ranking’ internacionales”, *El País*, 12/9/2012.
- 37 . José Saturnino Martínez, “¿Crisis de la educación?”, *El País*, 14/1/2008.
- 38 . Antonio Muñoz Molina, “Tierra quemada”, *Babelia, El País*, 24/10/2015.
- 39 . Gabriel Albiac, “La enseñanza destruida”, *ABC*, 18/5/2013.
- 40 . José Saturnino Martínez, “Los universitarios: ¿cada vez saben menos?”, *eldiario.es*, 16/1/2015. También “Precisiones sobre el PISA de adultos”, *Luces Rojas, infoLibre*, 2/9/2014.
- 41 . En *El Cultural*, 23/11/2015.
- 42 . Juan Manuel de Prada, *Dinero, demogresca y otros podemonios*, pp. 230-231.

- [43](#) . Ibidem, p. 243.
- [44](#) . Mario Vargas Llosa, “Aguirre, esa Juana de Arco liberal”, *El País*, 23/9/2012.
- [45](#) . Félix de Azúa, “Las churras y las merinas”, *El País*, 2/5/2012.
- [46](#) . Francisco Rico, “Teoría y realidad de la ley contra el fumador”, *El País*, 11/1/2011.
- [47](#) . Francisco Rico, “Sobre la prohibición del tabaco”, Cartas al Director, *El País*, 19/1/2011.
- [48](#) . Un ejemplo aún más radical que el de Rico es el de Juan Manuel de Prada, quien en su *Dinero, demogresca y otros podemonios*, libro recopilatorio de sus contribuciones en *ABC* y al que ya me he referido anteriormente, sostiene que la causa de la corrupción radica en que los políticos españoles no asuman el pecado original del hombre: “Una política que reconociese la existencia del pecado original, en lugar de adornarse con las plumas de pavo real de la virtud, empezaría por limitar su jurisdicción a las puras labores de representación política, en aceptación del mandato que recibe de sus representados. [...] Seguiría, desde luego, habiendo corruptos, pero serían muchos menos de los que padecemos allá donde la inteligencia que se cree luminosa arbitra aspaventeras leyes de transparencia y la voluntad que se cree recta se pretende incorruptible; pues allá donde inteligencia y voluntad se proclaman soberanas una y otra acaban sucumbiendo más fácilmente al imperio de las pasiones”. De Prada, *Dinero, demogresca y otros podemonios*, pp. 40-41.

CAPÍTULO 2

LA OBSESIÓN NACIONAL

En julio de 2014 se hizo público el llamado “Manifiesto de los libres e iguales”, firmado por casi 70 personas, la mayoría intelectuales. El título, ciertamente, era extraño, pues alguien podría entender, sobre todo teniendo en cuenta la presencia del artículo “los”, que aquellos que no compartiesen sus tesis no pertenecían al grupo formado por esa estirpe valerosa de ciudadanos que se reclamaban a la vez libres e iguales. Puedo figurarme que se sintieran libres, y aun que considerasen que quienes no piensan como ellos no son realmente libres, pero ¿qué querían decir con que eran iguales? ¿Iguales con respecto a qué o con respecto a quién?

El manifiesto era una llamada en contra del independentismo catalán; adoptaba una postura tan legítima como su opuesta. Pero esto es lo que quizá no se admitía en el texto, pues daba a entender que el proyecto de separación de Cataluña es profundamente antidemocrático. Se pueden afirmar muchas cosas sobre un proyecto secesionista: que es insolidario, que es empobrecedor, que tendría efectos económicos negativos, que es inconstitucional, etc., pero ¿realmente puede decirse que es antidemocrático? El tono del escrito era beligerante y notablemente ofensivo hacia aquellos que apuestan por la independencia, a quienes se presentaba en los términos más siniestros que quepa imaginar. Permítanme que reproduzca solamente el primer párrafo, que a mí me dejó estupefacto:

El secesionismo catalán pretende romper la convivencia entre los españoles y destruir su más valioso patrimonio: la condición de ciudadanos libres e iguales. El nacionalismo antepone la identidad a la ciudadanía, los derechos míticos de un territorio a los derechos

fundamentales de las personas, el egoísmo a la solidaridad. Desprecia el pluralismo social y político, y cuando trata de establecer fronteras interiores arrincona como extranjeros en su propio país a un abrumador número de ciudadanos. El secesionismo catalán se hermana con el populismo antieuropeo y promueve la derrota de la democracia española. Evitar esa derrota es responsabilidad de todos y la primera obligación de los partidos políticos.

Me resulta muy difícil dar sentido a este conjunto deslavazado de frases, sin hilazón alguna. Empezando por la primera, que afirma que el secesionismo busca destruir la libertad e igualdad de los españoles, me gustaría recordar que, en cuanto ciudadano español, mi libertad no queda menoscabada por el hecho de que Cataluña se constituya como un Estado propio, de la misma manera que no soy más o menos libre por el hecho de que existan Francia o Camerún. Mi libertad depende de los derechos que, como ciudadano, en este caso español, reconozca el Estado en el que vivo, en este caso España. Mientras que mis libertades quedan limitadas por la “ley mordaza” aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, la secesión de un territorio no afecta a lo que yo pueda hacer o dejar de hacer. Es verdad, por lo demás, que si Cataluña se escinde de España mi país queda amputado, se vuelve más pequeño y menos diverso, pero eso, según lo veo, no afecta a mi libertad. Si la frase se refiere más bien a ciudadanos que, sintiéndose exclusivamente españoles, pierden su nacionalidad originaria al vivir en una Cataluña que se independiza, entonces no queda más remedio que reconocer que su grado de libertad puede variar en cualquier dirección: podría ocurrir que dentro de una Cataluña con condición plena de Estado, las libertades fueran menores que en España... o mayores. Prejuizar que serían menores resulta un tanto aventurado.

Tampoco entiendo de dónde sacan los abajofirmantes que la independencia de Cataluña antepone la identidad a la ciudadanía, según se anuncia en la segunda frase. Los independentistas catalanes quieren ser ciudadanos, igual que lo quiere ser el resto de españoles, solo que quieren ser ciudadanos en un Estado distinto del español. Sostener que identidad y ciudadanía son términos contradictorios es una petición de principio, pues excluye la posibilidad razonable de que personas que comparten una cierta identidad cultural o

nacional decidan constituir una comunidad política propia que les dé el derecho de ciudadanía en el Estado al que quieren pertenecer.

Asimismo, no veo sobre qué base puede concluirse que el partidario de la independencia antepone “derechos míticos” a “derechos fundamentales”. En primer lugar, que Cataluña fuera un Estado independiente no supondría que sus ciudadanos no tuviesen derechos fundamentales. Dichos derechos fundamentales podrían ser incluso más sólidos que aquellos de los que disfrutaban los ciudadanos españoles, de la misma manera que podrían serlo menos. En segundo lugar, es perfectamente posible desear la independencia de un territorio sin apelar a “derechos míticos”. Basta, por ejemplo, con enraizar el proyecto independentista no sobre derechos históricos (si es que esos son los “derechos míticos”), sino sobre la voluntad mayoritaria de los ciudadanos catalanes.

También se acusa al proyecto independentista de despreciar “el pluralismo social y político”, pero dentro de un Estado catalán podría haber tanto pluralismo social y político como en el resto de España: bastaría para ello con que se respetasen los procedimientos de la democracia y el Estado de derecho en el nuevo Estado. Añade el texto que la independencia “arrincona como extranjeros en su propio país a un abrumador número de ciudadanos”, lo que resulta un poco exagerado, pues dichos “extranjeros” gozarían de los mismos derechos que el resto de catalanes; si la extranjería se refiere más bien a los sentimientos identitarios, a quienes se sintieran españoles y no catalanes, entonces habrá que conceder que lo mismo sucede en la actualidad con aquellos que se sienten exclusivamente catalanes y no españoles y están condenados a vivir como ciudadanos españoles. No veo por qué una “opresión” deba pesar más que la otra, salvo que demos un peso injustificado al *statu quo*.

La parte final del párrafo es la más estupefaciente. Los autores del manifiesto afirman que el secesionismo catalán se hermana con “el populismo antieuropeo”. No sé de dónde puede salir semejante conclusión, puesto que los catalanes han tenido siempre una fuerte vocación europeísta, tanto más cuanto que muchos de ellos se veían más próximos a los europeos que al resto de sus conciudadanos españoles. Ahora bien, de todas las tesis que se presentan, la más extraña es la que establece que el secesionismo catalán promueve “la derrota de la democracia española”. A un catalán que no se siente español y que aspira a vivir en un Estado catalán, ¿realmente le interesa “derrotar” la

democracia española? ¿Cómo y en qué momento se produce la “derrota” en una democracia? Supongo que sustituyéndola por un régimen político alternativo, es decir, por un régimen autoritario. Pero ¿tiene sentido sostener que los independentistas desean que no haya democracia en España? ¿Acaso no puede haber democracia en España si Cataluña se constituye en Estado propio? Si no es de una dictadura, ¿de qué están hablando entonces?

Cuesta mucho entender el lenguaje y la lógica argumental de los autores de este manifiesto. ¿Quiénes son los firmantes? Escritores como Mario Vargas Llosa, premio Nobel de literatura; periodistas como Hermann Tertsch y Federico Jiménez Losantos; historiadores como Carmen Iglesias y Ricardo García Cárcel; filósofos como Fernando Savater; artistas como José Luis Garci y Ramón Arcusa (miembro del Dúo Dinámico); más los sospechosos habituales, Jon Juaristi, Félix de Azúa, Andrés Trapiello, Félix Ovejero, Arcadi Espada, y un largo etcétera.

Merece mención especial la promotora del manifiesto, la persona que lo presentó ante el público y la prensa enfrente del Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos, marquesa de Casa Fuerte, que firma como historiadora, si bien es más conocida por haber sido diputada del Partido Popular. La señora Álvarez de Toledo tiene un cargo directivo en FAES y representa la versión más doctrinaria del pensamiento neoconservador en la derecha española. Muy próxima al anterior presidente Aznar, su figura no ha brillado como debía durante la etapa de Mariano Rajoy, pero su entusiasmo ideológico le augura un brillante porvenir político. Álvarez de Toledo ha sido jefa de opinión del diario *El Mundo*, tertuliana en la COPE en el programa de Federico Jiménez Losantos y jefa de gabinete del ministro Ángel Acebes (el de las mentiras del 11-M, el que daba dinero de la contabilidad B del Partido Popular a los medios amigos como *Libertad Digital*). Uno de sus momentos más bajos ocurrió cuando acusó sin pruebas y falsamente al Ministerio del Interior de la etapa de Zapatero de censurar un comunicado de ETA, pero en España ese tipo de deslices no suelen acarrear apenas consecuencias cuando los responsables de los mismos pertenecen a la derecha.

Algunas de las desconcertantes frases del manifiesto a las que antes me he referido proceden de su puño y letra; para comprobarlo, nada mejor que leer el artículo que publicó en el *Financial Times* el 18 de febrero de 2014 (casi seis meses antes de que se hiciese público el manifiesto) y que incluía afirmaciones como esta: “*Catalan separatism runs contrary to the values*

that define Spain as a democracy and the EU as a feat of civilisation. It puts identity before citizenship” [49]. Aquí están ya algunas de las fórmulas del manifiesto: que el independentismo quiebra la lógica de la democracia española y el proyecto europeo y que el independentismo coloca la identidad por encima de la ciudadanía. Los eminentes intelectuales que firman el manifiesto parecen haberse limitado a suscribir las ocurrencias de la diputada popular.

Acaso lo más sorprendente no sea que todas estas grandes figuras de las letras hayan dejado hacer a la diputada popular, sino su disposición a mezclarse con acreditados manipuladores como Federico Jiménez Losantos, uno de los máximos propagandistas de la tesis conspirativa sobre la autoría del 11-M, o con un tipo tan lleno de odio y arrogancia como Hermann Tertsch. ¿Qué pintan Trapiello, Savater, Carmen Iglesias o Félix Ovejero al lado de esos tipos? ¿Cómo han llegado hasta aquí?

En 1979, Savater mantuvo desde las páginas de *El País* una furiosa y divertida polémica con Jiménez Losantos (en la que este último, en mi modesta opinión, le dio un buen repaso) a propósito del nacionalismo español. Las opiniones de Jiménez Losantos, escribía Savater con desprecio absoluto, “son tan tópicas, cien veces repetidas por los infinitos españoleadores a sueldo de unos o de otros que hemos soportado durante el último medio siglo” [50]. Treinta y cinco años después, en 2014, esas mismas opiniones “españoleadoras” Savater las compartía con entusiasmo y firmaba junto al antes denostado, quien ha mostrado desde luego mayor coherencia intelectual que su rival. ¿Para llegar a un rancio españolismo era preciso pasar por todas los colores posibles del espectro ideológico? ¿Qué sentido tenía un rodeo tan largo si el final consistía en algo tan pedestre como firmar manifiestos de una pobreza intelectual alarmante al lado de gente como Jiménez Losantos?

Para empezar a entender que hayan acabado todos ellos “juntos y revueltos” (una caracterización bastante más exacta que la de “los libres e iguales”), conviene repasar su evolución política. De hecho, una de las características más notables de muchos de los escritores e intelectuales que adoptan posiciones extremadamente beligerantes en torno a los nacionalismos sin Estado es su tránsito desde posiciones de izquierdismo radical y revolucionario hacia tesis cada vez más conservadoras (cuando no reaccionarias). Hay casos realmente extremos, como el de Gabriel Albiac, que pasó del comunismo althusseriano a realizar entrevistas con monseñor

Cañizares y a participar en la COPE y en los medios de comunicación más conservadores. O el de Gustavo Bueno, que metió el materialismo dialéctico por el tamiz de la escolástica medieval y ha terminado en posiciones neofalangistas [\[51\]](#). No se trata solo de filósofos. La lista de académicos, periodistas y políticos que militaron en la extrema izquierda y hoy se sitúan en el liberalismo o el conservadurismo es interminable. Algunos ejemplos: Josep Piqué (ex-PSUC), Pedro Arriola (ex-Bandera Roja), Pilar del Castillo (ex-Bandera Roja), Andreu Mas-Colell (ex-PSUC), Ramón Tamames (ex-PCE), Federico Jiménez Losantos (ex-Bandera Roja), Casimiro García-Abadillo (ex-PORE), Fernando Sánchez Dragó (ex-PCE), Pío Moa (ex-GRAPO), Antonio Caño (ex-October), José Manuel Calvo (ex-Bandera Roja), Jon Juaristi (ex-ETA), Mikel Azurmendi (ex-ETA), José María Fidalgo (ex-CC OO), *etc.* [\[52\]](#) Si pensamos no en el paso por organizaciones políticas y sindicales, sino simplemente en gente que defendía ideas de izquierda y hoy anda en posiciones liberales o conservadoras, la enumeración se vuelve interminable.

El itinerario contrario apenas se ha recorrido. Si no hubiera modas o contagio, lo lógico sería observar cambios en todas direcciones. El hecho de que el cambio se produzca siempre en el mismo sentido nos revela con claridad la naturaleza profundamente gregaria de los intelectuales, que sin embargo suelen verse a sí mismos como individuos únicos y plenamente autónomos. Los intelectuales, empero, siguen las tendencias en el terreno de las ideas con la misma coordinación y falta de sentido que las bandas de estorninos que surcan el cielo. Son capaces de detectar con gran precisión por donde sopla el viento. Si en los setenta tocaba ser revolucionario y en los noventa conservador y escéptico, pues allá van todos.

El fenómeno de la derechización es especialmente agudo entre intelectuales que hoy tienen más de 60 años. En este grupo, muchos fueron en su juventud ardorosos revolucionarios; abrazaron el marxismo y sus variantes, el trotskismo, el maoísmo o las corrientes anarquizantes de la autonomía; despreciaron la democracia burguesa y consideraron odioso el capitalismo. Nacieron entre 1930 y 1955, por poner unos límites cronológicos, de forma que llegaron a la juventud en la segunda mitad del franquismo o incluso en sus postrimerías, en los sesenta o principios de los setenta. Eran años de radicalismo ideológico. Las movilizaciones del 68, la aparición de la “lucha armada” (terrorismo) en muchos países desarrollados, el rechazo a la guerra imperialista de Vietnam, la causa tercermundista, la liberación sexual, en fin,

una colección de ideas y valores que encarnaban el deseo de transformación de un mundo que a tantos jóvenes parecía entonces opresivo, alienante y profundamente injusto. En el contexto de la cultura antifranquista, se podía ser comunista o estar a la izquierda del comunismo: cualquier otra opción era un enjuague mal visto entre los compañeros más comprometidos.

Deseaban una revolución y albergaron grandes expectativas de que esta llegara tras la muerte de Franco. Con la jactancia tradicional de la extrema izquierda, despreciaron la política real y a los políticos que hicieron la Transición. Ellos estaban en la pureza ideológica, de manera que los Pactos de la Moncloa o la Constitución de 1978, que luego ellos mismos han acabado sacralizando hasta extremos embarazosos, les parecían entonces avances insignificantes, meros pasteleos. Adolfo Suárez, por su parte, era poco más que un camaleón franquista. El PSOE salido de Suresnes, un grupo de oportunistas que contaban con la complicidad imperialista de Alemania y Estados Unidos para dar una pátina de legitimidad progresista a una democracia liberal en la práctica dominada por las estructuras oligárquicas de toda la vida.

En aquellos años de cambio vertiginoso, más de uno entre “los libres e iguales” abajofirmantes vieron en ETA un agente revolucionario o de progreso: se trataba de un grupo armado que no entraba en el juego de apañes y componendas de la Transición, es decir, que defendía, de forma tan solitaria como letal, la necesidad de una ruptura absoluta con la legalidad institucional del franquismo frente al “reformismo” adoptado por el resto de fuerzas políticas. El propio Fernando Savater, que 25 años después llegaría a constituirse en el referente intelectual de la oposición civil a ETA, tuvo sus devaneos con Herri Batasuna y atacaba con dureza el orden constitucional instaurado en 1978. Desde los parámetros pretendidamente ácratas de los que a la sazón presumía, el Estado se configuraba como el “enemigo” a abatir, de modo que la voluntad de afirmación de los pueblos de España podía funcionar como eficaz antídoto para evitar que el Estado español acabara imponiendo su autoridad opresiva sobre la ciudadanía.

Resulta curioso, en este sentido, que fuera precisamente en los años más sanguinarios de ETA, entre 1978 y 1981, en los que el grupo terrorista llegó a asesinar a más de 80 personas al año, cuando Savater escribiera algunos de sus artículos políticamente más inquietantes. Uno de ellos se titulaba “Terrorismo, terrores y txistu” [\[53\]](#). Comenzaba con una anécdota que le servía

para inspirar el título de su pieza: un preso etarra recluido en el penal del Puerto de Santa María reclamaba al director de la prisión que se le devolviera el *txistu* que le había sido requisado en un cacheo, y las autoridades le respondieron exigiéndole que se dirigiera a ellos en castellano, sin utilizar extranjerismos como *txistu*. Si no conociéramos la fecha de escritura, el lector se esperaría a continuación algún sarcasmo mercedamente cruel sobre el aldeanismo de los terroristas, pero en 1981 el tenor de la reflexión era otro muy distinto. Savater cerraba su colaboración con estas palabras: “Terror y violencia es pedir que nos devuelvan el *txistu* y tener que aguantar la respuesta cínicamente autocrática: ‘explique usted qué es eso y hábleme en mi lenguaje’”.

En dicho artículo, Savater criticaba la violencia terrorista, si bien la relativizaba señalando otras fuentes de violencia, procedentes del Estado, que a su juicio eran más preocupantes. En ese intento de relativización, llegaba incluso a señalar que el síndrome del aceite tóxico causaría más víctimas que ETA (“ya verán ustedes cómo el aceite de colza hace más víctimas que ETA en toda su historia”), una forma de razonamiento que recuerda a cuando la izquierda abertzale se quitaba los muertos de encima alegando que los fallecidos en accidentes de tráfico, mucho más numerosos que las víctimas del terrorismo, no provocaban ni de lejos la alarma social que su magnitud haría esperar, todo lo cual revelaba a las claras la hipocresía de quienes se rasgan las vestiduras por los muertos que ETA, en su camino de liberación nacional, iba dejando en las cunetas. Escribía Savater que fijarse solamente en la violencia terrorista era síntoma de “la más putrefacta hipocresía” porque “terror y violencia es el *trágala* de la autoridad competente y su perpetua obstinación en manipular la voluntad de los ciudadanos a su conveniencia”. En ese *trágala* incluía el ingreso de España en la OTAN, la política económica, cuyas víctimas eran los trabajadores, la energía nuclear encarnada en la central de Lemóniz y también “los terroristas tratados como delincuentes”.

En otro artículo publicado en *El País*, comentaba en estos términos el suplicatorio que se pidió contra los parlamentarios abertzales Francisco Letamendia y Telesforo Monzón,

quienes es indudable que no han hecho sino expresar el sentir y el pensar de sus votantes, suponiendo estos un número nada desdeñable de ciudadanos, pues fue, por cierto, suficiente para alcanzar

representación parlamentaria. Intentar acallar esas voces en lugar de aprovecharlas como expresión e índice de uno de los puntos de vista más decisivos en el conflicto vasco equivale a fomentar el diálogo de las metralletas. Y además supone una concepción trivial y unánimista del Parlamento, privado de su dimensión de confrontación radical, que es precisamente la que mejor podría rescatar sus restantes insuficiencias [\[54\]](#).

Fíjese el lector en este párrafo, compendio de todas las ideas y lugares comunes que su autor acabaría rechazando en los términos más enérgicos. Frente al apoyo cerrado a la ilegalización de Batasuna en sus últimos años, aquí defiende la necesidad de que encuentre expresión “uno de los puntos de vista más decisivos en el conflicto vasco”, pues su acallamiento podría provocar un recrudecimiento de la lucha armada; la propia expresión de “conflicto vasco” ha sido luego repudiada por “los libres e iguales” como manifestación de equidistancia y de coartada ideológica a las tesis de ETA. Es típico entre conversos forzar el lenguaje hasta extremos asombrosos, pues es obvio que el País Vasco, como Irlanda del Norte, ha sufrido uno de los mayores conflictos políticos de Europa occidental en las últimas décadas. Incluso un autor tan poco sospechoso de radicalismo intelectual como Juan Linz publicó en 1986 un libro titulado precisamente *Conflicto en Euskadi* [\[55\]](#). Que en el País Vasco no haya habido un enfrentamiento entre comunidades como sí lo hubo en Irlanda del Norte no quiere decir, sin embargo, que en el primero no haya habido conflicto, un conflicto distinto del norirlandés, pero conflicto al fin y al cabo: ¿cómo, si no, calificar lo que sucede en un territorio en el que una organización terrorista, que cuenta con el apoyo de más del 10% de la población, asesina a cientos de ciudadanos, donde surgen grupos parapoliciales que actúan contra los miembros de dicha organización (del Batallón Vasco Español a los GAL), donde una parte relevante de la ciudadanía aspira a separarse de España, etc.?

Esta forma de purismo expresivo no tiene más funcionalidad que politizar el lenguaje, de forma que se produzca una separación entre los malvados que hablan desde la complicidad sobre el “conflicto” vasco y quienes prefieren separarse del sentido común, negando que haya conflicto alguno, con el fin de reafirmar unos principios morales prístinos que los miserables no comparten.

El contraste entre las posiciones de Savater en los años 1979-1981 y las

que luego adoptó es tan fuerte que no cabe hablar de una evolución intelectual o de una profundización de ciertos elementos argumentales; más bien se trata de una inversión completa, realizada además a la contra de la historia, ya que mientras podía tener sentido reclamar la ilegalización de Batasuna cuando esta daba plena cobertura a la actividad militar de ETA, causante de decenas de muertos al año allá por 1980, resulta más cuestionable la sobreactuación en contra de la izquierda abertzale cuando ETA estaba en una evidente decadencia y era dicha izquierda, capitaneada por Arnaldo Otegi, la que podía presionar al brazo armado para que cesara en su actividad criminal, como de hecho acabó ocurriendo a raíz de la ruptura del proceso de paz en diciembre de 2006 con el atentado de la T-4. Habría tenido mayor coherencia histórica haber exigido la ilegalización de Batasuna en 1980 y haber apostado en 2006, tras tres años sin atentados mortales, por reforzar al brazo político, con el fin de que este presionara al brazo militar para que no volviera a actuar. Pero la peculiar biografía política de Savater (y de otros muchos como él) iba al revés. Savater ha exigido siempre, con la gruesa ironía que estila, que todos los demás sigan su mismo rumbo: comprender a Batasuna en los años más duros y criminalizarla cuando podía ser útil para que ETA abandonara definitivamente la violencia.

La contemporización de Savater con la izquierda abertzale resulta innegable en los años de la Transición. A la hora de discutir sobre el fin del terrorismo, esta era su postura: “Cualquier solución de alto el fuego debe procurar la colaboración de los elementos de Herri Batasuna, muchos de los cuales no son partidarios apriorísticos de la violencia y la justifican menos cada día, sin perder por ello el perfectamente respetable radicalismo de sus propuestas políticas” [56]. De hecho, en 1980 había criticado con dureza que se metiera en el mismo saco a ETA y a Herri Batasuna: “La violencia terrorista no es la prolongación del nacionalismo *abertzale* por otros medios, ni mucho menos su cifra y ápice” [57]. A diferencia de ETA, la izquierda batasuna presenta ciertos elementos positivos que despiertan la admiración indisimulada de nuestro autor. Así,

en un contexto político trapisondista, átono y desesperanzado, el fermento *abertzale* ha cortocircuitado el habitual mangoneo de los partidos y centrales sindicales para dar muestras sugestivas de espontaneidad organizativa y combatividad cívica. Es uno de los

casos de insumisión popular más notables de una Europa adocenada y en regresión derechista [\[58\]](#).

El texto es suficientemente elocuente y no requiere, me parece, apostilla de ningún tipo. El contraste con las ideas posteriores refleja un cambio tan furioso y radical que debe entenderse en términos de una “conversión” similar a la de los antiguos comunistas que, a partir de un momento traumático de ruptura, dedican toda su energía a denostar su propio pasado y, especialmente, a todos aquellos que porfían en el error sin querer abrir los ojos. En el caso del conflicto vasco, algunas de las voces más estridentes y agresivas han sido precisamente las de antiguos etarras o filoetarras, de la misma forma que algunos de los más combativos anticomunistas proceden de las propias filas del comunismo.

Me gustaría aclarar que en absoluto me parece censurable el cambio radical que figuras como Savater encarnan. Obviamente, desde un punto de vista personal, prefiero la etapa contraria a ETA, por muy cerril que en ocasiones haya sido, a la etapa de radicalismo ideológico en la que el movimiento abertzale era la antorcha de Occidente que guía y da ejemplo en la lucha contra el sistema. Asimismo, el hecho de que alguien haya defendido grandes tonterías en el pasado no descalifica las opiniones que pueda sostener en el presente. Dicho esto, creo también que, a la vista de estos virajes tan bruscos, el lector tiene buenas razones para poner en cuarentena la autoridad de ciertas figuras, sobre todo cuando defienden sus tesis en tono virulento y apodíctico, con una catarata de descalificaciones hacia quien no comparta todos los virajes que ellos, con suma frivolidad, deciden emprender.

Si, hasta el momento, me he centrado en el caso de las opiniones sobre ETA, es porque el terrorismo es mucho más que una ilustración de la tesis general: la inversión ideológica de tantos intelectuales españoles, que a partir de los años noventa abrazan sin complejos posturas cada vez más conservadoras y derechistas, se produce a raíz de una especie de epifanía a propósito del terrorismo nacionalista vasco.

Como bien se sabe, la actividad de ETA se intensifica enormemente en los primeros tiempos de la democracia española, alcanzando su nivel más elevado durante los años 1979 y 1980. Incapaz de mantener semejante ritmo mortal, debilitada por las detenciones policiales, en 1981 se produce una caída muy pronunciada en el número de víctimas mortales. Durante toda la década de los

ochenta, ETA trata de mantener la presión sobre el Estado cometiendo atentados más salvajes, sobre todo a través del uso del coche bomba, que se inicia en 1982: se trata de un tipo de atentado de gran eficacia y bajo riesgo para los terroristas. La letalidad de los ataques con coches bomba en la historia de ETA es más del doble que la del resto de ataques. Son los años del atentado de Hipercor en Barcelona (21 muertos), de la plaza de la República Dominicana en Madrid (12 muertos), de la casa cuartel de Zaragoza (11 muertos) o de la casa cuartel de Vic (9 muertos). El propósito de los terroristas consistía en imponer, mediante la violencia, un coste al Estado y la sociedad que forzara a las autoridades a negociar con ETA y, eventualmente, a conceder la independencia.

En esa guerra de desgaste, el Estado mantuvo múltiples contactos con los terroristas desde la Transición a la democracia, si bien no se produjeron unas verdaderas negociaciones hasta 1989 (en el llamado proceso de Argel) [\[59\]](#). Las conversaciones parecieron confirmar la postura de ETA, según la cual cuanto más fuerte se golpeará al enemigo, más probable era que este acabase desistiendo. La negociación, como por lo demás cabía esperar, no fructificó y ETA persistió en la estrategia de presionar “poniendo muertos sobre la mesa”. Sin embargo, en 1992, las fuerzas de seguridad obtuvieron un éxito innegable con la detención de la cúpula entera de ETA en la localidad francesa de Bidart. Los terroristas nunca consiguieron recuperarse del golpe, como queda de manifiesto en la reducción estructural del número de víctimas mortales a partir de ese año [\[60\]](#).

ETA tuvo que readaptarse a sus nuevas condiciones de debilidad, tanto por lo que toca a la estrategia política general como por lo que respecta a las tácticas armadas empleadas. Simplificando mucho, los cambios se tradujeron en un abandono paulatino de la negociación bilateral con el Estado, en beneficio de la formación de un frente amplio nacionalista que incluyera al PNV, y en la táctica de “socialización del sufrimiento”, consistente en atentar contra representantes políticos. En el pasado, ETA militar había atentado contra alcaldes franquistas, pero nunca había asesinado a políticos elegidos democráticamente (ETA político-militar sí había matado a cargos de UCD en el País Vasco a finales de los años setenta). El primer asesinato de esta nueva fase fue el del concejal del PP en San Sebastián, Gregorio Ordóñez, el 23 de enero de 1995. Entre esa fecha y 2003, ETA acabó con la vida de 25 cargos públicos, la mayoría de los cuales eran, como Ordóñez, concejales (11 del PP,

2 del PSOE y 2 de UPN).

Tanto la “socialización del sufrimiento”, a partir de 1995, como la constitución de un frente nacionalista, que comienza a materializarse en 1998 con la Declaración de Estella/Lizarra, tuvieron un profundo impacto en el País Vasco. Aunque ETA estaba en una posición mucho más débil desde un punto de vista militar, los atentados contra políticos locales suponían una campaña de limpieza ideológica que ponía en cuestión el funcionamiento mismo de la democracia, puesto que los representantes del PP y el PSOE no podían competir en igualdad de condiciones con los de los partidos nacionalistas vascos. Asimismo, la constitución de un frente nacionalista amenazaba con partir en dos mitades el País Vasco. A diferencia del conflicto de Irlanda del Norte, donde desde el principio había habido un enfrentamiento sectario muy violento entre las dos comunidades, la católica y la protestante, en el País Vasco, antes de 1995, ETA militar nunca atentó de forma sistemática contra ciudadanos por el hecho de no ser nacionalistas. No llegó a producirse nunca la temida “ulsterización” del conflicto. Con todo, la división de los vascos entre partidarios y detractores de la Declaración de Estella/Lizarra podía quebrar definitivamente la convivencia.

En aquel contexto, cobraron un protagonismo creciente diversas organizaciones de la sociedad civil que decidieron plantar cara a los designios de ETA. Algunas de estas organizaciones, como Gesto por la Paz, existían desde 1987, pero no empezaron a recibir un apoyo popular fuerte hasta bien entrados los noventa. Otras organizaciones, como el Foro de Ermua, surgieron tras el traumático secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997, que realmente marcó un antes y un después en el rechazo social a ETA. En el País Vasco había habido antes grandes manifestaciones en contra del terrorismo, por ejemplo, tras el asesinato de José María Ryan (en 1981) o para exigir la paz (en 1989, durante el proceso negociador de Argel). Sin embargo, la oleada de indignación popular que se desencadenó con Miguel Ángel Blanco desbordó las movilizaciones anteriores, tanto cuantitativa como cualitativamente. Quizá la principal novedad fuera que la reprobación social se extendiese más allá de ETA, afectando a la izquierda abertzale en su conjunto y, en menor medida, al nacionalismo hegemónico en el País Vasco.

A los efectos que nos interesan, es especialmente importante, en el contexto de creciente rechazo a ETA y su mundo, la constitución en 1999 de ¡Basta Ya!,

la asociación o plataforma de oposición al terrorismo y al nacionalismo, en la que se integraron intelectuales y periodistas como Fernando Savater, Jon Juaristi, Mikel Azurmendi, Carmen Iglesias, Arcadi Espada, Iñaki Ezkerra, José María Calleja, además de políticos (Rosa Díez) y víctimas del terrorismo (Consuelo Ordóñez). ¡Basta Ya! se proponía defender a las víctimas del terrorismo, que hasta entonces habían tenido una presencia social reducida y habían recibido escasas muestras de solidaridad por parte de las instituciones vascas y de la propia sociedad civil. En la plataforma figuraban personas que venían luchando valerosamente desde los años ochenta en este terreno, entre quienes sobresalía Calleja, no por casualidad uno de los pocos que consiguió desprenderse del sectarismo ideológico del grupo. Las manifestaciones, concentraciones, llamamientos y escritos de ¡Basta Ya! tuvieron un efecto enorme, gracias fundamentalmente a la labor publicista de su portavoz y principal inspirador, Fernando Savater, removiendo conciencias y abriendo los ojos a muchas personas que no habían dedicado suficiente atención al coste humano causado por el terrorismo.

Fuera del País Vasco, las actividades de ¡Basta Ya! gozaron de amplia cobertura mediática, con un apoyo que podríamos calificar de casi unánime en los periódicos en papel, del *ABC* a *El País*. En este último periódico publicaban con frecuencia muchos de los promotores de la plataforma. Consiguieron así un cierto efecto de arrastre: muchas personas que hasta entonces habían mostrado un interés muy escaso por el terrorismo y sus víctimas se convirtieron en antietarras sobrevenidos. Como suele ocurrir en este tipo de fenómenos, hubo bastante de sobreactuación y, lo que sin duda es peor, gentes que en condiciones normales no habrían logrado destacar de ninguna forma aprovecharon la nueva dinámica para darse a conocer y labrarse una figura pública. Solo gracias a la actitud militante de los medios de comunicación españoles y a la disposición extremadamente favorable de las editoriales puede entenderse que periodistas como Iñaki Ezkerra llegaran a publicar libros sobre el tema vasco y a ser considerados sesudos analistas. Recuerdo, por ejemplo, haber leído, por recomendación entusiasta de Savater en las páginas de *Babelia*, un libro de Ezkerra [\[61\]](#) y quedarme pasmado por el hecho de que aquellas páginas, sin una sola idea propia, que repetían con muy limitada brillantez los lugares comunes que entonces circulaban en la órbita de ¡Basta Ya!, pudieran ser consideradas dignas de encomio y de publicación en la principal editorial española. En aquellos años, los publicistas de ¡Basta Ya!

lograron que cualquier panfleto o desahogo literario contra ETA y el nacionalismo vasco se convirtieran en valiosa aportación y recibiera la imprescindible proyección mediática que necesitaba. En esta especie de proselitismo intelectual se encuentran ya las raíces del sectarismo político que se haría evidente con la transformación de la plataforma cívica en partido, Unión, Progreso y Democracia (UPyD).

Pocos, creo, se atreverían a cuestionar que ¡Basta Ya! y sus intelectuales desarrollaron una tarea ejemplar en su enfrentamiento con ETA y su reclamación de dignidad para las víctimas del terrorismo, deslegitimando (e incluso ridiculizando) el discurso de la izquierda abertzale. Creo, en este sentido, que los intelectuales que participaron en la plataforma dieron un ejemplo de cómo puede movilizarse a la sociedad por una causa admirable y mostraron el efecto de hablar claro sobre las coartadas ideológicas que empleaban ETA y su mundo para justificar el uso de la violencia terrorista. Ahora bien, reconocido esto, hay que señalar asimismo que dichos intelectuales fueron mucho más lejos y, no contentos con combatir a ETA y reclamar mayor solidaridad con las víctimas, se empeñaron en promover ciertas tesis sobre la naturaleza del nacionalismo vasco y su conexión con el terrorismo, así como sobre la política antiterrorista que debería llevarse a cabo para acabar con ETA, que, desde mi punto de vista, tenían un fundamento muy endeble y un sesgo muy conservador desde el punto de vista político.

Como traté de explicar en el capítulo anterior, creo que escritores, filósofos y ensayistas son mucho más eficaces a la hora de defender valores y principios que en la elucidación de las causas de fenómenos políticos y sociales. Así se comprueba también en este caso: los argumentos que han ofrecido estos intelectuales sobre el origen de la violencia etarra y la naturaleza del nacionalismo vasco son fruto, por lo general, del desconocimiento y el prejuicio. Lo mismo cabe decir sobre las recomendaciones (muchas veces presentadas como exigencias) en materia de política antiterrorista.

Reducida a su mínima expresión, la postura que adoptaron tantos intelectuales con respecto al frente nacionalista del Pacto de Estella/Lizarra consistió en suponer que la alianza entre el PNV y Batasuna no era una anomalía, sino la expresión última de la afinidad electiva entre los distintos tipos de nacionalismo, que anteponían la defensa del proyecto nacional vasco a los derechos fundamentales de los ciudadanos (sobre todo, de los ciudadanos que no compartían el credo nacionalista). Los nacionalistas se

dividían el trabajo según la célebre sentencia de Arzalluz: “Mientras unos agitan el árbol, otros recogen las nueces” [62]. De ahí que, en el fondo, pudiera hablarse de una complicidad o complementariedad entre las ramas pacífica y violenta del nacionalismo vasco. Siguiendo este razonamiento hasta el final, no quedaba más remedio que concluir que el PNV no quería la desaparición de ETA.

Dado el desafío del frente nacionalista vasco, los intelectuales de ¡Basta Ya! consideraron que la respuesta debía consistir en unir a los dos grandes partidos españoles, el PP y el PSOE, en un frente constitucionalista vasco que defendiera el Estatuto de Gernika y la Constitución de 1978 [63]. Aquí se sitúa una primera y esencial ambigüedad: lo que para algunos era una alianza cimentada en valores constitucionales y cívicos, para otros era la oposición de un nacionalismo (el español) contra otro (el vasco). Luego tendré oportunidad de explicar por qué creo que la interpretación correcta es la segunda, por mucho que protesten los protagonistas, que siempre han considerado ofensivo que se les tache de “nacionalistas” españoles. En cualquier caso, gracias a esa ambigüedad, el PP y sus terminales mediáticas supieron instrumentalizar ¡Basta Ya!, sin que a los intelectuales afectados pareciera molestarles demasiado. Fuera con el consentimiento tácito o explícito de todos estos hombres de letras, el PP utilizó su discurso para armar un proyecto de reivindicación orgullosa de una España fuerte que se imponía a las presiones centrífugas de los nacionalismos periféricos; lo hizo bajo el disfraz del “patriotismo constitucional”, un concepto inventado en Alemania para limar los aspectos más amenazadores del nacionalismo germánico. No es casualidad que dicho concepto hiciera fortuna en dos países con un pasado fascista traumático. Muchos cayeron en la trampa, como quedó claramente de manifiesto cuando una figura política tan reaccionaria como Jaime Mayor Oreja, que representaba el ala neofranquista de la derecha, fue adoptada por los intelectuales de ¡Basta Ya! como referente constitucional y democrático. De esta manera, el PP de Aznar pudo superar algunas de las limitaciones que atenazaban a su anterior encarnación, la de la Alianza Popular (AP) de Manuel Fraga. La principal era, obviamente, la conexión última de la derecha española con la derecha franquista que se recicló en la Transición y que trató por todos los medios de frenar los avances democráticos y de derechos civiles del nuevo periodo político. Era la AP que se había opuesto en parte a la Constitución de 1978 (la mitad de su grupo parlamentario no votó a favor),

que se opuso a la descentralización territorial, a la ley del divorcio, a la ley del aborto, *etc.* Aquel lastre político mermó considerablemente las posibilidades de AP de llegar al Gobierno. El discurso constitucionalista que le ofrecían los intelectuales de ¡Basta Ya! fue clave, a mi juicio, para que Aznar lanzara sin complejos su ofensiva españolista tras conseguir la mayoría absoluta en 2000.

La historia de aquel frente constitucionalista promovido por los intelectuales vascos no pudo ser más triste. Los periódicos publicaron en portada la foto del acto convocado por ¡Basta Ya! en el que aparecía en el centro Savater agarrando las manos de Mayor Oreja y Nicolás Redondo Terreros. Tuvo lugar el 28 de abril de 2001, apenas dos semanas antes de unas elecciones que ellos creían que iban a cambiar el destino de Euskadi. En un ambiente fuertemente cargado de emoción debido a la campaña brutal de ETA contra políticos constitucionalistas y contra personas que denunciaban la coacción terrorista (como José Luis López de la Calle, asesinado el 7 de mayo de 2000), allí estuvieron o expresaron su apoyo muchos personajes públicos: desde Raphael hasta Elvira Lindo, desde Albert Boadella hasta Alejo Vidal Quadras, desde José María Fidalgo hasta Mikel Azurmendi. Según *El País*, 2.000 personas abarrotaban el local; según *ABC*, siempre más generoso, eran 7.000. Con el apoyo de los partidos políticos y de los grandes medios de comunicación, se creó la impresión de que, por primera vez, los no nacionalistas vascos iban a ganar las elecciones autonómicas. El chasco fue monumental. El 13 de mayo la coalición formada por PNV y EA (dos grupos políticos enfrentados históricamente que se unieron en respuesta a la alianza PP-PSOE) ganó cómodamente las elecciones con un 42,7% del voto (frente al 23,1% del PP y al 17,0% del PSE). Ello fue posible gracias a un aumento de la participación de 12 puntos, que activó un voto nacionalista que nadie esperaba (la “teoría oficial” era que los no nacionalistas no votaban a causa del miedo a ETA, por lo que una mayor participación solo podía beneficiar a PP y PSOE). En realidad, la hostilidad contra el nacionalismo fue tan intensa que muchos nacionalistas vascos reticentes acabaron votando pese a que la estrategia frentista del Pacto de Estella/Lizarra había terminado en fracaso.

Para ¡Basta Ya!, el problema de ETA era el PNV. Mientras el PNV continuase en el poder, ETA seguiría encontrado formas de sobrevivir. Utilizando vagamente la metáfora maoísta de la guerrilla como el pez y la sociedad como el agua, la tesis es que no habría tantos peces (etarras) si no

hubiera tanta agua (nacionalistas). El mecanismo concreto, como suele suceder cuando se usan razonamientos analógicos, no estaba claro: se decía que la Ertzaintza hacía la vista gorda ante el terrorismo, o que el PNV, por el hecho de ser un partido nacionalista, alentaba y legitimaba la lucha de ETA... El caso es que el día en el que el PNV no ocupara las instituciones autonómicas se produciría una renovación profunda en el ejercicio de poder, se romperían las redes clientelares sobre las que se sostenía el poder de los nacionalistas, se perdería el miedo y se podría deslegitimar a ETA desde las instituciones autonómicas. Con independencia de lo que cada uno pueda pensar sobre estas expectativas que se formaron acerca de los efectos de un remplazo en el Gobierno vasco, el caso es que para nuestros intelectuales era esencial la derrota política del nacionalismo.

Curiosamente, la forma en la que finalmente se produjo la pérdida del poder por el PNV no fue mediante un enfrentamiento total con el mundo del nacionalismo vasco, sino gracias a la implicación del Gobierno del PSOE de 2004 en la pacificación de Euskadi. En las elecciones de marzo de 2009, muchos electores vascos apoyaron al PSE, que obtuvo su mejor resultado desde la constitución del Parlamento vasco, un 30,7% del voto. Aunque los intelectuales de referencia no entendieron en absoluto la situación, fue el proceso de paz iniciado por el Gobierno de Zapatero lo que dejó claro ante la sociedad vasca que el obstáculo principal al final de la violencia era la intransigencia de ETA y no el cerrilismo del Estado. El ascenso del PSE resultó, en buena medida, consecuencia de la actitud pragmática y flexible que adoptó el Gobierno de España en relación con el terrorismo.

El Gobierno de Zapatero supo aprovecharse de la situación de extrema debilidad en la que se encontraba la organización terrorista para llevar a cabo un proceso de diálogo y negociación que produjo una división irreversible entre los intereses del brazo armado (ETA) y del brazo político (Batasuna). Cuando el sector más duro dentro de ETA decidió reventar el proceso con el bombarzo de la T-4 del aeropuerto de Barajas el 30 de diciembre de 2006, se fraguó un distanciamiento entre los dos brazos que acabaría forzando a ETA a renunciar definitivamente a la violencia en 2011. Al final, una figura clave en el proceso de paz como Jesús Egiguren consiguió bastante más que cualquier intelectual o político próximo a las tesis de ¡Basta Ya! Esto no se lo han perdonado a Egiguren, uno de los políticos que ha sufrido los ataques más rastreros e injustos por parte de este grupo de intelectuales, ataques que han

continuado incluso tras la desaparición de ETA. Quiso la casualidad que el mismo día en el que ETA anunciaba el final del terrorismo, el 20 de octubre de 2011, Jorge Martínez Reverte publicara un artículo en *El País* acusando a Egiguren de “ponerle la alfombra roja a ETA”, de estar a favor “del abrazo de Vergara” y de ser un “tonto trabajador” [64]. Martínez Reverte estaba muy enfadado porque el acto celebrado en Ayete (la Conferencia Internacional de Paz) no era de su agrado y dudaba de que fuera el preludio del fin del terrorismo. Así no se acaba con los terroristas, parecía pensar, aquí hacen falta otras soluciones, como cualquier “macho discursivo” sabe de sobra. Se le notaba profundamente irritado por la posibilidad de que ETA decidiera por sí misma el final de la violencia. Para mayor escarnio, otro de los habituales en el matonismo verbal, el periodista Santiago González, comentaba en ese mismo y señalado día el artículo de Martínez Reverte desde su blog de *El Mundo* añadiendo de su cosecha un nuevo epíteto para Egiguren, “pirómano con ideas de bombero” [65]. Eso es lo que se dice estar a la altura de las circunstancias, ver pasar delante de tus narices el tren de la historia y no enterarte de nada. Pero es que unos días antes, Fernando Savater había intervenido en la presentación de un documental sobre el final del terrorismo y aprovechó para describir a Egiguren como “una máquina de equivocarse” [66]. Dos meses después, Félix de Azúa llamaba a Egiguren “un melifluo valedor de quienes han defendido el asesinato como arma política” [67].

En un país con una clase intelectual más civilizada, nada de esto habría sucedido. No estamos hablando de insultos procedentes de militantes de partido en las redes sociales o de los comentarios que dejan en las webs de los periódicos los lectores más sectarios, ni de tertulianos acostumbrados a la bronca y el griterío; se trata más bien de los intelectuales con mayor presencia social, ganadores de premios literarios y periodísticos. Por supuesto, podían estar en desacuerdo con las tesis de Egiguren, podían incluso ridiculizarlas y utilizar el sarcasmo, pero lo que resulta inaceptable es que le acusaran de complicidad con ETA. La acusación era especialmente dolorosa teniendo en cuenta que Egiguren ha vivido muchos años amenazado por los terroristas y tuvo que pasar por el asesinato de su amigo, el socialista Isaías Carrasco, el 7 de marzo de 2008, tras la ruptura del proceso de paz, una abyecta venganza de ETA que vino a materializar las amenazas vertidas en su día por Francisco Javier López Peña, *Thierry*, tras la ruptura de las negociaciones. Los ataques contra Egiguren fueron tan miserables como aquel comentario en la cadena

COPE del director del *ABC*, Bieito Rubido, sobre Eduardo Madina: “[Madina] Es una de las expresiones más nítidas de lo que podemos denominar el zapaterismo, que es un frontal odio al PP, que no se explica muy bien porque este chico sufrió un atentado de ETA. Simpatiza más con lo que representa ETA que con lo que representa el PP”. Luis Rodríguez Aizpeolea, que también ha sido blanco de la banda de los intelectuales matones (al igual que Iñaki Gabilondo), escribió en 2010 un artículo admirable titulado “¿Por qué odian a Egiguren?” que merece la pena releer; lo que queda tras el fragor de la batalla política es una enorme mezquindad y cortedad de miras [68]. Con la perspectiva que da el paso de tiempo, terminará siendo evidente que la contribución de Egiguren al final del terrorismo ha sido mucho más importante que la de estos intelectuales que anduvieron tan entretenidos repartiendo certificados de autenticidad antieta [69].

El proceso de paz no entraba en los planes de los ideólogos de ¡Basta Ya!, quienes arremetieron con furia en contra del mismo. De hecho, en otra de esas deformaciones lingüísticas sin fundamento, equivalente por su absurdo a la negación de que hubiera un conflicto en el País Vasco, se consideró políticamente incorrecto hablar de “proceso de paz” puesto que Euskadi no estaba en guerra [70]: los cursis hablaban del “mal llamado proceso de paz”, expresión ridícula donde las haya. El argumento no tenía ningún peso, pues la palabra “paz” no se opone solo a guerra, sino a todas las formas de violencia política que puede haber en una sociedad. Paz significa ausencia de guerra, pero, más en general, ausencia de violencia. Basta consultar el diccionario de la Real Academia para comprobarlo. La influencia ideológica de los intelectuales de ¡Basta Ya! era tan profunda que no solo los partidos políticos, sino también la inmensa mayoría de los periodistas y cronistas políticos, siguieron el modismo del “mal llamado proceso de paz” (los más moderados decían solamente “el llamado proceso de paz”). Igualmente ridículo fue el eslogan, mil veces repetido por estos intelectuales, de que lo importante no era la paz, sino la libertad: semejante recordatorio resultaba perfectamente gratuito, toda vez que nadie estaba planteando sacrificar “la libertad”. Que algunos se pusieron campanudos pronunciando la palabra “libertad” solo era a mayor gloria de sí mismos y de su pureza ideológica. El eslogan no tenía otro fin más que señalar, de nuevo, la diferencia entre unos políticos sin principios y unos intelectuales que ponen la libertad por encima de toda otra consideración. Que este tipo de simplezas tuvieran amplia difusión en la

esfera pública y se repitieran cansinamente tribuna a tribuna, columna a columna y tertulia a tertulia resulta muy revelador acerca del nivel que alcanza el debate público en España.

El grupo de ¡Basta Ya! estuvo muy cercano a las tesis del PP durante los años del proceso de paz. No podían aceptar que se acabara con el terrorismo o se derrotara al PNV mediante estrategias que no eran las que ellos promovían. Así se explica su incomodidad con la victoria del PSE en 2009 (a pesar de que Patxi López formó Gobierno gracias al apoyo de los diputados vascos del PP) y, especialmente, con el hecho de que Zapatero acabara con ETA en 2011 no habiendo seguido sus consejos. La realización del gran sueño de todos ellos, la desaparición de la violencia terrorista, no fue motivo de celebración alguna, pues no sucedió de acuerdo con sus esquemas preconcebidos acerca de la forma en que debía combatirse el terrorismo. En la época de Aznar, no había ningún inconveniente en hablar abiertamente de los éxitos del presidente del Gobierno y de su ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, en la política antiterrorista: como decían los intelectuales de ¡Basta Ya!, no había que ser sectario ni partidista; si la derecha merecía el elogio, ¿por qué se le iba a regatear? En aquellos años, el colmo de la imparcialidad consistía en hablar bien del PP y añadir a continuación que no se era de derechas. La falsedad de aquellas actitudes quedó bien patente cuando las alabanzas a los populares se trocaron en un incómodo silencio ante el logro incontestable de Zapatero, quien, sin ponerse medallas, terminó, a su manera, con el terrorismo. En este sentido, no deja de resultar llamativo que el editorial de *El País* en el que se analizaba el anuncio del final del terrorismo el 20 de octubre de 2011 no mencionara una sola vez el nombre del entonces presidente del Gobierno [\[71\]](#). Como suele decirse en estas ocasiones, así se escribe la historia.

La rigidez ideológica a propósito de ETA es en gran medida consecuencia de la moralización del problema del terrorismo que propulsaron estos intelectuales a finales de los años noventa y que impregnó a buena parte de las elites españolas. Hasta entonces, la lucha contra ETA se había planteado en términos policiales y políticos exclusivamente. Se trataba, por un lado, de usar la fuerza coactiva del Estado para detener a los terroristas y evitar que cometieran atentados y, por otro, de combinar medidas de unidad entre los partidos con el diálogo y la negociación (como ocurrió, por ejemplo, con la disolución de ETA político-militar). Por supuesto, el enfoque político parte de

premisas morales (defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos ante la violencia terrorista, por ejemplo), pero, frente a las exigencias de los principios morales, la política se mueve siempre en el ámbito de lo posible, lo que requiere pactar, acordar y transigir en el terreno de la realidad, dentro del margen de acción existente. En la práctica, son muchos los conflictos armados que finalizan mediante negociaciones entre las partes, aun si las partes enfrentadas han cometido atrocidades injustificables, pues de lo que se trata es de evitar el daño que la continuación del conflicto produciría. Las posturas moralistas censuran la negociación, ya que cualquier acuerdo entre representantes políticos y terroristas impedirá una aplicación rigorista de la justicia. En cambio, el enfoque político, inspirado en un mayor pragmatismo, busca la solución al conflicto haciéndose cargo de que dicha solución no es la que idealmente deseáramos, si bien constituye la mejor solución posible dadas las limitaciones que el poder de las partes impone.

En España, la moralización del terrorismo tuvo un desarrollo más bien paradójico, pues fue ganando terreno a medida que ETA se hacía más débil. Cuando ETA llevó a cabo sus mayores masacres, las actitudes, curiosamente, eran menos cerriles. En medio de la campaña de los coches bomba a la que antes hice referencia, fue posible que todos los partidos, incluyendo Alianza Popular, firmaran el 12 de enero de 1988 el Pacto de Ajuria Enea, cuyo punto 10 decía así:

Si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad de poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular.

Por eso resulta tan chocante que, 17 años después, en 2005, cuando ETA llevaba más de dos años sin asesinar a nadie, el Gobierno pidiera apoyo parlamentario para iniciar un proceso de diálogo y negociación con los terroristas y la respuesta del jefe de la oposición, entonces Mariano Rajoy, fuera acusar al presidente de traicionar a los muertos.

Igualmente, fue en los años ochenta cuando el Tribunal Supremo se opuso a la ilegalización de Herri Batasuna frente a las presiones del Gobierno de Felipe González, mientras que cuando se estaban dando los primeros pasos en el proceso de paz en 2006, ese mismo Tribunal aprobó la “doctrina Parot”, endureciendo arbitraria y retroactivamente las penas contra los etarras, doctrina que fue tumbada en 2013 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dejando a España en una situación incómoda desde el punto de vista del Estado de derecho. Por supuesto, los intelectuales de turno quedaron muy molestos por el fallo judicial [72]. Asimismo, conocido ya el alto el fuego del 22 de marzo de 2006, los jueces endurecieron notablemente la aplicación de la ley, con especial protagonismo de Fernando Grande-Marlaska, intentando, en la medida de sus posibilidades, impedir que Batasuna participara en el proceso [73].

Algo parecido podría decirse a propósito de los medios de comunicación, que prestaron mucha mayor atención en sus portadas y editoriales a los últimos crímenes de ETA, por esporádicos que fueran, que a las decenas de asesinatos cometidos a finales de los setenta y durante la década siguiente. No solo fue un asunto de espacio y cobertura de la noticia: el tono también cambió, volviéndose más doliente, provocando que un solo asesinato de ETA en 2000 produjera más angustia que 20 en 1980.

La moralización del terrorismo consiste en plantear el conflicto como un enfrentamiento entre absolutos, como un combate entre el bien y el mal. Cualquier intento de explicar la conducta de los terroristas (los “malos”) se transforma automáticamente en una justificación, en una coartada de la violencia. Ante el mal, lo único que cabe plantear es su supresión, su derrota. Edurne Uriarte, una tertuliana y politóloga cuyas opiniones no habrían tenido demasiado eco de no haber sido por el hecho desgraciado y lamentable de que ETA intentara atentar contra su vida, lo expresó mejor que nadie con esta fórmula: “La barbarie, la irracionalidad, el crimen, el mal, se explican por sí mismos” [74]. No hay nada que investigar o aclarar sobre las condiciones en las que surge la violencia: el crimen es autoexplicativo. Lo que debe hacerse frente al mal no es tratar de comprenderlo, sino combatirlo. De ahí, por ejemplo, la insistencia de los neoconservadores en que todos los terrorismos son iguales, idea que repitió machaconamente José María Aznar en sus tiempos de presidente: puesto que todos ellos son una manifestación del mal, las diferencias que puedan trazarse entre los mismos son irrelevantes y todos

deben ser combatidos igualmente, empleando la fuerza del Estado para aniquilarlos.

No creo que haga falta insistir en que yo también creo que el terrorismo, moralmente hablando, es una forma del mal. El problema es que eso sirve de poco: la aproximación moral no nos ayuda ni a entender la naturaleza del terrorismo ni a diseñar una estrategia con la que combatirlo. Es más, creo que tiene consecuencias negativas quedarse en un plano puramente moral, pues produce sectarismo y ceguera política. En la moralización del terrorismo, todos aquellos que se ven luchando desde la trinchera del bien consideran que quienes no comparten su visión del mundo son necesariamente cómplices del mal. En esta “guerra” no hay equidistancias o posturas intermedias: o se está con el bien o se está con el mal. Por eso, cuando surgen posturas alternativas para luchar contra “el mal”, suelen despacharse con gruesos reproches morales. Lo hemos visto hace un momento a propósito de los ataques contra Eguiguren o contra Zapatero por haberse metido en el proceso de paz, desviándose del guion previsto por los paladines del bien. El propio Savater se obsesionó con las condenas, criticando a todos aquellos que, aun no viniendo a cuento, no empezaban sus intervenciones condenando el terrorismo y expresando su solidaridad con las víctimas de ETA. Muchos recordarán sus ataques a los cocineros vascos, a los actores, a los organizadores y asistentes del Festival de Cine de San Sebastián, por no hablar de ETA como él habría hecho si le hubieran dado la palabra. Si los actores protestaban en una gala de los Goya por la guerra de Irak (un conflicto miles de veces más letal y destructivo que el vasco), Savater salía a acusarles de hipócritas por no criticar a los etarras. En fin, una obsesión con el terrorismo que, en todo caso, de haber tenido alguna utilidad, habría sido en los años más duros y no durante los estertores de ETA.

Muchos de los intelectuales moralizantes adoptaron el discurso de la resistencia. Se veían a sí mismos como resistentes frente a la amenaza fascista. Para ello, era preciso establecer antes que los etarras eran “fascistas” y que su proyecto era “totalitario” [\[75\]](#). Esto ha quedado tan asentado en el debate público español que a muchos les parecerá aberrante que se cuestione. No obstante, creo, una vez más, que se trata de un abuso del lenguaje que personas partidarias del rigor y versadas en el razonamiento lógico no deberían consentir. A mí me parece incorrecto afirmar que ETA es una organización fascista o que tiene un proyecto fascista. Esto resulta tan arbitrario como ese

eslogan mil veces coreado por manifestantes de izquierdas, “vosotros fascistas, sois los terroristas”, que vendría a ser la imagen espejular del “ETA, fascista”. Si bien el término “fascismo” es extremadamente complejo y susceptible de múltiples interpretaciones, lo que ha dado lugar a innumerables debates sobre su naturaleza y sus límites, la elasticidad del concepto no es tanta a mi juicio como para poder incluir un fenómeno como el de ETA. ETA lucha por la independencia y el socialismo, como en su día lo hicieron el IRA y otras muchas organizaciones armadas nacionalistas bajo la inspiración de los procesos de descolonización protagonizados por movimientos de liberación nacional. En la literatura académica sería impensable englobar a todos los movimientos nacionalistas, ya sean en el tercer o en el primer mundo, bajo la rúbrica de “fascista” por el hecho de que recurran a la violencia.

En rigor, el terrorismo fascista, tal como fue practicado por ejemplo en la Italia de los años setenta, es muy diferente al terrorismo de ETA: se basaba en atentados indiscriminados, no reivindicados, destinados a crear un clima de pánico que justificara ante la opinión pública una involución autoritaria. Una ilustración especialmente dramática sería la bomba que explotó sin aviso previo en la estación de tren de Bolonia el 2 de agosto de 1980, matando a 85 personas e hiriendo a más de 100.

Por otro lado, debe recordarse que los contactos que ha tenido ETA en el exterior han sido siempre con otros grupos nacionalistas y con grupos revolucionarios de extrema izquierda, nunca con grupos de extrema derecha. En cuanto al brazo político de ETA, Batasuna, siempre se le ha llamado “izquierda abertzale”; nada que ver, pues, con el fascismo.

En un sentido lato, no hay duda de que pueden establecerse ciertos paralelismos entre el fascismo y el terrorismo, pues ambos persiguen sus objetivos mediante la coacción y la violencia, pero teniendo en cuenta la variedad de grupos violentos que se han observado a lo largo de la historia no queda más remedio que concluir que los parecidos son meramente superficiales. Muchas de las características esenciales del fascismo, como el anticomunismo visceral, no aparecen en ETA. Obviamente, en la medida en que ETA es una forma extrema de nacionalismo, hay una conexión con el fascismo, que parte siempre de un nacionalismo exacerbado, de una necesidad de regeneración nacional ante la traición de los políticos y las elites. Con todo, no veo claro qué ganamos asimilando todos los nacionalismos al

fascismo, ni siquiera si nos limitamos a hablar de los nacionalismos violentos dejando al resto de nacionalismo (mucho más frecuente) al margen. Ha habido tantas formas de opresión, violencia y construcción nacional a lo largo de los siglos que disolverlas todas ellas en la etiqueta genérica de “fascismo” parece poco clarificador. En suma, creo que si ETA hubiera triunfado y se hubiese hecho con el poder en Euskadi, el resultado habría sido más próximo a la Albania de Enver Hoxha que a la Italia de Mussolini.

En realidad, quienes acusan a ETA de “fascista” lo hacen simplemente con espíritu denigratorio y deslegitimador. La apelación al fascismo se ha terminado convirtiendo en un epíteto que puede usarse en cualquier contexto (hoy día se habla incluso de “islamofascismo”, cortesía de Christopher Hitchens) para describir a todos aquellos que buscan sus objetivos al margen de los procedimientos establecidos en las democracias liberales. Tiene la ventaja, además, de que los antiguos izquierdistas pueden seguir presentándose como valientes luchadores antifascistas, disimulando un poco su vergonzante evolución ideológica hacia la derecha: ya lucharon contra el “fascismo” tardofranquista en la universidad y siguen haciéndolo 50 años después contra los “fascistas” de ETA.

Resulta lamentable la alegría con la que se recurre al fascismo en el debate público. Es un comodín que muy pocos se resisten a emplear. Uno de los ejemplos más recientes es la famosa carta a los catalanes escrita por el expresidente Felipe González, en la que este comparaba el movimiento nacionalista a favor de la independencia con los movimientos fascistas alemán e italiano del periodo de entreguerras [76]. Teniendo en cuenta el carácter cívico que ha adoptado el independentismo en Cataluña, la comparación no puede ser más desafortunada. Como no podía ser de otra manera, Félix de Azúa, dos semanas después, aumentaba la dosis y venía a decir algo así como que González se había quedado corto: en realidad, los nacionalistas catalanes son unos golpistas [77].

Cuando la apelación al fascismo no es suficiente para conseguir el objetivo buscado, puede irse incluso más allá introduciendo parecidos entre las víctimas del terrorismo y los judíos en la Alemania nazi. Si hay una causa moralmente intachable, que despierte la total unanimidad, es la del mal absoluto de los nazis con el pueblo judío. Por eso, nada realzaría más el mal del terrorismo etarra que el hecho de que la gente viera a las víctimas de ETA como judíos masacrados por el totalitarismo nazi del nacionalismo vasco.

Quizá por ello algunas asociaciones ligadas a las víctimas del terrorismo han tratado de que prospere judicialmente la tesis de que ETA cometió un genocidio. Se trata de una tesis mal planteada, pues ETA, dentro del universo de organizaciones terroristas, se ha caracterizado por ser notablemente selectiva en sus ataques, en su mayoría dirigidos contra las fuerzas de seguridad del Estado, sin que, como he comentado antes, haya habido una campaña sistemática de eliminación étnica de españoles de origen no vasco. Pero ante la indignación moral de las víctimas, la realidad es un estorbo.

En 2001, el historiador José Varela Ortega publicó un libro titulado *Contra la violencia. A propósito del nacional-socialismo alemán y del vasco* [78], en el que, usando las analogías con un espíritu libérrimo, trataba de analizar la situación vasca a la luz de la quiebra de la democracia alemana en los años treinta. Así, el equivalente de Hitler sería ETA; el de los judíos, las víctimas de ETA, y el del *Zentrum* católico (que resultó decisivo para dar la mayoría a Hitler en la votación de investidura de 1933), el PNV. Javier Tusell no salía de su asombro ante razonamiento tan forzado [79]. Aparte de las muchas imprecisiones históricas señaladas por Tusell, debe recordarse que ETA ha sido una organización clandestina que combatía el Estado, formada por unos pocos centenares de miembros, algo bastante distinto del Partido Nacional-Socialista. Si pensamos en su brazo político, debemos recordar que en tiempos recientes solo obtuvo buenos resultados electorales justamente cuando ETA dejó de matar (en las autonómicas de 1998 y de 2012) y siempre ha quedado por detrás del PNV. Por otro lado, los “judíos” en el País Vasco iban escoltados por las fuerzas de seguridad y contaban con la protección del Estado de derecho, diferencias que seguramente no son menores en la comparación con los judíos de la Alemania nazi.

Con todo esto no quiero minusvalorar ni los crímenes de ETA ni el valor y la heroicidad de quienes se levantaron contra los mismos. Pero creo que todo ello puede hacerse sin necesidad de exageraciones o de analogías ridículas. Ha habido mucho sufrimiento en la humanidad aparte del causado por fascistas y nazis, y ha habido millones de víctimas de violencia política que no eran judíos ni víctimas de ETA. No creo que haya razones poderosas para tener que analizar el conflicto vasco según los parámetros del fascismo. Otra cosa es que ese tipo de discurso cumpla una función positiva en la moralización del problema, en la contraposición entre posturas absolutas.

La moralización del debate sobre el terrorismo se detecta también en otros

países que, como España, han sufrido campañas terroristas prolongadas. Así se aprecia, por ejemplo, en Israel y en Colombia. Sin ir más lejos, el presidente Álvaro Uribe en Colombia siguió con respecto a las FARC unos planteamientos similares a los de José María Aznar y, como le sucedió a nuestros intelectuales patrios con Zapatero, no ha podido soportar que su sucesor, el actual presidente José Manuel Santos, haya emprendido un ambicioso proceso de paz que, por primera vez en muchos años, puede acabar pacificando un país que arrastra uno de los conflictos armados más duraderos de la historia reciente. En un artículo publicado en *La Razón*, siendo ya expresidente, describía así Uribe la influencia de España en Colombia:

Sus partidos políticos [los de España] y la sociedad en general son paradigma de madurez para nuestros países y ejemplo en la necesaria fortaleza y unión contra el terrorismo. Pensadores como Fernando Savater y Edurne Uriarte y programas políticos como el del Partido Popular inspiraron nuestra política de Seguridad Democrática y nos ratificaron que cuando al terrorismo se le apacigua con concesiones agiganta su capacidad destructora [80].

Uribe, además de haber convertido la lucha contra las FARC en una cruzada moral, es responsable de múltiples violaciones de derechos humanos, siendo el escándalo de los “falsos positivos” el más grave de todos ellos. Los miembros de las Fuerzas Armadas colombianas asesinaron a más de 2.000 civiles haciéndolos pasar por guerrilleros para cumplir con los resultados que se les exigían en el marco de la política contrainsurgente. Pero una vez que Uribe se situó en el lado del bien, todo eso son menudencias: en una entrevista realizada en 2012 en Colombia, preguntado por su juicio global sobre Uribe, Savater decía que en conjunto su gestión fue positiva, ante lo que el periodista le inquiría sobre el escándalo de los falsos positivos (conocido desde 2008) sin que el entrevistado se atreviera a lanzar una sola crítica a la política de seguridad del gobierno uribista [81]. Eso es lo que se llama “sensibilidad selectiva” hacia las víctimas de la violencia.

La moralización del conflicto violento alcanza su paroxismo en la doctrina del expresidente George Bush sobre la “guerra contra el terrorismo”. En Estados Unidos, los conservadores del Partido Republicano han llevado hasta sus últimas consecuencias la doctrina de la “claridad moral”, la idea de que la

política debe guiarse según unos valores simples y poderosos con independencia de sus resultados prácticos. Esto significa que la “razón moral” es suficiente para justificar, en respuesta a los ataques del 11-S, las guerras de Afganistán e Irak, inspiradas en la convicción de que Estados Unidos debe combatir el mal allí donde este se encuentre. El concepto de “claridad moral” ha tenido eco en España a través del libro del ruso-israelí Natan Sharansky, *The Case for Democracy* [82]. Sharansky fue un preso político en la Unión Soviética, emigró a Israel y fundó un partido para defender la integración de los judíos rusos en la política israelí. Acabó integrándose en el Likud y fue ministro en un par de ocasiones, promoviendo los nuevos asentamientos de colonos en Cisjordania y presidiendo un comité secreto para expropiar propiedades de los palestinos. En ambas ocasiones, dimitió en protesta por los planes gubernamentales de llegar a algún tipo de acuerdo negociado con los palestinos. Su libro divide el mundo en sociedades libres y sociedades del miedo y defiende que las sociedades libres tienen la obligación moral de extender la democracia por el orbe. Sharansky considera que Israel no viola los derechos humanos de los palestinos, quienes viven en condiciones de libertad. Su principal temor es que un eventual Estado palestino pudiera no ser democrático, por lo que se opone a hacer concesión alguna. El propio George Bush mostró su admiración por el libro. En España, el acto de presentación de la versión española tuvo lugar en 2005 y corrió a cargo del presidente de FAES, José María Aznar, quien nos dejó esta perla, que supongo hizo las delicias de nuestros combativos intelectuales:

Hoy sabemos que el terror subsiste, en España lo sabemos bien. Sabemos que en España el terrorismo destruye moral y materialmente nuestra sociedad; sabemos que asesina y explota nuestras debilidades y, frente a la tentación pactista, la tentación de la entrega, del apaciguamiento o simplemente de la negociación o rendición, la defensa de la libertad exige claridad moral e intelectual [83].

Eduarne Uriarte, en la misma línea, escribió una columna en 2006 bajo la inspiración del libro de Sharansky con el nada ambiguo título de “La claridad moral”, en la que describía en estos términos el proceso de paz iniciado por Zapatero:

A medida que pasan los días se acrecienta mi pesimismo sobre la batalla democrática contra ETA. Y no solo por la debilidad y los recurrentes errores del presidente del Gobierno, que ya han otorgado a los terroristas una legitimidad negociadora que jamás debieron tener. Hay algo aún peor, que es la confusión moral con la que importantes sectores sociales han viciado quizá irremediabilmente esta batalla. Batalla que ya ni siquiera es tal, que ha sido convertida en un proceso de paz en el que, en aras a la salvadora negociación, los demócratas son colocados a la misma altura que los terroristas, en el que parece difuminarse la infranqueable línea moral e ideológica entre el estado democrático y los terroristas, entre los ciudadanos pacíficos y los asesinos [\[84\]](#).

Con matices, por supuesto, para no parecer tan aznarista o neoconservador que los lectores se espanten, esta fue, en lo esencial, la postura de tantos y tantos intelectuales a propósito del proceso de paz: Felix de Azúa, Antonio Elorza, Arcadi Espada, Agustín Ibarrola, Jon Juaristi, Santos Juliá, Antonio Muñoz Molina, Fernando Savater, Mario Vargas Llosa, *etc.* La reflexión de Muñoz Molina tras el atentado de la T-4 fue especialmente interesante por situarse en un registro puramente moral:

Se confirmaron mis peores barruntos, el sentimiento de vejación de ver un país entero dependiendo de individuos con capuchas... Esas actrices que repartían flores como si repartieran esperanza... ¡La esperanza no me la dan los pistoleros! Toda la situación que ha precedido a este atentado me ha parecido vejatoria para la dignidad democrática del país. Sentí eso: la humillación de un Estado que no ha sabido tener dignidad [\[85\]](#).

Muchos de estos intelectuales creyeron que había llegado la hora de crear un partido nuevo, UPyD, un partido que hablara sin cortapisas sobre los males del nacionalismo, del sistema autonómico y, sobre todo, de la política antiterrorista, en su opinión totalmente desnortada tras el proceso de paz. Se pusieron manos a la obra en 2007 y eligieron como responsable de la organización a una política, Rosa Díez, una mujer sin estudios universitarios, de profesión administrativa y *apparatchik* del PSOE durante décadas,

exconsejera del Gobierno vasco, famosa por aquel memorable reclamo turístico del “Ven y cuéntalo” lanzado en la época de la “socialización del sufrimiento” [86], que se resistió cuanto pudo a la ruptura de la coalición con el PNV y que se presentó sin ningún éxito a la secretaría general del PSOE en el 35 congreso del PSOE en 2000 (quedó la última de los cuatro candidatos, con un ridículo 6% de apoyos), momento a partir del cual decidió seguir trepando en la política labrándose la imagen sobrevenida de aguerrida anti-ETA y antinacionalista hasta ser convertida por el grupo de los intelectuales en secretaria general del nuevo partido. Si quieren hacerse una idea de lo que aquel partido podía dar de sí, no dejen de buscar en YouTube el discurso locoide del escritor Álvaro Pombo en el famoso mitin de Vistalegre del 3 de abril de 2011, quien no paró de decir sandeces entre atronadores aplausos y caras de enorme satisfacción de la líder y sus acólitos (Toni Cantó, Carlos Martínez Gorriarán, etc.) [87]. Rosa Díez fue víctima del culto a la personalidad practicado por los grandes intelectuales de este país. Vargas Llosa le dedicó un emocionante artículo en *El País*:

La mejor credencial de UPyD es Rosa Díez, su portavoz y fundadora, a quien los ciudadanos españoles suelen dar los mejores calificativos entre los líderes políticos. Esta mujer menudita y de ojos efervescentes tiene convicciones muy firmes y ha demostrado a lo largo de su vida pública, como un puñado de políticos vascos democráticos, un coraje a prueba de terroristas y fanáticos que despierta mi admiración. [...] Rosa Díez es lo que Max Weber llamaba un “político de convicción”. Ella y su partido merecen una presencia mayor en el ámbito nacional [88].

No es de extrañar que Díez, después de leer estas palabras, empezara a comportarse como una líder sectaria, incapaz de soportar la crítica, y a verse a sí misma como la encarnación en forma humana de la Constitución de 1978. En muy poco tiempo, dilapidó todo su capital político: creyéndose la máxima valedora de los valores democráticos, expulsó a los disidentes, impuso su voluntad de forma autoritaria y despreció la expansión de Ciudadanos. El resultado es claro: quedó sumida en la irrelevancia política. Savater, antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015, publicó un artículo abroncando a los ingratos y desmemoriados españoles que en las

encuestas retiraban su apoyo al juguete político de los intelectuales de ¡Basta Ya!, pero a la vista de los resultados electorales no parece que surtiera gran efecto: en las elecciones generales de 2015, UPyD quedó en voto incluso por detrás de PACMA (el Partido Animalista) [\[89\]](#).

La ideología de UPyD tiene gran interés aquí, pues condensa, sintetiza y simplifica muchos de los argumentos que los intelectuales más obsesionados con el terrorismo empezaron a desarrollar en los años noventa. Según la idea básica, existe un vínculo profundo entre nacionalismo y terrorismo: el nacionalismo es el sustrato político del que se nutre el terrorismo de ETA. Así, la actividad de ETA se legitima porque los terroristas hablan en nombre de aquellos que consideran que el pueblo vasco constituye una nación propia. El hecho de que muchos de esos vascos no acepten que ETA se arroge la representación de sus aspiraciones y no aprueben el uso de la violencia es algo más bien irrelevante para el argumento, pues lo decisivo es que si no hubiera nacionalismo, no habría terrorismo nacionalista. Si, además, el nacionalismo democrático (el del PNV, para entendernos) ha mostrado en ocasiones cierta comprensión o incluso cierta complicidad con los terroristas, como sucedió por ejemplo en la etapa del Pacto de Estella/Lizarra, el argumento cobra fuerza.

Que si no hubiera conciencia nacionalista en el País Vasco no habría surgido ETA, como de hecho no surgió en Murcia o en La Rioja, por mencionar dos comunidades autónomas sin dicha conciencia, es indudable. Como indudable es que si no hubiera hombres, no habría violencia machista. Ahora bien, ¿quiere eso decir que el nacionalismo, de alguna forma, acaba conduciendo al terrorismo? Mientras que la primera parte de la tesis se limita a establecer que el nacionalismo es condición necesaria para el surgimiento del terrorismo nacionalista, algo difícilmente discutible, la segunda parte va mucho más allá y concluye que es también condición suficiente. La tesis más fuerte, por tanto, establece que el nexo entre terrorismo y nacionalismo es tan sólido que la diferencia entre ambos es tan solo una diferencia de grado. El nacionalista, por definición, excluye: traza una línea divisoria entre quienes pertenecen a la nación y quienes son extraños o extranjeros. Solo hace falta intensificar la exclusión para empezar a expulsar gente del territorio y terminar extinguiéndolos por la fuerza, en actos de genocidio y limpieza étnica.

Una vez que nos deslizamos de la tesis del nacionalismo como condición necesaria para el surgimiento de la violencia nacionalista a la tesis del

nacionalismo como condición suficiente de dicha violencia, la solución lógica al terrorismo consiste en acabar con el nacionalismo: eliminando el nacionalismo, la tentación terrorista desaparecerá. Los nacionalistas, según el argumento, deben entender que la igualdad política es el valor supremo sobre el que debe organizarse la vida política. Esto significa que si hay democracia y Estado de derecho, es decir, si hay un sistema de reglas e instituciones que garantizan unos derechos comunes a todos los ciudadanos, la reivindicación nacionalista resulta inaceptable. Desde este punto de vista, no está justificado reclamar un ámbito propio de decisión por cuestión identitaria o nacional cuando la democracia y el Estado de derecho rigen en un país.

La consecuencia de este razonamiento es que no hay una justificación moral o política para una demanda de secesión en un orden democrático en el que los ciudadanos tienen garantizados sus derechos fundamentales. Las fronteras del Estado no son objeto de decisión democrática porque, como insiste Félix Ovejero en un trabajo lleno de afirmaciones tajantes y absolutas, los Estados no son asociaciones voluntarias, de modo que “hay una radical incompatibilidad entre democracia y secesión” [\[90\]](#).

Por desgracia para el argumento, las cosas son algo más complejas, tanto desde el punto de vista teórico como empírico. ¿Verdaderamente puede una democracia desentenderse de una demanda de separación si esta viene respaldada por una amplia mayoría residente en una parte del territorio con viabilidad estatal? Se trata de un asunto complejo y endiablado, pero, frente a las certezas de nuestros más conspicuos “antinacionalistas”, conviene recordar que la inmensa mayoría de las democracias existentes se han construido nacionalmente, a partir de un principio de afirmación nacional, en el que un grupo de individuos decide autogobernarse [\[91\]](#). Las constituciones que están en la base de las democracias liberales comienzan apelando a un pueblo que actúa como sujeto político. La Constitución norteamericana se abre con el famoso “*We the people of the United States*”; la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania se inicia con la declaración del pueblo alemán de dotarse de un orden constitucional; la Constitución francesa de 1958 establece en su preámbulo que “el pueblo francés proclama solemnemente su adhesión a los derechos humanos y a los principios de la soberanía nacional”; la Constitución española, en su preámbulo, anuncia que “la Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad...”.

En el fundamento de las democracias contemporáneas hay, pues, una premisa nacional excluyente. Las normas, deberes y derechos que se dieron los españoles en 1978 se las dieron a sí mismos, no al género humano. La exclusión de los otros es bien explícita: el orden político se construye en torno a una comunidad que acepta resolver conjuntamente sus problemas comunes. Todos aquellos que no pertenecen a dicha comunidad no quedan vinculados por las decisiones que esta tome.

La democracia, por tanto, no se instituye como un orden político universal, sino como la forma de gobierno de la que se dota un pueblo en el libre ejercicio de su autodeterminación política. De ahí que las democracias contemporáneas tengan dos elementos constitutivos esenciales, la igualdad política por un lado, que garantiza que todos los miembros de la colectividad puedan participar en el proceso político mediante el voto, y el autogobierno, en virtud del cual las decisiones que afectan al colectivo, al pueblo, las toman los representantes de dicho pueblo. El antinacionalismo más primario consiste en amputar el principio de autogobierno del sistema democrático, de forma que este consista únicamente en celebrar elecciones, sin entrar a considerar relevante el colectivo que debe participar en las mismas. Desde este punto de vista, las elecciones son solamente un mecanismo para cambiar gobernantes, no un procedimiento mediante el cual un conjunto de personas acepta tomar decisiones colectivas por sí mismo (al margen, por tanto, de otros colectivos o pueblos). Que este planteamiento da lugar a consecuencias absurdas es algo bien sabido en la teoría de la democracia. Sin ir más lejos, Robert Dahl, en *Democracy and its Critics*, propuso un sencillo experimento mental para ilustrar lo que sucede cuando se pasa por alto la condición nacional de nuestras democracias [\[92\]](#). Dahl nos coloca en la siguiente situación: supongamos que Estados Unidos invade Costa Rica sin derramamiento de sangre y convierte a este país en un nuevo estado de la Unión, con los mismos derechos de representación que el resto de Estados y sometido a las mismas obligaciones fiscales que los demás. Los ciudadanos costarricenses pasan a ser ciudadanos estadounidenses que pueden votar en las elecciones presidenciales y legislativas y gozan de todas las libertades de las que disfrutaban el resto de estadounidenses. Según la tesis liberal de que solo importa el Estado de derecho y las reglas democráticas, el costarricense no tendría motivos para oponerse a semejante anexión, pues sigue siendo tan libre como lo era antes y puede participar en la conformación de las decisiones

colectivas de la misma manera en la que lo hacía en el pasado. Joseph Weiler aplicó esta situación hipotética al contexto europeo, a fin de mostrar la importancia de que en la UE no haya un demos supranacional que acepte tomar soberanamente decisiones en común [93]. En su caso, hablaba de la anexión de Dinamarca por parte de Alemania. ¿Por qué iban los daneses a objetar si se les garantiza la igualdad de derechos con el resto de ciudadanos alemanes?

Tanto Dahl como Weiler entienden que el punto de partida de la democracia es la existencia de un demos, un conjunto de personas que se sienten parte de la sociedad que acepta tomar decisiones colectivamente mediante procedimientos democráticos. Afirmar, como constantemente se hace en el debate español, que el asunto de la pertenencia nacional es irrelevante políticamente en tanto la persona sea un ciudadano en una democracia con Estado de derecho, implica ignorar que dichas democracias y Estados de derecho se sostienen sobre un demos.

Desde el punto de vista del Estado, lo que importa es conservar el territorio, mantener las fronteras incólumes. Pero el interés del Estado no tiene por qué coincidir siempre con el interés de sus ciudadanos. Entra dentro de la lógica de la acción política, y así se observa en muchos casos históricos, que un colectivo nacional desafíe las fronteras del Estado. En el fondo, quienes suponen que la cuestión de la secesión es implantable en democracia están privilegiando el *statu quo*, es decir, la distribución de Estados que históricamente se ha consolidado. ¿Por qué el principio nacional que opera en la base de la formación de los Estados modernos no puede seguir aplicándose una vez que la democracia entra en funcionamiento? Las razones por las que unas naciones geográficamente concentradas han conseguido condición de Estado y otras no son en buena medida contingentes; dicha condición es fruto de guerras, revueltas, tratados, etc., que, de forma harto caprichosa, han ido configurando las fronteras de los Estados existentes. Suponer que las fronteras estatales deben estar blindadas por los siglos de los siglos frente al ejercicio de la democracia implica una discriminación hacia aquellas naciones que, por motivos históricos, no han llegado a alcanzar naturaleza estatal y, sin embargo, quieren constituirse como Estados.

Para evitar malentendidos, me gustaría subrayar que no estoy defendiendo un derecho universal de autodeterminación de los pueblos, ni creo que pueda defenderse en términos de un “derecho” la coincidencia plena entre Estado y nación. Todos sabemos que las apelaciones al “pueblo” que figuran en las

constituciones de tantos países encubren siempre un notable grado de heterogeneidad étnica y cultural. Y también sabemos que los conflictos de inspiración nacional han sido una lacra a lo largo de estos dos últimos siglos. Lo que estoy planteando más bien es que en una democracia consolidada como la española (o como la británica o la canadiense), en una sociedad con un elevado nivel de desarrollo económico (y, por tanto, con un riesgo mínimo de conflicto violento), si un movimiento nacionalista demanda pacíficamente una separación del Estado, dicho Estado no puede limitarse a negar la demanda sobre la base de que las fronteras son constitucionalmente inmutables.

A veces el negacionismo de la cuestión nacional se lleva hasta sus últimos extremos. Fernando Savater, por ejemplo, basaba su particular negación en una confusión obvia. A su juicio, frente a las diferencias nacionales

existen de manera inconfundible varones y mujeres, ateos y creyentes, negros, blancos y amarillos, pero nadie se escandaliza porque tales diferencias no se reflejen en formas de ciudadanía distintas. Son distintos, pero no políticamente distintos [\[94\]](#).

Al margen de que las diferencias religiosas hayan sido motivo fundamental de partición (por ejemplo, entre la India y Pakistán), es evidente que la diferencia de género no afecta a la constitución de un Estado y que jamás en la historia de la humanidad ningún colectivo se ha planteado formar un Estado compuesto solo por mujeres o solo por hombres. Una de las características esenciales de los Estados (frente a asociaciones y corporaciones varias) es que necesariamente tienen una base territorial: sin territorio no hay Estado. Así como ser hombre o mujer no tiene ninguna relevancia territorial, la existencia de un grupo geográficamente concentrado que desarrolle identidad nacional puede dar lugar a una demanda de Estado propio. O, con otras palabras, mientras que el género no tiene potencia de Estado, una nación con una base territorial sí [\[95\]](#). De ahí que no resulte muy acertado asimilar políticamente las diferencias de género a las diferencias nacionales.

A medida que el Estado moderno ha ido ganando presencia en el mundo, los conflictos imperiales y las guerras de conquista han ido reduciéndose, a la vez que los conflictos nacionales se han ido haciendo más frecuentes. Son muchos los Estados que no han conseguido resolver los problemas que se generan cuando varios grupos nacionales conviven dentro de unas fronteras comunes.

Sabemos, además, que los conflictos de origen étnico o nacional pueden llegar a ser extremadamente cruentos. No obstante, incluso los investigadores más críticos con el nacionalismo admiten que los conflictos nacionales, por sí mismos, no generan ineluctablemente violencia [96]. De hecho, la mayor parte de las veces, los Estados, o los propios colectivos nacionales, consiguen una coexistencia pacífica. En el debate español, la referencia constante a las guerras balcánicas en la antigua Yugoslavia se utiliza para subrayar la irresponsabilidad de las demandas nacionalistas. Pero debería recordarse que, según los estudios comparados, la probabilidad de que en un país con el nivel de desarrollo económico de España el conflicto nacional pudiera degenerar en una guerra civil como la yugoslava es muy próxima a cero.

En cualquier caso, el principio nacionalista que inspira las demandas de grupos étnicos sin Estado no es conceptualmente diferente del principio nacionalista que está en la base de muchos de los Estados ya existentes: se trata de que un colectivo de personas decida gobernarse colectivamente. La única diferencia es que en un caso aparecen estructuras estatales, mientras que en el otro dichas estructuras quedan como un elemento puramente aspiracional. Lo que unifica ambos casos es la presencia de la nación como fuente de obligaciones y lealtades de la gente que forma el colectivo.

Los antinacionalistas más primarios suelen criticar las demandas nacionalistas de grupos sin Estado como manifestaciones de formas atávicas de relación social: se refieren a los proyectos nacionalistas como si fueran apelaciones a pulsiones tribales. Las referencias a la “tribu” son constantes en el debate público español. Jon Juaristi tituló uno de sus libros sobre el nacionalismo vasco *La tribu atribulada* [97]. Por su parte, Mario Vargas Llosa ha declarado en innumerables ocasiones que “el nacionalismo es un regreso a la tribu para eludir la propia responsabilidad, es una tara que solo se puede combatir con la cultura” [98]. En realidad, la doctrina que establece la naturaleza “tribal” del nacionalismo corresponde a Karl Popper (en *La sociedad abierta y sus enemigos*, uno de sus libros más panfletarios y menos analíticos) [99]. Parece increíble que una idea tan errada haya podido tener tanto éxito en el debate español, por muy ilustre que sea su progenitor. Cualquiera que esté familiarizado con la literatura académica sobre nacionalismo sabe que la organización nacional de las colectividades humanas es esencialmente distinta a la organización tribal: mientras que en la tribu las obligaciones recíprocas en el seno de la comunidad se producen mediante

linajes familiares y contacto personal, en la nación las personas desarrollan obligaciones hacia un colectivo amplio de individuos de los que no se tiene otra información salvo que comparten caracteres con los miembros de dicho colectivo. Esos caracteres pueden ser la lengua, la religión, la historia (real o inventada)... Como invento moderno que es, la nación supera el esquema tribal y consigue el “milagro” de que haya gente dispuesta a dar su vida (o, con menor dramatismo, a pagar impuestos) por una colectividad en la que no conoce personalmente sino a una fracción minúscula de sus componentes.

Qué sea una nación es un asunto extremadamente controvertido. Las teorías y definiciones que se han propuesto son muchas. En la terminología filosófica de John Searle, podríamos decir que las naciones son ontológicamente subjetivas, es decir, existen como creencias compartidas por un cierto número de personas acerca de los valores, obligaciones y lealtades que comparten entre sí [\[100\]](#). Dichos valores, obligaciones y lealtades generan una identidad que actúa como criterio de pertenencia a la nación. Las creencias sobre la comunidad nacional pueden tener una base falsa, artificial, inventada, como han mostrado Benedict Anderson o Eric Hobsbawm, es decir, pueden basarse en mitos y relatos históricos sin fundamento, pero ello no les resta poder “performativo”: una vez que las creencias se extienden y comparten, generan una identidad y un sentido de pertenencia que comienza a tener efectos políticos (el objeto de las obligaciones y lealtades se focaliza en el colectivo nacional).

Detengámonos un momento en el asunto de las obligaciones para con nuestros nacionales. Como españoles, nos preocupan más los parados de España que los parados de Azerbaiyán. No es que seamos completamente indiferentes a los parados de aquel país remoto, seguramente nos sentiríamos más tranquilos si encontraran todos ellos trabajo. Sin embargo, no estamos dispuestos a que con nuestros impuestos se financiara el subsidio de desempleo de los parados de Azerbaiyán. De hecho, el porcentaje de ayuda a los ciudadanos de otros países que se reserva en los presupuestos de los países desarrollados no suele llegar al 1% del PIB. Ese es el nivel de solidaridad que, en condiciones normales, estamos dispuestos a sufragar. Por supuesto, cuando hay catástrofes naturales o espantosas guerras civiles y llegan imágenes de la tragedia a los aparatos de televisión de los hogares,

muchos se estremecen y hacen aportaciones extraordinarias. Ahora bien, la diferencia con la tragedia doméstica es palmaria: si el horror tiene lugar dentro de nuestras fronteras, exigimos que el Estado se haga cargo de la seguridad y bienestar de todas las personas afectadas, cueste lo que cueste.

De la misma manera, cuando se produce un accidente de avión, los medios de comunicación se apresuran a destacar cuántos nacionales viajaban en el aparato no porque la vida de nuestros nacionales valga más que las de otros, sino simplemente porque sentimos una mayor cercanía o identificación con esas víctimas que con el resto de personas. Hoy en día este tipo de reacción es tan natural como que nos duela en mayor medida la suerte de un miembro de nuestro círculo familiar que la de alguien totalmente desconocido. Los vínculos nacionales, aun siendo en general más débiles que los familiares, están completamente asumidos en nuestra vida cotidiana y dan lugar a lo que Michael Billig ha llamado “nacionalismo banal” [\[101\]](#).

El concepto de “nacionalismo banal” es crucial para entender las asimetrías que se producen entre nacionalismos con Estados y nacionalismos sin Estado. Mientras que la bandera nacional ondeando en el balcón de un edificio público de nuestro Estado nos resulta algo normal, que un grupo nacional sin Estado se empeñe en hacer ondear su propia bandera parece a muchos una muestra indudable de “aldeanismo” y “tribalismo”. Proponen como remedio a esa patología que los nacionalistas viajen y conozcan mundo (como decía Vargas Llosa en la cita que antes reproduje, el nacionalismo se “cura” con cultura), pero no está de más recordar que algunos de los más aguerridos nacionalistas sin Estado son personas con una trayectoria internacional muy destacada. Más allá de lo que cada uno piense de sus posicionamientos, no parece que pueda decirse, por ejemplo, que el problema de algunos de los académicos catalanes que con más vigor defienden la independencia de su territorio sea que su horizonte cultural o intelectual no va más allá de las veguerías catalanas: cuando uno analiza el currículum de algunos de ellos (Xavier Sala-i-Martí, Andreu Mas-Colell, Carles Boix, Jordi Galí, etc.) y lo compara con el de nuestros antinacionalistas (los Espada, Savater, Juaristi...), tan castizos ellos en sus planteamientos, preocupaciones y estilo literario, resulta evidente que el nacionalismo no tiene demasiado que ver con viajar o no viajar.

¿Cómo han respondido los intelectuales españoles “antinacionalistas” ante la reclamación de Estado por parte de colectivos nacionales como los del País

Vasco y Cataluña? En el caso del País Vasco, la cosa fue relativamente sencilla: mientras hubiera violencia y coacción por parte de ETA, no se daban las condiciones para plantear un reajuste constitucional del País Vasco o su eventual independencia. El momento de mayor intensidad política se produjo durante las dos primeras legislaturas de Ibarretxe. Posteriormente, con la derrota parlamentaria del Plan Ibarretxe y la decadencia de ETA, el conflicto nacionalista en el País Vasco ha ido rebajándose, por lo que los expertos en “vasquismo” han ido perdiendo protagonismo en el debate público, a la vez que los expertos en “catalanismo” cobraban mayor visibilidad.

El debate sobre Cataluña resulta mucho más interesante desde el punto de vista intelectual, pues la ausencia de violencia obliga a las partes a ser más explícitas sobre los argumentos a favor y en contra de las reivindicaciones de las fuerzas nacionalistas catalanas. Durante muchos años se dijo que mientras hubiera violencia no podía plantearse la cuestión de la independencia. Eso había que dejarlo para los tiempos de paz. En ausencia de violencia, todo se podría plantear y debatir. Pero cuando, para sorpresa de muchos, el independentismo empezó a crecer no en el País Vasco, sino en Cataluña, y lo hizo de forma pacífica y cívica, se descubrió que aquel latiguillo de que todo es debatible no era más que una glosa del principio de libertad de expresión, sin consecuencia política alguna. La razón por la cual las demandas de independencia caen en saco roto en cuanto traspasan los límites de Cataluña es porque todos aquellos que rechazan la partición de España saben que tienen a la Constitución de su parte. La independencia de Cataluña solo puede realizarse mediante el procedimiento agravado de reforma constitucional, prácticamente imposible de satisfacer en la práctica: se requiere una mayoría de dos tercios, la disolución de las Cortes, una nueva mayoría de dos tercios más referéndum popular. Cualquiera de los dos partidos grandes podría vetar un proceso de enmienda que se enfrente a estos requisitos.

Ante un punto de partida tan ventajoso, los argumentos que se han preparado para combatir el independentismo tienen un aire de pereza y desgana intelectual. A mi juicio, lo que hemos visto en estos años es el desarrollo y extensión de un catálogo de argumentos destinados a deslegitimar la demanda de independencia, siempre con la intención de no tener que llegar al fondo de la cuestión, que no es otro que el de si una demanda de secesión debe procesarse según parámetros democráticos. La cuestión última, la cuestión de qué se debe hacer en una democracia cuando un grupo con caracteres

nacionales y territorialmente concentrado pide separarse del Estado titular, apenas si ha sido abordada, excepto desde las posiciones independentistas. Un libro filosófico como el de Joan Vergés, *La nació necessària*, no ha tenido, a mi juicio, una respuesta a su misma altura desde las filas del antinacionalismo catalán [\[102\]](#).

La mayor parte del debate público acerca del conflicto catalán se consume en cuestiones secundarias y se dirige sobre todo contra las defensas más mostrencas del nacionalismo. Sin ánimo de ser exhaustivo, y sin recurrir a ilustraciones, a continuación hago un resumen muy apresurado y esquemático de los principales argumentos que se manejan [\[103\]](#).

En primer lugar, se insiste en que no existe el derecho de autodeterminación en el caso de Cataluña. Puesto que el derecho de autodeterminación solo se contempla en el derecho internacional para casos de invasión, guerra, dominación colonial u opresión grave y ninguna de estas condiciones se da en Cataluña, a esta comunidad no le asiste derecho alguno para decidir si quiere ser un Estado o no. Este argumento es correcto, pero tiene muy poca relevancia: se puede plantear la secesión no como el ejercicio de un derecho, sino como un proyecto político con legitimidad democrática. Cuando se hace de forma inteligente, es decir, sin intentar hacer pasar el caso catalán por un ejemplo de opresión colonial o dominación opresiva, los argumentos del derecho internacional tienen una relevancia más bien limitada. La cuestión entonces es otra: ¿qué respuesta política debe ofrecerse desde el Estado si llega a haber una mayoría clara a favor de la independencia de una parte de su territorio?

En segundo lugar, se dedica amplio espacio a denunciar las falsedades e inventos del nacionalismo, tanto con respecto a la historia como a las relaciones económicas entre Cataluña y el resto de España. Los historiadores que no son nacionalistas catalanes se han dedicado a desvelar las mistificaciones y deformaciones que, con intención política, se han propagado desde ámbitos nacionalistas catalanes. Asimismo, hay una fuerte controversia sobre el alcance de la solidaridad interterritorial, el déficit de inversiones y el saldo fiscal entre Cataluña y el Estado central. Tengo la impresión (no soy especialista en estas cuestiones y las conozco de manera más bien superficial) de que gran parte de las críticas que han lanzado historiadores y economistas sobre los argumentos nacionalistas catalanes son correctas. Ahora bien, aun siendo este un asunto importante, no afecta decisivamente al núcleo de la

cuestión: hay que insistir de nuevo en que la reclamación de independencia se puede realizar al margen de lo que haya sucedido en el pasado y por motivos distintos a los económicos. Por supuesto, los independentistas tratan de construir un relato nacional que resulte atractivo, para lo cual proporcionan una reconstrucción de la historia catalana y española que se adecúe a sus propósitos e inciden en la injusticia del reparto interterritorial de fondos, pero estos elementos no son esenciales o constitutivos del proyecto secesionista. Que los nacionalistas defiendan argumentos zafios y no ajustados a la verdad no quiere decir que podamos sin más desentendernos de una voluntad ampliamente extendida de separación.

En tercer lugar, se alega que en Cataluña no se dan las condiciones democráticas necesarias para resolver la cuestión de la independencia mediante procedimientos democráticos. Según esta tesis, en Cataluña se ha ido estableciendo una “espiral de silencio” en virtud de la cual todos aquellos que no son partícipes del anhelo independentista callan en la sociedad para no ser estigmatizados o repudiados. Resulta difícil imaginar que no haya un cierto nivel de presión social y que en algunos lugares esa presión pueda excepcionalmente llegar a ser opresiva, pero debe recordarse que el movimiento independentista ha seguido hasta el momento un modelo pacífico y cívico para defender sus objetivos. Por lo demás, es indudable que los catalanes pueden recurrir a periódicos, emisoras de radio y televisión, revistas y libros que atacan de forma acerba y recurrentemente el independentismo. Falta de información no hay precisamente. Y, en cualquier caso, si se considera que el debate público está viciado, nada mejor que eliminar mediaciones y recurrir a una consulta o referéndum para averiguar qué es realmente lo que la gente piensa.

En cuarto lugar, se añade que el proyecto independentista es un invento de las elites, las cuales habrían manipulado a la ciudadanía. Las elites son más nacionalistas que la sociedad civil y, sobre todo, los políticos con responsabilidad de gobierno han encontrado un chivo expiatorio en España para no tener que rendir cuentas ni por sus políticas de ajuste ni por los escándalos de corrupción. El independentismo sería una cortina de humo para tapar estos asuntos. Las respuestas posibles a este tipo de argumento son varias. La primera, que es la menos interesante por ser *ad hominem*, señalaría que muchos de quienes expresan su preocupación por la falta de coincidencia entre elites y ciudadanía en la cuestión catalana no se caracterizan

precisamente por hacer oír sus voces cuando se produce esa misma ruptura a propósito de asuntos económicos en el conjunto de España: apenas se han oído sus voces para criticar las políticas de austeridad impuestas por instituciones supranacionales en contra de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. Esta especie de radicalismo democrático con respecto a Cataluña parece por tanto un poco oportunista. La segunda respuesta, algo más elaborada, podría aceptar que el proyecto independentista tiene más pujanza entre las elites que entre la ciudadanía, pero, si así fuera, y al igual que en el caso anterior, nada mejor para corregir el independentismo de las elites que dar la palabra al pueblo, de forma que un referéndum aclare su nivel de apoyo a dicho proyecto y pueda determinarse si el pueblo es más, menos o tan independentista como sus representantes. La tercera respuesta se limitaría a recordar que no hay nada intrínsecamente malo o antidemocrático en que las elites tengan preferencias algo distintas a las de los ciudadanos, siempre y cuando los ciudadanos posean la última palabra. Los líderes políticos siempre han aspirado a transformar la opinión pública, a arrastrar a sus ciudadanos en nuevas direcciones, a persuadir a la gente y a cambiar sus opiniones. Si la ciudadanía no quiere seguir el proyecto que un líder político defiende, siempre puede retirarle su confianza en las siguientes elecciones. En este sentido, el político puede arriesgar y desviarse de lo que la gente piensa, con la esperanza de poder convencer a los suyos de que sus decisiones eran las correctas. Si fracasa por tener insuficiente poder de convicción, serán los propios ciudadanos quienes castiguen electoralmente a ese líder.

Una variación con respecto a este argumento pasa por defender la idea de que los catalanes son víctimas de un engaño masivo por parte de los partidos nacionalistas. Dichos partidos, con la ayuda de los medios y de algunas asociaciones de la sociedad civil, habrían llenado de pájaros las cabezas de los pobres catalanes, quienes están viviendo una especie de espejismo político al tragarse la idea de que la independencia está a la vuelta de la esquina. Este tipo de razonamiento, en el que se priva de todo entendimiento a la ciudadanía, no merece demasiada atención y además es inverificable.

En quinto lugar, se dice que la secesión marcha contra el curso de la historia, pues el Estado-nación como forma política ha quedado superado por las fuerzas de la globalización. La soberanía nacional es hoy más que nunca una quimera, continúa la tesis, especialmente en el seno de la Unión Europea. En un mundo donde la tendencia es a unirse por arriba, vienen ahora unos

políticos localistas a pedir la división por abajo. Aderécese el argumento con un toque de cosmopolitismo (ciudadano del mundo, etc.) y ya ha quedado en perfecto ridículo la demanda independentista. Los problemas de este planteamiento son varios. Por un lado, todavía no se ha inventado una forma política alternativa al Estado-nación. De hecho, nunca antes como ahora un porcentaje tan elevado de la humanidad había vivido en el seno de Estados-nación, ni nunca había habido tantos Estados como hoy: la tendencia histórica sigue siendo que aumente el número de Estados con el paso del tiempo. La UE, que suele ponerse como contraejemplo, es todavía poco más que un experimento y sería precipitado afirmar que se trata de un caso de éxito: el federalismo político a escala continental y la disolución de los demos nacionales en un gran demos europeo parecen en estos momentos resultados muy lejanos, si no inalcanzables. Por otro lado, si fuera cierto, como se dice con tanta frecuencia, que la soberanía ya no es un concepto operativo en el mundo actual, se debilitaría no solo la causa independentista, sino también su contraria, pues si no tiene sentido pedir la independencia porque ya no hay soberanía que ejercer, tampoco tendría sentido empeñarse en mantener la unidad de España cuando no hay soberanía a la que recurrir. Para alguien que de verdad piense que la soberanía no existe o que su existencia es meramente residual, la cuestión de las fronteras nacionales debería ser irrelevante.

En sexto lugar, se recuerda machaconamente que Cataluña es una sociedad plural y por lo tanto no debería ensayarse la vía secesionista. Pero el conflicto entre pluralidad e independencia solo llega a surgir si el proyecto independentista se basa en la voluntad de construir un Estado nacionalmente homogéneo que suprima la diversidad existente. En caso de no ser así, la pluralidad interna de Cataluña no es una razón ni a favor ni en contra de la separación. La misma pluralidad puede haber en un Estado catalán que en la comunidad autónoma catalana. A menudo se afirma, para mostrar la insensatez del proyecto independentista, que en Cataluña son mayoría quienes tienen identidades duales, es decir, quienes se sienten tan catalanes como españoles, más catalanes que españoles o más españoles que catalanes, siendo la identidad unívoca (sentirse solo catalán o solo español) minoritaria. Esto es indudablemente así, como prueban infinidad de encuestas. Sin embargo, debe recordarse que un eventual referéndum versaría sobre la forma de Estado, no sobre los sentimientos identitarios de la gente (este es uno de los errores de planteamiento que con más frecuencia se repiten en el debate público): nada

impide que en una Cataluña independiente pueda haber ciudadanos que tengan identidades duales. El hecho de que Cataluña pasara a constituirse en Estado no tendría por qué afectar a los sentimientos de la gente. Una cosa son dichos sentimientos y otra la forma política a través de la cual se tomen decisiones colectivas. Por supuesto, hay una relación entre ambos elementos: quienes se sientan solo catalanes o más catalanes que españoles apoyarán con mayor entusiasmo la independencia y viceversa. Pero eso no quita que estemos hablando de cosas distintas, como queda claro cuando se repara en que dentro de un Estado catalán no tendría por qué haber exclusivamente identidades catalanas.

En séptimo lugar, se apela al corazón de todos aquellos que, sintiéndose de izquierdas, apoyan la secesión: los demás pueden apoyar el nacionalismo secesionista, pero la persona de izquierdas no debería hacerlo, pues tiene un compromiso firme con el internacionalismo. Este argumento, especialmente en boca de antiguos izquierdistas que han evolucionado hacia posiciones conservadoras, tiene mucho de impostado. Primero, porque no resulta creíble que quienes han abandonado todo compromiso con las causas que defiende la izquierda se acuerden ahora de su olvidada ideología para desempolvar el internacionalismo. La fórmula “yo rechazo el secesionismo a fuer de internacionalista proletario”, pronunciada por aquellos intelectuales que han pasado del dogma marxista al liberalismo descreído, suena a moneda falsa. Quizá el momento más conmovedor sea cuando estos intelectuales denuncian el carácter burgués del movimiento nacionalista, como si regresaran por un momento a sus posturas de juventud. Segundo, y más importante: la historia de la izquierda y del nacionalismo es suficientemente compleja y variada como para no poder realizar afirmaciones lapidarias sobre la incompatibilidad entre ambos. El nacionalismo es una ideología tan versátil y elástica que en algunos momentos se ha podido conjugar con la izquierda a través de movimientos políticos de liberación nacional. Lo mismo puede decirse desde la perspectiva de la izquierda: la izquierda marxista ha tenido tantos desarrollos y ramificaciones que algunos de ellos han tenido una afinidad electiva con el nacionalismo. En la medida en que la reivindicación nacionalista es en muchas ocasiones de naturaleza popular y se opone al *statu quo* de los Estados ya existentes, el izquierdista puede considerar que con los nacionalistas cabe establecer algún tipo de alianza o solidaridad.

No creo que esta lista sea exhaustiva, seguramente haya más argumentos

circulando por la esfera pública de los que no me he hecho eco aquí. Por otro lado, más allá de las cuestiones de principio, hay también polémica sobre los instrumentos políticos que debería emplearse, si es mejor un referéndum o unas elecciones plebiscitarias, una declaración unilateral de independencia o un proceso gradual de desconexión, *etc.* Me gustaría mostrar tan solo un ejemplo de la frivolidad con la que se aborda el asunto. Durante varios años, coincidiendo con la celebración de la Diada, Javier Cercas ha aprovechado para dedicar algunas de sus colaboraciones en *El País* al tema catalán. En 2013, en un artículo que fue muy celebrado por afirmar con ese estilo tajante tan ibérico que el derecho a decidir no existe, que es una aberración democrática (lo que le valió el aplauso de Vargas Llosa [\[104\]](#)), Cercas escribía esto:

Los partidarios del derecho a decidir sostienen que precisamente para eso, para saber si existe, es indispensable un referéndum (en este asunto, las encuestas no sirven, como comprobamos en las anteriores elecciones); pero, antes de usar ese recurso excepcional e imprevisible, cualquier político honesto y prudente usaría el recurso previsto por la ley: las elecciones. Quiero decir: unas elecciones en las que todos los partidos declaren, clara e inequívocamente, su posición sobre la independencia [\[105\]](#).

Esto es justamente lo que ocurrió con motivo de las llamadas elecciones plebiscitarias del 27 de septiembre de 2015: Artur Mas, no habiendo podido celebrar un referéndum acordado con el Gobierno central, optó por convocar unas elecciones en la que los partidos independentistas se presentaban claramente con el programa de la secesión. Cercas podría haber considerado que por fin le daban la razón, pero esta fue su reacción:

No extrañaré que la última ocurrencia de Mas y sus adláteres consista en prometer que van a ir hacia la independencia, tras las elecciones, sin encomendarse a nadie, sin tener mayoría de votos (solo de escaños) y sin organizar un referéndum sobre la independencia (solo sobre la constitución del nuevo Estado). A esa barbaridad incalificable llaman nuestros gobernantes catalanes radicalidad democrática [\[106\]](#).

Ahora el reproche es que no se haya organizado un referéndum: pero ¿no habíamos quedado dos años antes que los referéndums los carga el diablo y que era más adecuado dirimir la cuestión mediante unas elecciones en las que los partidos establecieran con claridad su postura en torno a la independencia? Cuando Mas anunció el referéndum, Cercas reclamó unas elecciones plebiscitarias, y cuando Mas planteó las elecciones como un plebiscito sobre la independencia, Cercas exigió un referéndum.

Este tipo de incoherencias, aunque adopten un tono más sutil, están muy presentes en el debate. Me referiré solo a una de ellas. La crítica más repetida al plan de desconexión institucional auspiciado por el conjunto de los secesionistas catalanes tras las elecciones del 27 de septiembre de 2015 ha consistido en la falta de apoyo popular que dicha iniciativa tiene. Como se recordará, la suma de las fuerzas partidarias de la independencia en las últimas elecciones catalanas estuvo próxima al 50% del voto, un 47,7% (un 36% del censo). Claramente, se trata de un apoyo insuficiente para iniciar un proceso de independencia, pero esto es algo que pueden objetar aquellos que (como quien escribe estas páginas) consideran que la demanda de Estado propio debe procesarse democráticamente, convocando un referéndum al efecto en el que la gente se exprese libremente. Así lo llevo defendiendo desde hace años y por ello creo que no incurro en incoherencia alguna al considerar que los independentistas han perdido la razón que pudieran haber tenido en sus reivindicaciones anteriores al haber iniciado un proceso de “desconexión institucional” que no reúne el consenso social necesario para una iniciativa de este alcance. Lo que resulta absurdo es que quienes llevan años negando que este conflicto se pueda resolver contando voluntades, en la medida en que, según su opinión, esto atentaría contra algunos principios constitutivos de la democracia y el Estado de derecho, ahora aleguen precisamente que el problema del proyecto de desconexión institucional es que no tiene suficiente legitimidad popular. ¿Acaso están dispuestos a admitir que si el apoyo hubiera sido muy superior al obtenido el 27 de septiembre de 2015, el Estado tendría que haber facilitado la desconexión?

Buena parte de los intelectuales españoles llevan recalentados con la cuestión nacional al menos desde los tiempos del lehendakari Ibarretxe. En concreto, la cuestión catalana les pone de especial mal humor y suelen sacar lo peor de sí mismos: una mezcla de frivolidad política y mala leche que les ciega ante cualquier intento de analizar desapasionadamente y de acuerdo con

las reglas de la lógica el asunto de la independencia. Estoy seguro de que en el otro bando, entre los intelectuales catalanes partidarios de la secesión, debe haber también dosis grandes de sectarismo y marrullería argumental: hará bien quien se tome la molestia de sacar a relucir todo ello. Pero aquí estoy hablando de los intelectuales de mayor prestigio y presencia mediática en el conjunto de España, que adoptan un tono muy beligerante, lleno de certezas y con sumo desprecio hacia quienes no opinan como ellos.

Según he intentado mostrar, los argumentos que utilizan estos intelectuales son especialmente resbaladizos, cuando no chapuceros. En lugar de abordar la cuestión de cuáles deben ser las exigencias y procedimientos democráticos a la hora de procesar un conflicto secesionista, los autores mencionados prefieren dedicarse al sarcasmo, la descalificación sumaria y la repetición de lugares comunes. He analizado muchos de esos lugares comunes y, francamente, creo que tienen un fundamento más bien endeble.

Con este repaso del debate no he pretendido concluir que los nacionalistas o los independentistas llevan razón. Su tuviera que expresar mi opinión personal, diría que hay que deslindar dos planos de análisis. Por un lado, qué pienso, como ciudadano español, sobre la separación de Cataluña. Y, por otro, cómo creo, en cuanto demócrata, que debe procesarse una demanda de independencia. Sobre lo primero, considero que los nacionalistas catalanes han sobreactuado, han generado expectativas políticas imposibles de satisfacer y han exagerado artificialmente las diferencias entre Cataluña y el resto de España, a menudo deformando o manipulando la historia y la economía. Además, estoy convencido de que sería empobrecedor y costoso para las dos partes proceder a la separación.

Ahora bien, como demócrata, entiendo que se trata de una demanda legítima, que debe procesarse y debatirse sin tajarla con la Constitución, y que ello requiere la celebración de un referéndum que establezca con claridad cuál es el nivel de apoyo popular a la causa de la independencia. Si dicho nivel es suficientemente elevado, no quedará otra opción que negociar con Cataluña, tratando de evitar su marcha. Pero si dichas negociaciones no fructifican y hay un apoyo masivo a la separación, no habrá más remedio que pactar los términos de la misma. Igualmente, como demócrata, lamento profundamente que los independentistas catalanes hayan seguido adelante después de las elecciones del 27 de septiembre de 2015, cuando fue palmario que no contaban con suficientes apoyos para iniciar la vía secesionista.

Por desgracia, estos dos planos de análisis (qué piensa cada uno sobre la cuestión sustantiva y cómo hay que tratar este tipo de cuestión según parámetros democráticos) se mezclan todo el tiempo, introduciéndose así una gran confusión en los argumentos.

Me gustaría acabar este capítulo regresando al punto de partida, al “Manifiesto de los libres e iguales”, firmado por antiguos rivales ideológicos, hoy todos ellos unidos en la defensa de la nación española, que presentan engañosamente como defensa de la democracia y el Estado de derecho (como si en una Cataluña independiente no pudiera haber democracia y Estado de derecho). Entre los firmantes, como hemos visto, figuran “ex” de toda condición: exetarras, exmaoístas, extrotskistas, exsindicalistas, excomunistas, *etc.* Muchos de esos “ex” han justificado su acomodaticia evolución ideológica (siempre van en la dirección en la que sopla el viento) en función del conflicto nacional. Llegaron en algún momento al convencimiento de que el mal principal (tras el terrorismo) era el nacionalismo, y que una izquierda que ellos empezaron a conceptualizar de relativista y contemporizadora no había estado a la altura de las circunstancias en el combate contra el nacionalismo disgregador. La izquierda, decían ellos con falso tono de autocritica, pues ya estaban en posiciones claramente derechistas, había hecho el caldo gordo al nacionalismo. Empeñados en conservar el prestigio social de considerarse progresistas, concluyeron que el verdadero izquierdismo consistía en dedicar toda la energía a combatir la bestia excluyente que todo nacionalismo lleva en su seno, incluso si eso suponía apoyar o aliarse con la derecha española de José María Aznar y Jaime Mayor Oreja. Tanto ha sido el empeño que apenas han dedicado espacio en sus artículos a hablar de los estragos de la crisis y de los cambios sociales que se han producido en estos años. El único tema que todavía les mantiene en guardia es el del nacionalismo, principio y fin de todo lo malo que sucede en España.

Como ilustración extrema de la obsesión nacional puede mencionarse el análisis que publicó Félix de Azúa sobre la derrota del PSOE en las elecciones generales de noviembre de 2011 [\[107\]](#). Dichas elecciones tuvieron lugar en medio de la mayor crisis económica que ha sufrido España desde la Guerra Civil, con el paro disparado en el 23%, tras un ajuste fiscal y la reforma de la Constitución para tranquilizar a los inversores: nada de esto consideraba Azúa que fuera relevante; a su juicio, la caída electoral del PSOE era consecuencia principalmente de las ambigüedades de socialismo español

con respecto al nacionalismo...

Los intelectuales más furiosamente antinacionalistas han acusado siempre a los políticos nacionalistas de ser sectarios y dogmáticos, de contar milongas a sus seguidores, de apelar a los sentimientos más primitivos, primando la emoción sobre la razón. Y parte de razón tienen, qué duda cabe. Pero viendo cómo estos intelectuales se jalean entre sí, se publican unos a otros, se prestan unos a otros argumentos prefabricados, se ríen las gracias y se callan siempre ante los excesos que los más bocazas entre los suyos cometen, me temo que en la carrera del sectarismo intelectual no se distancian tanto de sus detestados nacionalistas. Van tan cargados de razón y tienen siempre tanto campo abierto en los medios de comunicación y casas editoriales que se les olvida argumentar con el rigor que sería exigible.

- [49](#) . “El separatismo catalán va en contra de los valores que definen a España como una democracia y a la UE como un logro civilizatorio. Pone la identidad por delante de la ciudadanía.” Cayetana Álvarez de Toledo, “Europe Cannot Afford to Give In to the Separatists”, *Financial Times*, 18/2/2014.
- [50](#) . Fernando Savater, “Las termitas en el Senado”, *El País*, 4/8/1979.
- [51](#) . Probablemente, la transformación se inicia con la publicación de su libro *España frente a Europa*, Barcelona, Alba, 1999.
- [52](#) . Véase, por ejemplo, el reportaje “Austeridad. La fe del converso”, *Mongolia*, 25, septiembre de 2014, pp. 39-41.
- [53](#) . Fernando Savater, “Terrorismo, terrores y txistu”, *Triunfo*, nº 12, octubre de 1981.
- [54](#) . Fernando Savater, “El final de la década”, *El País*, 27/12/1979.
- [55](#) . Juan Linz *et al.*, *Conflicto en Euskadi*, Madrid, Espasa, 1986.
- [56](#) . Fernando Savater, “La España recuperada”, *El País*, 25/3/1981.
- [57](#) . Fernando Savater, “Nacionalismo y violencia en Euskadi”, *El País*, 13/11/1980.
- [58](#) . *Ibidem*.
- [59](#) . A comienzos de los ochenta hubo otras negociaciones, de distinta naturaleza, con ETA político-militar.
- [60](#) . Al lector interesado en esta cuestión le remito a mi trabajo “Analyzing Temporal Variation in the Lethality of ETA”, *Revista Internacional de Sociología*, 67(3), 2009, pp. 606-629.
- [61](#) . Iñaki Ezquerro, *ETA pro nobis*, Barcelona, Planeta, 2002.
- [62](#) . Según el propio Arzalluz, cuando habló del elemento agitador se estaba refiriendo a Batasuna y no a ETA. Véase su entrevista en *El Mundo*, 26/8/2008.
- [63](#) . En tono autocrítico, debo reconocer que yo también me dejé llevar por aquel clima emocional e intelectual tan intenso y apoyé con entusiasmo el frente constitucionalista que se formó en contra del nacionalismo vasco.
- [64](#) . Jorge Martínez Reverte, “La campaña electoral de Bildu”, *El País*, 20/11/2011.
- [65](#) . Véase <https://santiagonzalez.wordpress.com/2011/10/20/unidad-de-grandes-quemados/>
- [66](#) . Véase <http://www.europapress.es/nacional/noticia-savater-ve-eguiguren-maquina-equivocarse-dice-cuantas-mas-chispas-eche-mas-tranquilo-20111019144531.html>
- [67](#) . Félix de Azúa, “El descalabro”, *El País*, 10/12/2011.
- [68](#) . Luis Rodríguez Aizpeolea, “¿Por qué odian a Eguiguren?”, *El País*, 14/11/2010. Aizpeolea escribió con

Egiguren un libro esencial sobre el fin de ETA que despertó las iras de los intelectuales ligados a ¡Basta Ya! y UPyD. La entonces líder del partido, Rosa Díez, lanzó duras acusaciones contra el periodista desde las páginas de *El Mundo*, hasta el punto de que el Comité de Redacción de *El País* tuvo que salir en defensa de Aizpeolea.

- 69 . Vale la pena comparar lo que escriben nuestros intelectuales castizos sobre Egiguren y el proceso de paz con la visión de los expertos extranjeros que han estudiado la cuestión. Véase, por ejemplo, Jonathan Powell, *Talking to Terrorists. How to End Armed Conflicts*, Londres, Bodley Head, 2014, pp. 62-65, y, sobre todo, Teresa Whitfield, *Endgame for ETA. Elusive Peace in the Basque Country*, Oxford, Oxford University Press, 2014.
- 70 . Por ejemplo, Antonio Muñoz Molina en *ABC*, 7/1/2007: “Cuando se habla de proceso de paz en España eso implica que hay una guerra y si hay una guerra habría dos partes”. Por lo demás, es evidente que había dos partes, con legitimidades muy distintas, desde luego, pero dos partes al fin y al cabo; es evidente que los ataques de ETA contra el Estado no quedaban impunes: cientos de etarras fueron detenidos a lo largo del tiempo y un número considerable de ellos perdió la vida en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
- 71 . Editorial “Punto final a la pesadilla”, *El País*, 21/10/2011.
- 72 . Fernando Savater dijo que el árbitro había pitado una “falta injusta”, entrando en divertidos y osados razonamientos jurídicos: véase su artículo “Fuera del área”, *El País*, 25/10/2013. Un año antes, Antonio Elorza ya se había echado las manos a la cabeza ante el primer pronunciamiento del Tribunal. Véase su artículo “Quince años después”, *El País*, 13/7/2012.
- 73 . Véase Jesús Egiguren y Luis Rodríguez Aizpeolea, *ETA: las claves de la paz. Confesiones del negociador*, Madrid, Aguilar, 2011, pp. 170 y ss.
- 74 . Edurne Uriarte, *Terrorismo y democracia tras el 11-M*, Madrid, Espasa Calpe, 2004, p. 93.
- 75 . Como un ejemplo entre decenas posibles, véase esta entrevista de 2001 con Agustín Ibarrola en <http://www.elpais.com/edigitales/entrevista.html?encuentro=120>
- 76 . Felipe González, “A los catalanes”, *El País*, 31/8/2015.
- 77 . Félix de Azúa, “Prevenir”, *El País*, 15/9/2005.
- 78 . José Varela Ortega, *Contra la violencia. A propósito del nacional-socialismo alemán y vasco*, San Sebastián, Hiria, 2001. Un resumen del mismo puede encontrarse, con el mismo título, en la revista *Claves de la Razón Práctica*, nº 110, 2001.
- 79 . Javier Tusell, “Arzalluz no se llama Adolfo”, *El País*, 10/3/2001.
- 80 . Álvaro Uribe, “España, ejemplo de madurez”, *La Razón*, 2/4/2012.
- 81 . Véase la entrevista realizada por el periodista colombiano Pastor Virviescas Gómez en <http://lasnotasdepastor.blogspot.com.es/2012/12/fernando-savater-de-la-etica-la-polemica.html>. El juicio de Savater sobre Uribe es este: “Creo que ha hecho una labor en aspectos positiva, probablemente en otros casos y en otros aspectos no, pero la Colombia que le ha dejado a su sucesor Juan Manuel Santos es mejor que la que él tomó, entonces su balance me parece en principio positivo”. A la pregunta de si conoce el escándalo de los falsos positivos, responde en estos términos: “Sí, y probablemente en un conflicto como este se habrán cometido incluso muchos más. En el momento en que se abre el cubo de la violencia lo que sale de ahí cada vez va aumentando porque la violencia es algo exponencial porque primero se crean unos crímenes, luego hay un intento de acallarlos, eso crea otros crímenes, etcétera. Así surgen los grandes conflictos civiles, por eso hay que acabar cuanto antes con la violencia y con sus causas”.
- 82 . Natan Sharansky, *The Case of Democracy. The Power of Freedom to Overcome Tyranny and Power*, Nueva York, Public Affairs, 2004.
- 83 . Véase <http://www.libertaddigital.com/nacional/aznar-pide-claridad-moral-e-intelectual-para-defender-la-libertad-ante-la-tentacion-de-la-negociacion-o-rendicion-1276255583/>
- 84 . Edurne Uriarte, “La claridad moral”, *ABC*, 31/5/2006.

- [85](#) . En el reportaje de Juan Cruz, “La esperanza rota”, *El País*, 7/1/2007. En una entrevista publicada ese mismo día en *ABC*, añadía: “A mí me parece una vejación que el gobierno de mi país anduviera públicamente en tratos con unos criminales encapuchados y con boina”.
- [86](#) . Antonio Mingote publicó en *ABC* una viñeta en la que aparecía el eslogan junto a una víctima del terrorismo y Rosa Díez no tuvo mejor ocurrencia que ponerle una querrela.
- [87](#) . Véase <https://www.youtube.com/watch?v=uFtVts9ChcY>
- [88](#) . Mario Vargas Llosa, “Una rosa para Rosa”, *El País*, 5/11/2011.
- [89](#) . Fernando Savater, “¿Y por qué no UPyD?”, *El País*, 6/5/2015.
- [90](#) . Félix Ovejero, “Trampas y contradicciones del pensamiento nacionalista”, en Juan Arza y Joaquim Coll (eds.), *Cataluña: el mito de la secesión. Desmontando las falacias del soberanismo*, Almuzara, 2014, p. 282.
- [91](#) . En mi libro *Más democracia, menos liberalismo*, Madrid, Katz, 2010, trato esta cuestión de forma pormenorizada en el capítulo 2.
- [92](#) . Robert Dahl, *Democracy and its Critics*, New Haven, Yale University Press, 1989, p. 193.
- [93](#) . Joseph Weiler, “European Democracy and its Critics”, *West European Politics*, 18, 1996, pp. 4-39.
- [94](#) . Fernando Savater, “Nubarrones”, *El País*, 5/8/2015.
- [95](#) . En ocasiones excepcionales, la concentración territorial ni siquiera es precisa, según muestra el ejemplo de la creación de Israel.
- [96](#) . Por ejemplo, Andreas Wimmer, *Waves of War. Nationalism, State Formation, and Ethnic Inclusion in the Modern World*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, p. 28. Véase también James Fearon y David Laitin, “Explaining Inter-ethnic Cooperation”, *American Political Science Review*, 90 (4), 1996, pp. 715-735.
- [97](#) . Jon Juristi, *La tribu atribulada*, Madrid, Espasa, 2002.
- [98](#) . Dos ejemplos separados en el tiempo: Vargas Llosa pronuncia la misma frase durante la presentación de uno de sus libros en 2013: <http://www.abc.es/cultura/libros/20130911/abci-vargas-llosa-heroe-discreto-201309111416.html>, y durante una entrevista en 1994: http://elpais.com/diario/1994/11/30/cultura/786150001_850215.html
- [99](#) . Karl Popper, *La sociedad abierta y sus enemigos*, Madrid, Paidós, 2010 [1945].
- [100](#) . David Laitin, *Nations, States, and Violence*, Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 40.
- [101](#) . Michael Billig, *Banal Nationalism*, Londres, Sage, 1995.
- [102](#) . Joan Vergés Gifra, *La nació necessària*, Barcelona, Angle Editorial, 2013. Un análisis más político en una línea similar es el de Jaume López, *La independencia explicada a mis amigos españoles*, Barcelona, RBA, 2014.
- [103](#) . Casi todos ellos pueden encontrarse en Juan Arza y Joaquim Coll (eds.), *Cataluña, el mito de la secesión. Desmontando las falacias del soberanismo*, Almuzara, 2014. Un empeño semejante anterior, para el caso vasco, es Juan Aranzadi, Jon Juaristi y Patxo Unzueta, *Auto de Terminación*, Madrid, Aguilar, 1994.
- [104](#) . Mario Vargas Llosa, “El derecho a decidir”, *El País*, 23/9/2013.
- [105](#) . Javier Cercas, “Democracia y derecho a decidir”, *El País*, 13/9/2013.
- [106](#) . Javier Cercas, “La mala educación”, *El País*, 11/9/2015.
- [107](#) . Félix de Azúa, “El descalabro”, *El País*, 10/12/2011.

CAPÍTULO 3

LA CRISIS: MERECIÁAMOS ALGO MEJOR

Este capítulo comienza con escritores y acaba con economistas, todos ellos de acendradas convicciones liberales. El hilo conductor son sus reflexiones sobre la crisis económica y política que ha sufrido España. Intentaré mostrar, como en los capítulos anteriores, que, en general, la calidad de los argumentos, diagnósticos y soluciones que se presentan no es siempre la que cabría exigir. También en este ámbito domina una cierta impunidad a la hora de opinar, sin que los razonamientos más superficiales que circulan por la esfera pública generen una reacción crítica. No obstante, no todos los argumentos a los que hago referencia están al mismo nivel. Algunos entran en la categoría de lo insólito y lo grotesco y no son por tanto ni siquiera refutables; otros, en cambio, son debatibles y podrían ser correctos, pero el problema es que suelen carecer de la necesaria fundamentación empírica y teórica; estos últimos, pues, no son disparates, sino tan solo ideas endebles. Trataré de indicar en cada caso de qué tipo de argumentación hablo. Si los pongo todos juntos es porque, como antes he dicho, algo comparten todos ellos: que están hechos a la ligera.

Inicio el recorrido con el libro de Antonio Muñoz Molina, *Todo lo que era sólido*, un ensayo sobre la crisis que ha despertado una oleada de admiración y ha obtenido multitud de parabienes y elogios. Si le dedico cierta atención, abusando quizá del lector que no se toma estos asuntos tan a pecho como un servidor, es precisamente por el contraste entre dicha recepción entusiasta y el contenido del libro, que, a mi juicio, refleja los peores vicios ibéricos del “opinionismo” arbitrario.

Todo lo que era sólido consiguió los certificados de calidad que dispensa

el sistema cultural español. *El País*, como no podía ser de otra manera, se volcó con el escritor, quien forma parte de su escudería literaria: hubo entrevista (a cargo de Juan Cruz), entrada de blog (a cargo de Juan Cruz) y reseña positiva (escrita por Joaquín Estefanía). Cruz se refería al libro en estos términos: “Este poema sobrecogedor, esta narración desasosegada que uno lee como si estuviera viendo en un plano corto el aspecto más espeluznante de la autobiografía de España después de la alegría” [108]. En *Revista de Libros*, el propio director de la publicación, Álvaro Delgado Gal, le dedicó una reseña larguísima, con abundancia de “nombreo”: para hablar del libro citaba a Donoso Cortés, Mallarmé, Gordon Tullock y James Buchanan, Fukuyama, Sieyès, Borges, De Maistre, Cervantes, Constant, Guizot, *etc.* El tono era este: “A ratos, Antonio se demora en descripciones del paisaje finísimas y sentidas, y como hechas desde el fondo del tiempo. Un señor que da importancia a esas cosas no puede celebrar el sistema de lugares comunes —lo digo sin acento peyorativo alguno— que asociamos al progresismo” [109]. Y atención a esta otra frase, que parece escrita para la posteridad: “La euforia económica encubrió la decadencia institucional y la insignificancia extraordinaria de un líder que llegó a ganar la secretaría del Partido Socialista y dos elecciones generales”. En *El Cultural* de *El Mundo* dio noticia del libro Bernabé Sarabia; en *El Confidencial*, Peio Riaño. La galaxia de blogs literarios en los que personas más o menos anónimas vierten sus opiniones sobre las novedades no fue tan monolítica en su entusiasmo, si bien la amplia mayoría de comentarios era decididamente positiva. Mis amigos reales y virtuales me hicieron llegar, de palabra o a través de sus “muros”, la honda impresión que les había causado la obra: era el libro definitivo, el libro que ponía a España en su lugar, que explicaba las causas últimas de la crisis y del deterioro de la situación política.

Se presentaba como un libro valiente, honesto e incómodo, como un espejo antipático que nos devolvía una imagen desfavorable de nosotros mismos y nos obligaba a reflexionar sobre la forma en la que, como sociedad, desaprovechamos los años de prosperidad económica y de libertad democrática. Tan incómodo no debía de ser, pues, como ya digo, despertó el entusiasmo de los lectores. Cuando, arrastrado por ese vendaval de bendiciones, me animé a leer el libro, entendí mejor el truco psicológico que opera. A base de denunciar a constructores horteras, funcionarios indolentes, políticos zafios e intelectuales acomodaticios, Muñoz Molina establece una

complicidad con el lector, que si está leyendo el libro es porque en última instancia se ve a sí mismo como una víctima más de la mediocridad circundante que se ha apoderado del país; solo están a salvo los lectores del libro, esos ciudadanos que, como Muñoz Molina, son insobornables y conservan la capacidad para escandalizarse, frente a una sociedad que se ha dejado corromper o que ha transigido con la corrupción. En este sentido, el libro a mí no me pareció “valiente”: lejos de ir a contracorriente, da respetabilidad intelectual al clima de opinión dominante según el cual toda la culpa de nuestros males es de los políticos. Valiente, en este contexto, habría sido alzarse contra los tópicos asfixiantes sobre la política que se han establecido en España, no darles carta de naturaleza. Muñoz Molina, además, se hace la “autocrítica”, ya que él, durante los años del *boom*, disfrutó de una canonjía envidiable, la dirección del Instituto Cervantes en Nueva York: la autocrítica termina realzando su integridad moral o, al menos, una disposición para la rectificación que él echa en falta en los demás.

Un primer problema del libro es la incoherencia entre los propósitos que anuncia y los análisis que ofrece. El libro contiene múltiples errores de hecho, errores que, por separado, no tienen gran importancia, pero que sumados todos pueden llegar a distorsionar gravemente la realidad, como luego expondré con mayor detalle. Vayamos de menos a más. Empecemos por un ejemplo más bien intrascendente, aunque ilustrativo: en la crítica a los dos grandes partidos tradicionales, PP y PSOE, escribe que “los dirigentes de cada partido son reelegidos una y otra vez con unanimidades norcoreanas” (p. 37). Sin embargo, esto no es cierto en el caso del PSOE: Josep Borrell, contra todo pronóstico, ganó en las primarias de 1998 frente a Joaquín Almunia; José Luis Rodríguez Zapatero venció por muy pocos votos a José Bono en el Congreso de 2000; y Alfredo Pérez Rubalcaba se impuso a Carme Chacón en el Congreso de Sevilla de 2012 por una diferencia mínima. Lo curioso es que el autor no se ahorra enunciados enfáticos sobre la necesidad del rigor: “Sin periodismo serio no hay sociedad democrática. Sin información contrastada y rigurosa cualquier debate es un juego de aspavientos en el aire” (p. 179). O estas exhortaciones en serie: “Cancelar la indulgencia española hacia la vaguedad biensonante. Comprobar los hechos. Examinar los actos” (p. 231). En la misma línea:

Leyendo el *New Yorker* o el *New York Times* descubrí una escritura en

la que la precisión expresiva era el equivalente del respeto estricto por los hechos, de la necesidad de comprobar al máximo la veracidad de cada cosa que se decía (p. 178).

Muñoz Molina cree que ha escrito un libro riguroso y respetuoso con los hechos. Veamos otro ejemplo de hasta qué punto es así. A su juicio, una de las causas principales de la crisis ha sido el despilfarro, el despilfarro causado, de manera sobresaliente, por el gasto en fiestas populares:

Y uno de los capítulos más incalculables del despilfarro que ahora tenemos que pagar es el de todo el dinero público que desde hace treinta y tantos años se ha gastado en fiestas, en fiestas municipales y comarcales, en fiestas autonómicas, en fiestas de barrio, en carnavales, en fiestas de la primavera, en fallas y sanfermines y rocíos y ferias de Sevilla y en imitaciones de la feria de Sevilla (p. 58).

¿De verdad que tanto nos hemos gastado en fiestas? ¿Tanto han contribuido las fiestas a la quiebra de la Hacienda pública? Yo no soy experto en presupuestos en absoluto, pero me he tomado la molestia de hacer el siguiente ejercicio. He seleccionado la ciudad que menciona Muñoz Molina, Sevilla, que asociamos con la juerga y la jarana. En sus presupuestos de 2012, el gasto en fiestas (incluyendo las subvenciones a las hermandades y a las asociaciones de belenistas...) fue de 4.247.441,93 euros en gasto corriente y 3.323.120,05 euros en las retribuciones del personal del ayuntamiento que se ocupa de este negociado [\[110\]](#). En total, 7.570.561,98 euros. Esta partida no incluye los gastos de las fiestas de distrito. Pongamos, tirando muy por lo alto, que en dichas fiestas se gastó un millón adicional. La suma final ascendería entonces a 8.750.561,98 euros. El presupuesto total del ayuntamiento, sin tener en cuenta los organismos autónomos ni las sociedades municipales, fue de 800.025.889,65 euros. Eso significa que en fiestas se gastó aproximadamente el 1% del presupuesto total del municipio. Según el INE, en 2012 vivían en Sevilla 702.355 personas. Por tanto, el gasto per cápita en fiestas era de 12,20 euros por sevillano. Supongamos que en el resto de España fueran tan jaraneros como Sevilla y que ese fuese el gasto por español. Teniendo en cuenta que en 2012 vivían en España 47.265.321 personas, eso implicaría un

gasto total en fiestas de 576,6 millones de euros. Puede parecer una cantidad muy elevada, pero hay que ponerla en perspectiva. Los Presupuestos Generales del Estado sumaron ese año 319.460 millones de euros. En términos relativos, pues, el Estado se habría gastado un 0,18% de su presupuesto total en fiestas. El déficit público en 2012 fue el 10,3% del PIB. Si se hubieran suprimido todas las fiestas, nos habríamos quedado en el 10,12%. Para interpretar mejor las cifras, recuérdese que solo la T-4 del aeropuerto de Madrid costó más de 6.000 millones de euros, o que el rescate de Bankia ha superado los 20.000 millones. Incluso aunque hubiera infraestimado el gasto en festejos cuatro o cinco veces su cantidad real, la conclusión seguiría siendo la misma: el gasto en festejos podrá parecer más o menos innecesario, pero dado su peso relativo con respecto a los Presupuestos Generales del Estado, difícilmente puede haber sido una de las causas del despilfarro [\[111\]](#).

Muñoz Molina supone a lo largo del libro que las administraciones gastaron sin ton ni son y desde luego muy por encima de sus ingresos. Sin embargo, en España hubo superávit presupuestario, por primera vez en democracia, entre 2004 y 2007. Además, la deuda pública se redujo muy notablemente durante los años de la burbuja, bajando del 65% del PIB, en 1996, al 37% en 2007. En 2007, un año antes del inicio de la crisis, España, como Irlanda, tenía un nivel de deuda pública muy por debajo de la media europea. Como sabe cualquier persona informada, el problema de España no radicaba en el endeudamiento de sus ayuntamientos o de las administraciones públicas más en general, ni siquiera en el endeudamiento de los hogares, sino en el de las empresas. En 2010, la deuda de las empresas era el 200% del PIB, frente al 90% de los hogares y el 60% del Estado.

Para afianzar la idea de que el libro es fruto de una investigación, el autor decide hacernos partícipes de la dureza del trabajo de documentación y análisis que se esconde detrás de su prosa. Quiere que quede claro que sus palabras no son un mero desahogo personal. “Día tras día, entre finales de julio y principios de agosto, he tomado un taxi en el Madrid cada vez más desierto [...] Empezaba a las once de la mañana y me quedaba en el pasado hasta las dos y media de la tarde” (p. 140). La odisea consistía en visitar a diario la hemeroteca de *El País*. Allí consultó los ejemplares de los meses de enero y febrero de 2007, para recuperar la España anterior a la crisis. Como se ve, un trabajo de documentación exhaustivo, sometido a la rutina de los protocolos de la investigación más exigente, como esos historiadores que

pasan años de su vida buceando en archivos polvorientos para preparar una monografía sobre los temas más arcanos. Pero lo más preocupante es que a pesar de tanto viaje en taxi a la sede de *El País*, el resultado es una descripción muy deformada de la realidad. Veamos por qué.

Una de las cuestiones más espinosas que aborda el libro es esta: ¿por qué no nos dimos cuenta de que vivíamos en una burbuja, una burbuja inmobiliaria que si explotaba se llevaría todo por delante, un bienestar aparente, una riqueza episódica, un optimismo infundado? Es una pregunta enjundiosa, que merece un análisis pausado. Recordemos, por ejemplo, que todavía en 2007 había economistas como José Carlos Díez que negaban la existencia de la burbuja. En ese año Díez escribió un trabajo para un informe del servicio de estudios de IberCaja, en el que identificaba tres “mitos” que circulaban en torno a la etapa de crecimiento económico: la burbuja inmobiliaria, la baja productividad y el déficit por cuenta corriente. Con respecto a la burbuja, el economista, con ese tonto tajante tan habitual en su gremio, concluía esto:

Si incorporamos al análisis el aumento de renta que han registrado las familias españolas y, sobre todo, la mayor accesibilidad al crédito hipotecario derivado de los bajos tipos de interés y del mayor plazo de las hipotecas, podemos descartar con mucha fiabilidad que nos encontremos ante la existencia de una enorme burbuja inmobiliaria [\[112\]](#).

Reconocía Díez en todo caso que había un exceso de oferta, pero “eso no significa que estemos ante una gran burbuja y que el pinchazo de la misma vaya a tener efectos devastadores sobre la economía real y el resto de sectores, que llevarían a la economía española a registrar una recesión” (p. 94).

¿Cómo un economista informado podía considerar en 2007 que la burbuja inmobiliaria y su posible explosión formaban parte de un “mito” propalado por aquellos que querían arrojar sombras sobre el éxito de la economía española, admirada en todo el planeta? ¿Qué producía un sesgo tan acusado en la percepción de la realidad?

La respuesta de Muñoz Molina es muy imaginativa. Para llegar hasta ella, es preciso dar un pequeño rodeo a fin de poner al lector en situación. Comienza el autor su explicación recreando el clima de violencia verbal que,

según él, se enseñoreó de la vida política española durante los años de la prosperidad. Parece referirse a lo que entonces se llamó “la crispación”, que atribuye indistintamente a todas las fuerzas políticas y, si me apuran, al conjunto de la sociedad española; no se entiende de otra forma el uso de la primera persona en plural: “Ni siquiera éramos capaces de encontrar el grado mínimo de concordia necesario para honrar a las víctimas del terrorismo” (p. 11). Este tipo de acusaciones indiscriminadas resultan sin duda extremadamente útiles para granjearse el favor de todos aquellos que se sienten hastiados de la política, pero no responde a la verdad histórica. Un examen mínimamente desapasionado de aquella época muestra a las claras que el diagnóstico no es correcto. Si situamos el inicio de la etapa de crecimiento en los años 1994-1996, debe recordarse que el terrorismo no fue tema de confrontación entre los dos grandes partidos durante las dos legislaturas en las que gobernó el PP entre 1996 y 2004. Fueron aquellos los años del frente constitucionalista en el País Vasco y del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo firmado en 2000 por José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Los muertos se enterraban con respeto. Los primeros enfrentamientos se produjeron a raíz del atentado del 11-M, cuando el Partido Popular antepuso el cálculo electoral al reconocimiento de la verdad: si la masacre había sido obra de ETA, el PP podría ganar las elecciones; si había sido un atentado islamista, la opinión pública culparía al PP por su apoyo a Estados Unidos y Gran Bretaña en la guerra contra Irak. El Gobierno decidió manipular la información, en uno de los episodios más degradantes de la historia de la democracia española [\[113\]](#). El PP nunca ha reconocido que hubiera manipulación ni ha hecho jamás un amago de autocrítica sobre la gestión política del peor atentado terrorista que ha sufrido nuestro país. Pero no solo eso: el PP se dedicó a espolear la teoría de la conspiración lanzada por medios sensacionalistas y abiertamente reaccionarios (como *El Mundo*, la Cope, Telemadrid, Libertad Digital y otros). Cuando, después de las elecciones de 2004, el nuevo Gobierno del PSOE optó por explorar una vía dialogada o negociada al final del terrorismo, la derecha mediática y política, así como muchos de los intelectuales que han aparecido en el capítulo anterior, rompieron la baraja y se olvidaron del artículo 1 del Pacto antiterrorista, que establecía que “al Gobierno de España corresponde dirigir la lucha antiterrorista”. Fue entonces cuando Mariano Rajoy espetó al presidente Zapatero, en el debate sobre el estado de la nación de 2005, aquello de que

“usted ha traicionado a los muertos”. Fue también entonces cuando Ángel Acebes afirmó que el Gobierno había “entregado la llaves del Estado de derecho a los terroristas” (*El País*, 4/6/2006) y dos días después que “el proyecto de Zapatero es el proyecto de ETA” (*El País*, 6/6/2006). Que un partido político y los medios y publicistas que lo apoyaban decidieran embarcarse en una estrategia de deslegitimación total de la política antiterrorista no es exactamente un fracaso de la sociedad española y su esfera pública, ni siquiera es un fracaso del sistema de partidos, sino tan solo un ejemplo, extremo, sí, pero revelador, de los usos políticos de la derecha en España, más parecidos a los de la derecha estadounidense que a los de la derecha europea.

Para tratar de argumentar que la violencia verbal y el enfrentamiento cainita dominaban el debate político en ambos bandos, Muñoz Molina se limita a recordar que Zapatero se definió a sí mismo como “un rojo”. No dice cuándo lo hizo, ni en qué contexto, ni explica qué tiene de “incivil” o “violento” declarar una posición ideológica personal. En cualquier caso, no creo que sea tan “incivil” reclamarse “rojo” o de izquierdas como acusar a un Gobierno de traicionar a los muertos o de entregarse a ETA. Solo desde una cierta ceguera política puede plantearse esa equivalencia.

Vale la pena detenerse un momento en la imprecisión de la prosa de Muñoz Molina recordando las circunstancias en las que Zapatero se llamó a sí mismo “rojo”. La revista *Marie Claire* publicó en otoño de 2005 una entrevista informal con el presidente del Gobierno, en la que la directora, Joana Bonet, le preguntaba, en un contexto distendido e informal, el de un viaje en avión, si no le incomodaba definirse en ocasiones como un rojo, a lo que Zapatero respondía: “¡Es que soy rojo! Todo lo contrario, nada me ha enseñado la derecha” [114]. La derecha más cavernaria aprovechó la frase, por lo demás bastante intrascendente, para montar otro escándalo, este sin duda bastante ridículo y pueril, en la campaña de crispación que se llevó a cabo en aquellos años. Jon Juaristi, uno de los intelectuales más maleducados y faltos del panorama literario, escribía un artículo en *ABC* titulado “Feminismo” [115], en el que, con esa gracia tan castiza de la derecha ibérica, decía cosas como esta: “Confieso que a menudo me gustaría describir por extenso a una reportera gilipueñas, durante un largo viaje trasatlántico, lo maravilloso que soy”. Descacharrante el ingenio de Juaristi. La propia entrevistadora, Joana Bonet, sorprendida por la desmesura de las reacciones, publicó un artículo en *El*

Mundo tratando de explicar el alcance de las palabras de Zapatero (con poco o ningún éxito, todo sea dicho, pues las plumas más reaccionarias del país continuaron durante años con la historia de “ZP el rojo”) [\[116\]](#).

Muñoz Molina se aprovecha de este falso escándalo para poner en pie de igualdad a la derecha y a la izquierda y poder ejercer así una cómoda equidistancia que le sitúe más allá de la bronca partidista. Lo de Zapatero definiéndose como “rojo” constituye el único ejemplo, por lo demás bastante insignificante, que aparece en el libro para ilustrar esa tesis fantástica de que los dos partidos crispaban por igual. Ese era, a su juicio, el clima que se vivía en España, los “rojos” contra los “fachas”, los “fachas” contra los “rojos”. Un elemento fundamental de esta batalla política era el asunto de la memoria histórica: fue la época en la que desde las esquelas de los periódicos las familias se arrojaban los muertos de uno y otro bando. El escritor de Úbeda, que ha mostrado una justa solidaridad con las víctimas de ETA en muchas ocasiones, se refiere con desdén al debate que se produjo en esos años sobre la memoria histórica. Por primera vez desde el inicio de la democracia, el PSOE, bajo la presión de sus socios parlamentarios, Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya, aceptó preparar una ley integral sobre reparación a las víctimas de la violencia política en la Guerra Civil y el franquismo. Debe recordarse, en este sentido, que España sigue siendo uno de los países del mundo con mayor número de víctimas de desapariciones forzadas. Muñoz Molina, sin embargo, no entra en el fondo del asunto, no aclara si consideraba oportuno y necesario legislar sobre esta materia; prefiere quedarse en el análisis de la bronca que acompañó al debate, dando a entender que todo aquello fue una frivolidad. No llega a afirmar, como hace la derecha, que tratar de compensar y dignificar a las víctimas de la represión franquista supone “reabrir viejas heridas”, pero no anda lejos de ello: en una entrevista concedida al *Corriere della Sera* (2/8/2010), atacaba a Zapatero por volver al pasado y utilizarlo políticamente para dividir a los españoles. ¿Realmente se trataba de dividir? Uno de los aspectos más polémicos de la ley de memoria histórica fue, precisamente, que las víctimas de los dos bandos de la Guerra Civil recibían el mismo reconocimiento y la misma reparación, algo que irritó sobremanera a las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE. Tratar a todas las víctimas por igual, con independencia del juicio político que nos merezca, no es exactamente introducir divisiones artificiales en la sociedad [\[117\]](#).

Muñoz Molina exagera la presencia del pasado en el debate político. Llega a decir: “En 2006, las noticias más urgentes eran casi siempre acerca del pasado. Excavaciones de fosas de ejecutados e indagaciones judiciales sobre verdugos muertos 30 o 40 años atrás ocupaban aquella extraña actualidad en la que el presente casi no existía sino como reiteración fantasmal de las confrontaciones sanguinarias de hacía tres cuartos de siglo” (pp. 16-17). Aunque habría que realizar un análisis a fondo de la prensa para zanjar el asunto, no está de más recordar cuáles fueron los grandes temas en 2006: el proceso de paz con ETA, el Estatuto catalán, la teoría de la conspiración sobre el 11-M, la crisis de los cayucos del verano de aquel año, las opas de las empresas gasísticas, la operación Malaya, los incendios de Galicia y... también la memoria histórica, por supuesto, pero no hasta el punto de ser el tema dominante o el más urgente.

La exageración le sirve a Muñoz Molina para construir una tesis abracadabrante: a saber, que la razón por la que nadie vio la crisis económica que se nos venía encima fue que todo el mundo andaba pendiente del debate sobre la guerra civil y el pasado. Para que no parezca que tergiverso la tesis de Muñoz Molina, citaré la literalidad de sus palabras:

Algo que cuesta recordar de ese pasado de hace tan poco tiempo es la obsesión que había en él por el pasado. Ahora nos damos cuenta de que había una especie de velo que impedía ver la realidad inmediata y presente, pero quizás eso sea propio de cualquier época en la que se vive en el interior de una burbuja económica (p. 13).

Es fascinante que una mente literaria establezca esta conexión entre los debates sobre el pasado político de España y la existencia de una burbuja inmobiliaria. Recuerda a aquellos juegos de los vanguardistas del primer tercio del siglo XX consistentes en reunir objetos completamente heteróclitos en una misma composición, con el fin de “descolocar” al espectador y obligarle a interpretar el significado de dichos objetos fuera de su lugar natural, como aquella jaula de pájaros que Duchamp rellenó con unos daditos de mármol que recordaban azucarillos, un termómetro y un hueso de calamar. Algo similar sucede con la yuxtaposición de “burbuja inmobiliaria” y “memoria histórica”: “Con una economía especulativa se corresponde sin remedio una conciencia delirante. Lo peculiar del delirio español era su

fijación en el pasado...” (p. 14).

Pero la crisis económica también pilló de sorpresa a mucha gente que no vivía en España y no participaba en ese debate tan absorbente sobre la Guerra Civil y el franquismo. Les pasó a los norteamericanos, a los irlandeses, a los británicos y hasta a los rumanos. La gran crisis de 2008 no se la esperaban más que unos pocos, que clamaron en el desierto [\[118\]](#). Uno puede considerar, como parece hacer Muñoz Molina, que en cada país había un factor específico que explica que la crisis no fuera prevista, siendo en España ese factor la obsesión por el pasado. Pero cabe también pensar que, si el problema se reproduce en muchos países, en realidad hay alguna causa más general en virtud de la cual se producen momentos de euforia financiera en los que la gente piensa que la expansión del crédito y la revalorización de activos son procesos indefinidamente sostenibles. Como bien sabe cualquier lector curioso, la historia está plagada de burbujas especulativas que terminan explotando y devastando la economía [\[119\]](#). Esas burbujas, huelga decirlo, se han formado al margen de los debates sobre la memoria histórica. Por eso resulta tan forzada la conexión que intenta establecer Muñoz Molina. Por lo demás, los fallos de predicción con respecto a la crisis de 2008 no los cometieron solamente el Gobierno y los políticos: tampoco el Banco de España, los economistas o las organizaciones internacionales acertaron. Esto significa que la ceguera no tenía solamente raíces españolas ni era solamente de origen político: afectaba también a expertos de todo tipo, nacionales y extranjeros.

En un reciente libro, *La falsa bonanza*, el economista y exministro de Industria Miguel Sebastián ha analizado las bases económicas de la burbuja [\[120\]](#). En un tono autocrítico, que llega a ser duro en ocasiones, reconoce que gran parte de los profesionales de la economía no supieron o no quisieron fijarse en aquellos indicadores que lanzaban señales de alarma sobre la fragilidad del modelo de crecimiento. Cita tres de estas señales: el excesivo endeudamiento privado, el aumento insostenible del déficit comercial y el nulo crecimiento de la productividad (son los tres “mitos” de los que hablaba José Carlos Díez). A su juicio, la dificultad principal para reconocer la existencia de la burbuja no era el debate sobre la memoria histórica, ni el clima de crispación política, sino que hubiera tantos sectores que se beneficiaban de dicha burbuja (el sector de la construcción, el financiero, el energético, la industria auxiliar, etc.) y tantos hogares que contemplaban con entusiasmo

cómo su propiedad se revalorizaba.

El contraste entre la visión de Sebastián y la de Muñoz Molina no puede ser mayor: Muñoz Molina habla de oídas, no tiene en cuenta lo sucedido en otros países y no parece entender los rudimentos mínimos del funcionamiento de la economía. La cosa, sin embargo, no acaba aquí: sentada la base de que la ceguera sobre la crisis tiene su causa en nuestro debate de la memoria histórica, Muñoz Molina va metiéndose en líos cada vez mayores. En su explicación de la crisis española, el escritor alude a dos factores. El primero tiene que ver con los cimientos culturales del país: el régimen democrático, según él, se ha construido sobre el desprecio de la ley. A partir de su propia experiencia biográfica como auxiliar administrativo de un ayuntamiento allá por los primeros años ochenta, Muñoz Molina construye este relato:

La ruina en la que nos ahogamos hoy empezó entonces: cuando la potestad de disponer del dinero público pudo ejercerse sin los mecanismos previos de control de las leyes y cuando las leyes se hicieron tan elásticas como para no entorpecer el abuso, la fantasía insensata, la codicia, el delirio —o simplemente para no ser cumplidas— (p. 48).

Ha fallado el Estado de derecho, el principio de legalidad no ha sido efectivo. Los políticos, ante la indiferencia ciudadana, no han querido someterse al imperio de la ley. En España, según este dictamen sumarísimo, quien llega a tener un puesto de responsabilidad trata de zafarse de los controles legales para poder ejercer libremente el poder que el pueblo ha depositado en sus manos. De esta manera, unos políticos con un nivel cultural ínfimo, unos políticos que no son más que unos horteras y nuevos ricos, desatendieron las verdaderas necesidades del país en beneficio de proyectos faraónicos perfectamente inútiles. La sentencia es inapelable: “La misma generación que creció sin derechos quiso inventar un mundo en el que no parecían existir los deberes” (p. 204). En fin, que se empieza pidiendo la libertad y se acaba en el libertinaje, como se decía en los años mozos de Muñoz Molina.

¿Qué puede decirse a propósito de una tesis tan vaporosa y al mismo tiempo tan tremendista como esta? No tiene la precisión suficiente para poder ser sometida al tribunal de la experiencia. Por eso mismo, ejerce una poderosa

fascinación sobre el lector desprevenido, quien puede considerar que el autor ha ido más lejos que todos los demás, pues ha situado el origen de la crisis no en la expansión del crédito y la burbuja inmobiliaria, no en los desequilibrios inducidos por la unión monetaria, como machaconamente se insiste entre los estudiosos de la cuestión, sino en el déficit cultural de nuestras elites, causa última del atraso secular de España.

Por otro lado, el segundo factor que nos ha terminado llevando a la ruina ha sido el nacionalismo disgregador. Para Muñoz Molina, como para muchísimos otros intelectuales, el nacionalismo es embrutecedor, favorece la pertenencia identitaria sobre el ejercicio democrático de la ciudadanía, impide pensar en las necesidades globales del país y consume la energía política de todos en enfrentamientos egoístas entre territorios. Algo de todo esto hemos visto en el capítulo anterior.

Fernando Savater, desde las páginas de *El País*, decía que *Todo lo que era sólido* le había parecido un libro excelente, sobre todo porque coincidía con lo que él venía defendiendo desde hace años. Con un punto poco disimulado de reproche por no ser citado y reconocido como merecía, escribe Savater: “Solo la modestia me impide elogiarlo más [el libro], puesto que hace tanto que vengo insistiendo en no pocas de sus reconvenciones y voces de alarma”. Y glosaba así la tesis sobre el nacionalismo como causa de la crisis:

La crisis de nuestro país —económica, social, política— tiene varias causas fatalmente concomitantes, internas y externas, pero la fragmentación nacionalista de la soberanía y por tanto de la responsabilidad de defender al unísono derechos y obligaciones ocupa el centro de todas ellas [\[121\]](#).

Savater, que se erige aquí en experto en crisis económica, supongo que tras un estudio sistemático y profundo de la cuestión, concluye asimismo que el factor decisivo es el nacionalismo (tal es su obsesión con el nacionalismo que parece olvidarse del otro factor explicativo, la falta de respeto a la ley).

Tanto la debilidad del imperio de la ley como la fuerza corrosiva del nacionalismo nos han terminado llevando a la situación calamitosa en la que el país se encuentra, con las instituciones políticas sumidas en el descrédito y cuantiosos daños sociales provocados por la crisis económica. Una vez más, sin embargo, hay que insistir en que la crisis económica y política no es algo

que solo suceda en España. Otros países también han quedado asolados por acontecimientos similares. En la medida en que esta crisis ha afectado a casi todo el mundo desarrollado, ¿realmente podemos pensar que la causa última en España tiene que ver con algunos rasgos específicos de su historia y de su cultura? Y, ya puestos, ¿por qué el problema está en el nacionalismo y no en la dominación musulmana, la desfavorable orografía o la mala política económica de Felipe II?

Estoy seguro de que la historia de España, tanto la remota como la reciente, ha influido en algunos aspectos específicos de la crisis en nuestro país, dándole algunos contornos propios, pero no puede olvidarse que los problemas económicos y políticos de Grecia, Italia y Portugal son, en muchos sentidos, extremadamente parecidos a los nuestros. Ante la evidencia de esas similitudes, las especulaciones de Muñoz Molina y Savater sobre el origen nacionalista de la crisis parecen suponer una excepcionalidad española, como si nuestra crisis obedeciera a causas únicas que no comparte con otros países que manifiestan problemas tan parecidos a los nuestros.

En general, *Todo lo que era sólido* adopta el tono doliente de una larga tradición de ensayismo sobre los males de la patria. Recupera la prosa quejumbrosa, el lamento profundo por el fracaso de España, que hunde sus raíces en el noventayochismo. El libro está escrito con tenebrismo. Todo se hizo mal. No hay hueco para los avances del país en los años del *boom*. Sí, se cometieron muchos errores, hubo una arrogancia fatal por parte de políticos, empresarios y nuevos ricos, se destruyó la costa mediterránea, en fin, la relación de desgracias es bien conocida, pero también hubo aspectos positivos que el autor no menciona ni de pasada: la fuerte internacionalización de nuestras empresas, el aumento espectacular de la tasa de actividad femenina, la entrada de inmigrantes sin que se produjeran problemas serios de convivencia y xenofobia, la fuerte expansión de la inversión en I+D, el progreso en materia social y de derechos civiles, el final del terrorismo, la fuerte penetración de Internet en los hogares, *etc.*

Este estilo tan negro parece justificar el moralismo que impregna el libro en su totalidad. Hay demasiada reconvención, demasiado sermón laico. Buena parte de las críticas de Muñoz Molina hacia la sociedad española no son sino un expediente retórico para subrayar la singularidad y soledad moral de quien se atreve a formularlas. En lugar de proceder con su exposición del catálogo de faltas, de modo que el lector pueda sacar su propia conclusión sobre

España y sobre la posición del autor, este insiste fatigosamente en recordarnos lo duro que es actuar como un aguafiestas. Dedicar casi tanto espacio a hablar de sí mismo como a hablar del país. No tiene demasiado sentido que un autor tan consagrado como Muñoz Molina siga ejerciendo el victimismo y la autoconmiseración: “Es muy difícil llevar la contraria en España” (p. 128), dando a entender que, por supuesto, él sí lo hace; “en un país tan invadido de nacionalismo no cuesta casi nada que a uno le llamen traidor” (p. 129); “cualquier objeción a la manera bastante atolondrada en la que se ha ido descentralizando el país convierte a quien se atreva a formularla en un partidario del centralismo, y quizás también en un fascista...” (p. 95); *etc.* Estos comentarios, que aparecen a lo largo y ancho del libro, están escritos a mayor gloria de su autor, en un ejercicio de narcisismo moralista que produce estupefacción por la manera tan descarnada en la que se presentan ante el lector.

Naturalmente, los colegas de Muñoz Molina no permanecieron indiferentes ante su exhibición de ego, originándose una pequeña polémica que revela con exactitud cruel el horizonte intelectual de nuestros escritores cuando intervienen en la esfera pública a propósito de asuntos no estrictamente literarios. La cosa sucedió así: en varias entrevistas, el autor de *Todo lo que era sólido* declaró que ni los intelectuales en general ni los escritores en particular habían estado a la altura de las circunstancias durante los años de la burbuja; no habían ejercido la actitud crítica y vigilante que se esperaba de ellos, añadiendo que la única excepción que se le venía a la cabeza era la del dibujante que firma como El Roto en el diario *El País*. Alguno se picó. Javier Marías dedicó uno de sus desabridos artículos dominicales al asunto [\[122\]](#). Allí protestó airadamente, tanto por él como por sus colegas de diario, quienes, a su entender, no habían bajado la guardia crítica durante aquel tiempo. Marías citó la nómina de intelectuales y escritores de este periódico: Fernando Savater, Mario Vargas Llosa, Javier Pradera, Josep Ramoneda, Santos Juliá, Félix de Azúa, Almudena Grandes, Juan José Millás, Maruja Torres, Manuel Rivas, Juan Cruz, Luis García Montero, Elvira Lindo y Miguel Ángel Aguilar. Cuesta recordar, no obstante, textos de muchos de ellos cuya crítica fuera más allá del nacionalismo y del gobierno de Zapatero, pero eso es lo de menos. Jordi Gracia medió en la polémica, criticando también a Muñoz Molina, en un artículo un tanto elíptico que en principio se suponía que giraba en torno a las valoraciones que se hacen sobre la Transición, pero que

en la práctica se metía de lleno en esta polémica sobre la pureza crítica [123]. Y, como Marías, no pudo resistirse a dar su propia lista de contraejemplos: Rafael Sánchez Ferlosio, Fernando Savater, Carmen Martín Gaité, Manuel Vázquez Montalbán, Javier Marías, Félix de Azúa, Victoria Camps, Juan José Millás, Francisco Fernández Buey, Miguel Sánchez-Ostiz, Rafael Chirbes, José María Ridao y Javier Cercas. Estas enumeraciones de nombres resultan un tanto cargantes, aunque solo sea por la falta de claridad sobre lo que se entiende por “crítica”: por poner un único ejemplo, diré que tengo el mayor respeto por la figura pública de Victoria Camps o José María Ridao, pero ¿alguien puede defender seriamente que han sido voces críticas con el sistema o que su crítica pertenece al mismo registro que la de Chirbes? ¿Qué quiere realmente decir “crítica” aquí? Ignacio Echevarría intervino en el debate con un artículo muy ácido desde el suplemento cultural del diario rival, *El Cultural*, que recomiendo a los lectores que disfrutaran con este tipo de batallas [124].

Muñoz Molina acaba su libro con unas propuestas sobre lo que debería cambiarse para levantar a España de su postración. Con ese “hay que” que se ha convertido en fórmula imprescindible entre reformistas, arbitristas, regeneracionistas y demás fauna liberal, termina diciendo:

Hay que exigir de manera eficaz la limitación de mandatos, las listas electorales abiertas, la profesionalidad y la independencia de la administración, la revisión cuidadosa de toda la maraña de organismos y empresas oficiales para decidir qué puede aligerarse o suprimirse, a qué límites estrictos tienen que estar sujetos el número de puestos y las remuneraciones, qué normas se deben eliminar para que no interfieran dañinamente con las iniciativas empresariales capaces de crear verdadera riqueza, qué hay que hacer para alentar y atraer el talento en vez de ponerle obstáculos y someterlo a chantajes políticos (pp. 245-246).

La historia de la ingeniería institucional está llena de fracasos (y de algunos éxitos). Por eso, cuando se hacen propuestas de esta naturaleza, conviene tener presentes los pros y contras de cada una de ellas. Eso implica conocer sus complementariedades, aprender de lo que ha ocurrido en los países en los que se han aplicado, entender por qué en algunos de ellos no han funcionado como

se esperaba, *etc.* Nada de esto aparece en el libro. No quiero decir con ello que las propuestas carezcan de atractivo, sino solamente que no son fruto de un estudio previo sobre la cuestión. Pondré un solo ejemplo: suena lógico pedir la limitación de mandatos para acabar con las ambiciones excesivas de aquellos que están en política para trepar. Sin embargo, se trata de un tipo de reforma que casa mal con el modelo parlamentario, en el que el Gobierno depende de la confianza del legislativo, de manera que este puede retirarla en cualquier momento mediante moción de censura. La limitación tiene más sentido en los sistemas presidenciales en los que el mandato del presidente y los legisladores es fijo: de ahí que esta medida nunca se haya adoptado en países con sistemas parlamentarios.

Muñoz Molina no insiste demasiado en las propuestas, que le preocupan más bien poco frente a sus diagnósticos de la crisis. Sin embargo, estas retahílas de “hay que” han proliferado como setas en los últimos tiempos. Recordaré algunas: hay que cambiar el sistema electoral, hay que reformar la educación, hay que agilizar la justicia, hay que suprimir las diputaciones, hay que reforzar los organismos independientes, hay que cambiar la financiación autonómica, hay que “desfuncionarizar” la universidad, hay que reducir el número de municipios, hay que modificar la ley de partidos, hay que transformar el Senado en una auténtica cámara de representación territorial, hay que introducir el contrato único en el mercado laboral, hay que facilitar la formación de empresas medianas, hay que reindustrializar España, hay que acabar con la corrupción mediante transparencia y rendición de cuentas, *etc.* La lista es interminable y bienintencionada.

Ante un país gripado por la crisis, la tentación de lanzar plataformas y proyectos de cambio es irresistible. En este sentido, quienes van más lejos en el programa reformista no son escritores, sino economistas, politólogos y juristas. Una manifestación de este reformismo pugnaz es la publicación de libros con títulos que juegan con la noción del “reset” y de la versión del *software*: *España/Reset*; *España 3.0. Necesitamos resetear el país* [\[125\]](#), *etc.* Los economistas han sido especialmente activos en estos listados de reformas más o menos “estructurales” que se proponen cambiar España de arriba abajo. En esta línea, se han publicado libros con títulos algo pomposos: mencionaré dos que voy a examinar con algún detalle, *Qué hacer con España. Del capitalismo castizo a la refundación de un país* y *El dilema de España* [\[126\]](#).

Esta literatura sobre la crisis es de calidad muy desigual. En cualquier caso,

quiero subrayar que entra dentro de lo debatible y lo razonable, no como las tesis de Muñoz Molina. Nos situamos, por tanto, en un registro distinto. Mis objeciones ahora no son a la totalidad; son, más bien, comentarios críticos que reclaman un mayor rigor en la forma en la que se presentan algunas ideas. Quisiera comenzar con tres sesgos muy comunes en los trabajos de este género reformista. El primer sesgo consiste en desatender los problemas distributivos, sin reparar en que dichos problemas pueden imposibilitar la puesta en práctica de las reformas destinadas a mejorar la eficiencia de la economía y la política. El segundo sesgo podría describirse en términos de unas expectativas exageradas sobre el alcance de los incentivos institucionales, esto es, suponer que basta con especificar adecuadamente los incentivos para que los equilibrios políticos y económicos de un país cambien. Por último, el tercer sesgo es el del provincianismo intelectual, es decir, considerar que los problemas de España son en su mayor parte consecuencia directa de factores políticos y económicos propios de nuestro país.

El primer sesgo se manifiesta en aquellos análisis que suponen que los principales problemas del país son de eficiencia, prestando muy poca atención a la distribución de ingresos, de propiedad, de oportunidades y de influencia. Se trata de un sesgo típicamente liberal, que se ha corregido parcialmente gracias al abrumador éxito del libro de Piketty, *El capital en el siglo XXI*. Hasta que el nombre de Piketty no empezó a sonar con fuerza en los medios en inglés, nuestros economistas habían prestado poca atención a los problemas de desigualdad que se estaban generando en España [127]. Lo mismo cabe decir de los periódicos tradicionales, que apenas se hicieron eco del asunto antes de que Piketty se pusiera de moda en Estados Unidos. *El País*, siempre tan lento de reflejos, anunció solemnemente un domingo 1 de marzo de 2015 que había un problema de desigualdad en España; en el reportaje, firmado por Javier Ayuso, se presentaba la noticia como si fuera un descubrimiento propio, ignorando o pasando por alto que no solo en el mundo académico, sino también en los nuevos medios digitales, se venía hablando de desigualdad insistentemente desde al menos dos años antes [128].

Podría pensarse que tener en cuenta los problemas distributivos obedece en última instancia a una cierta concepción ideológica que da protagonismo a la igualdad como valor político. En la medida en que el liberalismo no presta demasiada atención a la igualdad, no hay nada que reprochar a los autores liberales que prefieren centrarse en cuestiones de eficiencia. Pero mi crítica

no es ideológica en este caso: incluso desde los parámetros del liberalismo resulta contraproducente no prestar atención a la igualdad. De hecho, creo que dejar a un margen el problema distributivo constituye un error serio de las reformas de inspiración liberal. La razón es bien sencilla de exponer: en una democracia, las reformas solo pueden culminarse con éxito si cuentan con un grado amplio de apoyo social. Cuando las reformas se llevan a cabo contra la mayoría social, están destinadas a fracasar. Surgirán demasiadas resistencias en el seno de la sociedad civil, se organizarán grupos en contra, se abrirán paso nuevas voces en la política que canalicen el malestar mayoritario. La ceguera más frecuente de los economistas liberales consiste en proponer reformas destinadas a introducir eficiencia en el sistema económico que, sin embargo, no son social o políticamente sostenibles.

El ejemplo más extremo ha sido sin duda el de Grecia, país que ha sufrido las reformas de laboratorio ideadas por la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) con resultados desastrosos. Por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, un país occidental se ha visto sumido en una grave crisis humanitaria, de origen no bélico, causada por unas reformas mal diseñadas que no tuvieron en cuenta la estructura social y política en la que se aplicaron. Las políticas de austeridad han provocado una destrucción de riqueza de tal magnitud que han ocasionado profundos cambios sociales que han terminado manifestándose políticamente. De nuevo, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, gobierna en un país europeo occidental un partido a la izquierda de la socialdemocracia. Como cabía esperar, una vez que Syriza llegó al gobierno, trató de revertir las reformas: la única forma de frenar al nuevo Gobierno fue a través de la coacción y la amenaza del Eurogrupo, que pasó por encima de la democracia griega. Los economistas y comentaristas liberales suelen ver el triunfo de Syriza (o el avance de otros partidos similares en otros países) como un molesto accidente que se interpone en sus planes; a su juicio, la responsabilidad última de que Syriza gane apoyos recae sobre una sociedad inmadura que se deja arrastrar por la demagogia y el populismo. Sería más honesto, sin embargo, reconocer que el ascenso de fuerzas poco favorables a las reformas liberales es una consecuencia directa de la manera en la que esas reformas se plantean. Lo que ellos llaman “populismo” no es sino el reverso de las políticas que se imponen de forma tecnocrática, sin atención a las preferencias de la propia ciudadanía.

Por decirlo de otra manera, las reformas que los liberales plantean para ganar en eficiencia no suelen tener en cuenta las condiciones políticas que permitirían que se aplicaran sin grandes resistencias sociales. La política aparece en todo caso como una piedra en el zapato, como una fuente de molestias o complicaciones. De este modo, si surgen resistencias políticas hacia reformas que supuestamente llevarán a una mejora colectiva, lo único que resta es superar dichas resistencias, pasando por encima de los procedimientos democráticos si es preciso. El lector podrá aplicar sin dificultad esta caracterización un tanto abstracta del problema de las reformas a lo que ha sucedido en los países del sur de Europa durante la gran crisis de 2008.

Precisamente porque la política (democrática) es un estorbo, apelan los liberales al discurso según el cual el hombre de Estado es el político al que no le tiembla el pulso ante las protestas que sus decisiones provocan, el político que es consciente de la alta responsabilidad que tiene en sus manos y que ha de hacer tragar la medicina amarga del ajuste y la austeridad a una población incapaz de entender las urgencias del momento. El buen político, el político valiente, es, desde este punto de vista, aquel que se atreve a ser impopular, a oponerse a la opinión mayoritaria, a pasar por encima de cualquier protesta. Es un político que conduce con las luces largas, frente a una sociedad miope que sigue anclada en esquemas caducos y que no ha entendido los nuevos tiempos.

No es de extrañar que con estas premisas la mayor parte de las propuestas reformistas que circulan en el *establishment* español se caractericen por no tener en cuenta las consecuencias distributivas y sus posibles implicaciones políticas. Se trata de cambiar las estructuras del país para que crezca con más empuje en el futuro, sin indicar a costa de quién se harán los cambios, sin especificar si habrá compensaciones para aquellos que más tienen que perder.

En el otoño de 2015, unas semanas antes de las elecciones, el Partido Popular circuló un vídeo en el que recurría a una parábola para presentar su gestión de los últimos cuatro años: España se encarnaba en una mujer que entra en un hospital en estado crítico y, gracias al buen hacer del equipo médico popular, sale plenamente recuperada tras una larga y dura terapia (por cierto, con una bandera de España pintada en su rostro, para que no haya dudas). Curiosamente, la metáfora médica ha sido la favorita en la historia del pensamiento entre los críticos de la democracia, desde Platón en el *Gorgias*

hasta Ibsen en *El enemigo del pueblo*. Si el paciente necesita una curación, esta debe ser administrada por los expertos (los médicos), al margen de lo que diga el propio enfermo o su familia. Donde dice paciente póngase sociedad y donde dice médicos póngase economistas: ya tenemos el marco ideológico preferido de los reformistas liberales que tanto abundan en nuestro país.

La consecuencia más visible de este planteamiento ha sido el hundimiento de los dos partidos tradicionales en las elecciones del 20-D. Mientras que en el caso del PP puede argumentarse que el hundimiento también obedece a los escándalos de corrupción que arrastra el partido, la caída del PSOE estando en la oposición tiene más que ver con la forma en que gobernó durante los años de la crisis. No deja de ser llamativo que en el 20-D los votos a la izquierda del PSOE (los de Podemos e Izquierda Unida) hayan sido más numerosos que los votos del PSOE. Evidentemente, la fragmentación de los partidos y el mayor radicalismo de grupos como Podemos hacen más difícil que el país afronte algunas de sus reformas más urgentes, pero no debe olvidarse que dichas dificultades son un efecto directo de esa manera de hacer política por encima o al margen de la opinión pública.

El segundo sesgo, según expliqué antes, consiste en suponer que basta modificar la estructura institucional de incentivos para producir cambios sociales profundos. Este sesgo queda muy bien reflejado en el libro antes referido de Luis Garicano, *El dilema de España*. Para justificar y hacer creíble su celo reformista, Garicano ofrece dos ejemplos de cómo pueden modificarse conductas que parecían sólidamente asentadas en el repertorio cultural de los españoles y que, por tanto, podían considerarse inmutables o inmunes a la regulación legal. Esos dos compartimientos son la conducción por carretera y el consumo de tabaco. La introducción del carné por puntos y la aprobación de las leyes que prohíben fumar en lugares públicos, incluyendo bares y restaurantes, tuvieron un efecto inmediato sobre la sociedad. La gente empezó a conducir más prudentemente, disminuyendo el número de accidentes mortales en carretera, y los centros de trabajo y los locales de ocio pasaron a quedar libres de humo. Garicano utiliza estos ejemplos para defender que, si se diseña una adecuada estructura de incentivos, resulta posible alterar los equilibrios sociales. De este modo, considera que los argumentos “culturalistas”, según los cuales “los españoles somos así y no hay quien nos cambie”, quedan refutados. En realidad, este tipo de “culturalismo” o de “psicología de los pueblos” hace mucho que quedó abandonado, así que da la

impresión de que Garicano está combatiendo, como dicen los ingleses, contra un “hombre de paja”. En cualquier caso, los ejemplos que selecciona el autor no son demasiado iluminadores, pues guardan una relación más bien lejana con los problemas políticos que quiere solucionar. Regular conductas individuales, como la velocidad al volante o los lugares en los que fumar, no es un tipo de intervención política que pueda generalizarse demasiado. En el caso del carné por puntos, se trata de un asunto que afecta a todo el mundo por igual y que, por tanto, no genera ni ganadores ni perdedores. En el caso del tabaco, sí hay ganadores y perdedores (los perdedores alzaron su voz con brío, según se vio en el capítulo 1 a propósito de los ataques de Francisco Rico contra la ley antitabaco), pero sigue tratándose de un asunto meramente regulativo, de fácil verificación y no muy complejo de administrar mediante sanciones. Este tipo de rutinas sociales son mucho más fáciles de cambiar que, por ejemplo, el funcionamiento del mercado de trabajo, la educación o la justicia. A diferencia de la velocidad o el tabaco, ahora toca enfrentarse a intereses creados y a estructuras de poder que no se disuelven así como así, porque una ley lo establezca. Cambiar el sistema educativo en la dirección que propugna Garicano (y con la que, por lo demás, no puedo estar más de acuerdo) requiere vencer la oposición de los propios maestros y de muchas familias que están satisfechas con el sistema actual. En el mercado de trabajo hay asimismo fuertes intereses creados entre empresarios y sindicatos y son muchos quienes sospechan, no sin fundamento, que las reformas que se plantean, como la del “contrato único”, por muy bienintencionadas que sean, pueden acabar siendo un instrumento adicional para debilitar el último reducto de trabajo protegido que queda, el de los indefinidos. Con esto no quiero decir que yo esté a favor del *statu quo*, sino más bien que hacer “ingeniería política” en estos ámbitos es algo notablemente más complejo que modificar los hábitos de conducción y tabaquismo.

Hay, en mi opinión, una mezcla de voluntarismo e ingenuidad en muchas de estas propuestas liberales: un país no se cambia de la noche a la mañana mediante el BOE. En un libro anterior, *La impotencia democrática* [129], traté de hacer ver que las cosas son algo más complejas. El mal funcionamiento de muchas instituciones no tiene que ver solamente con el diseño constitucional de un país, sino también con el tipo de sociedad civil que tenga. En los enfoques menos “institucionalistas” hay múltiples investigaciones que demuestran que un mismo entramado institucional puede tener consecuencias

distintas dependiendo del medio social en el que se aplique. Así, las mismas reglas producirán resultados distintos en función de los niveles de confianza social que haya en la sociedad, la formación de sus miembros, su interés por la política, *etc.* Mencionaré un ejemplo de cómo el tipo de sociedad puede afectar a los resultados políticos: en los estudios comparados se pone claramente de manifiesto que los niveles de corrupción no son resultado únicamente de defectos institucionales; de hecho, uno de los principales determinantes del nivel de corrupción de un país es la lectura de periódicos. Cuanto mayor es la tasa de lectura de prensa por 1.000 habitantes, menor la incidencia de la corrupción. Esta asociación entre lectura de prensa y corrupción se mantiene aunque tengamos en cuenta muchos otros factores, como el nivel del desarrollo económico y el sistema electoral. Si los ciudadanos se informan sobre la gestión política, el margen de maniobra de los políticos para abusar del poder se estrecha y, en consecuencia, la corrupción disminuye. La lectura de periódicos, sin embargo, no se puede aumentar por decreto, se trata más bien de un cambio social que requiere tiempo.

Esto no quiere decir que debemos tener una actitud fatalista hacia la mejora política. Tan solo indica que se precisa cierta cautela con respecto a las esperanzas que se depositan en que modificaciones en el BOE puedan alterar significativamente el curso del país. Hay cambios que sí son posibles, pero otros solo se pueden contemplar como proyectos a largo plazo. Veamos el caso de la educación, que reformistas y regeneracionistas varios consideran que es el asunto clave para que la productividad aumente y España tenga un sistema económico que genere valor añadido y nos permita competir en un mundo globalizado. No seré yo quien se oponga a los intentos por mejorar la calidad del sistema educativo. Ahora bien, conviene cierta prudencia en este ámbito: José Saturnino Martínez, uno de nuestros mejores expertos en educación, a quien ya me he referido en varias ocasiones en este libro, ha mostrado que los resultados de 2012 de la prueba de PISA en matemáticas en las comunidades autónomas tienen una fuerte correlación con las tasas de alfabetización en 1860 [\[130\]](#). En concreto, el índice de correlación es de 0,69, considerablemente alto. Madrid obtiene una puntuación por encima de 500 en la prueba PISA de matemáticas, mientras que Extremadura se queda en 460. Madrid tenía una alfabetización en 1860 del 50% y Extremadura no llegaba al 25%. Entre 1860 y 2012 han ocurrido bastantes cosas en España: guerras,

golpes de Estado, cambios de régimen político, crisis económicas y periodos de fuerte crecimiento, urbanización del país, así como innumerables reformas educativas. Sin embargo, la composición socioeconómica de las regiones sigue explicando, en mayor medida que otros factores, las diferencias en el rendimiento de los escolares.

Otra variable fundamental que los expertos han identificado para entender el rendimiento escolar de los alumnos es el nivel cultural de los padres. En España, el porcentaje de adultos que han completado la educación secundaria sigue siendo mucho más bajo que en el resto de Europa. En familias de bajo nivel cultural, los resultados de los hijos en la escuela son peores. En la medida en que hay tantas familias en las que no se leen libros, no debe extrañar que el fracaso escolar sea tan elevado. En las familias con menores recursos económicos e intelectuales, las tasas de fracaso son mucho más elevadas [\[131\]](#). Cambiar el nivel cultural de los padres es un proceso largo, que, de nuevo, no se resuelve simplemente publicando reglamentos en el BOE.

Estos ejemplos de fuerte inercia social, usualmente ignorados por reformistas y regeneracionistas, deberían servirnos para cuestionar algunos planteamientos de gran éxito mediático y político. Estoy pensando, por ejemplo, en el dilema que plantea Garicano, a saber, que España debe elegir entre parecerse a Dinamarca o acabar como Venezuela. Curiosamente, Garicano parece no conocer muy bien el caso danés, pues apenas se detiene a examinar los programas sociales sobre los que se sostiene el funcionamiento de un mercado de trabajo muy liberalizado en una economía volcada al exterior. Ignacio Jurado escribió un artículo muy iluminador sobre la atención selectiva que Garicano y Ciudadanos prestan al caso danés y que demuestra, una vez más, una cierta superficialidad en la manera en la que los economistas hablan sobre asuntos políticos [\[132\]](#). En cualquier caso, más allá de los detalles sobre los términos de la comparación, lo más llamativo es que el dilema no contempla la alternativa más probable: que España siga siendo uno de los países de cola dentro del grupo de los más desarrollados, a cierta distancia de Dinamarca en muchos asuntos, pero claramente en una liga distinta a la de Venezuela.

De hecho, la trayectoria de España en las últimas décadas indica que el resultado más probable es que nuestro país no alcance a Dinamarca ni descienda a Venezuela. Aunque se trate de un indicador muy imperfecto, el PIB per cápita de España con respecto a los países de Europa occidental (la UE-

15, sin la ampliación al Este) no se ha modificado demasiado en 40 años: si se quitan los momentos excepcionales de la burbuja de principios de siglo, el nivel de desarrollo de España ha estado entre el 75 y el 85% de la riqueza media de la UE-15. En 1975, el año de la muerte de Franco, el PIB per cápita de España con respecto a la UE-15 era del 82,1%; 40 años después, en 2015, del 87,9% [\[133\]](#). Es una mejora, sin duda, pero no suficiente para cambiar la posición relativa de España. Siempre cabe pensar que si no ha habido una convergencia mayor se deba al “bipartidismo” PP-PSOE. Pero debe tenerse en cuenta que se observan trayectorias similares en muchos otros países, de modo que apenas se modifican los *ranking* de los de dentro de la UE, con alguna excepción llamativa como Irlanda, un país tradicionalmente pobre que ha tenido un crecimiento vertiginoso (su renta per cápita era un 66,7% de la UE-15 en 1975 y en 2015 había pasado al 127%). Ahora bien, me parece que el éxito irlandés no se debe exactamente a que se emprendieran reformas institucionales en el país, sino a las condiciones un tanto excepcionales de Irlanda como receptor de cuantiosas inversiones extranjeras atraídas por un país de habla inglesa con fuertes privilegios fiscales para las empresas, bajos salarios y una mano de obra bien formada. Por lo demás, los elementos de continuidad de España con respecto a Europa van más allá del PIB per cápita. España, como otros países del Sur, sigue teniendo un gasto público y un gasto social por debajo de la media UE-15, así como una tasa de paro muy por encima. En 1987, la tasa de paro en España llegó al 19,7%; en 1994, al 22%, y en 2013, al 26,1%.

Resulta difícil saber si España está en condiciones de dar un gran salto adelante. Creo que las restricciones que se siguen de nuestra pertenencia a la eurozona dificultan enormemente ese objetivo. Pero sea como sea, el dilema entre Venezuela y Dinamarca no refleja de forma realista las opciones que se plantean en nuestro país. Que un economista con sólido prestigio académico escriba en estos términos no deja de ser sorprendente. La economía es la ciencia social más desarrollada, tanto en cuanto a rigor teórico como en cuanto a procedimientos estadísticos para poner a prueba hipótesis. Los economistas suelen tener una actitud condescendiente hacia el resto de las ciencias sociales y rara vez leen el trabajo de quienes no son de su gremio, pues suelen considerar que no están a su nivel. De ahí que sea tan llamativo que luego argumenten tan alegremente sobre asuntos políticos, sin haberse informado mínimamente sobre lo que otros han dicho, y que lo hagan con un nivel de

autoexigencia muy bajo, muy por debajo desde luego de lo que estilan en su producción académica.

Por último, el tercer sesgo de la literatura reformista sobre el que me gustaría llamar la atención consiste en un cierto provincianismo intelectual. Los diagnósticos que se ofrecen sobre la crisis, y las soluciones a la misma, empiezan y acaban en España, sin tener en cuenta lo que ha sucedido más allá de nuestras fronteras. En este caso, el sesgo no se limita a los liberales, pues puede encontrarse igualmente en muchos análisis izquierdistas, por ejemplo, en todos aquellos que achacan nuestros males a la forma en la que se desarrolló la transición a la democracia: lo que se hizo mal entonces ha acabado pasando factura 40 años después. La forma más gráfica de referirse a este problema queda reflejada en la tesis, mil veces repetida, de que “el régimen del 78 está agotado”. La expresión resulta muy desafortunada, pues confunde un periodo constitucional con un régimen político: al margen de lo que cada uno piense sobre la Constitución de 1978, debe recordarse que un cambio de la Constitución, o incluso la entrada en una fase constituyente, no supondría un cambio de régimen: el régimen seguiría siendo el mismo, una democracia. Evidentemente, quien habla de “régimen” lo hace con toda la intención del mundo, tratando de establecer una asociación entre nuestro actual sistema político y “el régimen” por antonomasia, es decir, el franquismo. Si hablamos con un mínimo de rigor, siguiendo el uso académico de que los regímenes políticos son formas de gobierno y hay básicamente dos (dictaduras y democracias), debe convenirse que lo que puede estar en crisis es el entramado institucional y los partidos que han gobernado con la Constitución de 1978, pero no así la forma de gobierno, pues nadie plantea seriamente una forma que no sea democrática como la actual. Con otras palabras, nadie plantea un cambio de régimen, sino en todo caso una reforma institucional o, en el extremo, la apertura de un periodo constituyente. En cualquier caso, con independencia de lo absurdo que sea hablar de “régimen del 78”, lo que me interesa destacar aquí es que establecer una conexión causal entre nuestra crisis económica y política y la Transición resulta un tanto osado si adoptamos una perspectiva algo más amplia, pues otros países de nuestro entorno se enfrentan a problemas muy parecidos a los nuestros y, sin embargo, tuvieron transiciones muy distintas (en Portugal y Grecia fue mediante ruptura; en Italia, la transición se remonta a la guerra civil que vivió aquel país al final de la Segunda Guerra Mundial; en Irlanda no ha habido transición alguna, ha sido

una democracia efectiva desde que se constituyó la República de aquel país).

En el caso del reformismo liberal, el sesgo insular queda reflejado en la tesis muy extendida de que España tiene un sistema institucional defectuoso, un sistema que da demasiado poder a los dos grandes partidos políticos tradicionales, PP y PSOE. Así, estos partidos han patrimonializado las instituciones, pervirtiendo los mecanismos de control (tribunales, organismos reguladores) y cerrando las vías de cambio. La consecuencia ha sido un fuerte aumento de la corrupción, unas elites políticas mal preparadas y un Estado en cierto sentido bloqueado, sin recursos políticos con los que impulsar los cambios que necesita el país para prosperar en el contexto de la globalización.

Sin duda, hay mucho de verdad en esta forma de abordar los problemas de España. Parece innegable que ha habido una excesiva politización partidista en el funcionamiento de muchas instituciones, lo que se ha traducido, entre otras cosas, en que se eligiera para cargos de gran cualificación técnica no a los mejor preparados, sino a los afines a los partidos. Pero conviene no sacar conclusiones exageradas o infundadas. Y, sobre todo, no dejarse llevar por un cierto espíritu “antipolítico” que responsabiliza a los representantes del pueblo de todo lo que ha funcionado mal en estos años. Poseídos por ese espíritu, economistas, juristas, diplomáticos, altos funcionarios y muchos otros han dado por buenas algunas tesis que circulan en la esfera pública que no son correctas. Una muy llamativa, por ejemplo, es la de que en España hay más políticos que en otros países. Los partidos, para satisfacer a sus clientelas y ampliar al máximo sus organizaciones, habrían multiplicado sin necesidad real el número de cargos públicos: se ha llegado a afirmar que en España la cifra de políticos ronda los 300.000. Así lo defendieron dos de nuestros más ubicuos reformistas liberales, César Molinas y Elisa de la Nuez, en un artículo publicado en *El País*. Como demostró eficazmente Ferrán Martínez desde el blog *Piedras de Papel*, ese dato es una invención [\[134\]](#). Parte de contar a los más de 68.000 concejales que hay en España, el 90% de los cuales no cobra un euro por el servicio público que realizan en los miles de ayuntamientos pequeños del territorio nacional. Pero aun así, es difícil seguir sumando y llegar a más de 160.000. Esta cifra puede parecer alta o baja, pero es aproximadamente la mitad de la estimación de los dos reputados reformistas. Algo similar cabe decir sobre el nivel de formación de nuestros políticos. Garicano, en *El dilema de España*, se lamenta del bajo nivel de formación de nuestros gobernantes, que no tienen PhD ni “papers” académicos, pero, de

nuevo, un vistazo a los datos contribuye a aclarar las cosas. Un especialista en la cuestión como Juan Rodríguez Teruel ha mostrado que el 81% de los diputados autonómicos, el 90% de los diputados y senadores nacionales y el 95% de los ministros de la etapa democrática tienen títulos universitarios [135]. En el caso de los ministros, España está, con los otros tres países del sur (Grecia, Italia y Portugal) en los puestos de cabeza: en el resto de Europa los ministros con estudios universitarios son un porcentaje más bajo (en la añorada Dinamarca no llegan al 65%).

Pero vayamos a ejemplos un tanto más sustantivos, como el de la burbuja inmobiliaria, que ha sido probablemente la patología más grave de la economía española de los últimos tiempos, un fenómeno especulativo que ha impedido una asignación eficiente de los recursos, que ha debilitado la formación de los jóvenes, que ha hecho más traumática y destructiva la crisis posterior..., en fin, una calamidad para España. Resulta extremadamente tentador, para hacer avanzar las tesis del reformismo liberal, argumentar que la burbuja es una consecuencia más de nuestro diseño institucional defectuoso y de unos partidos políticos solo interesados en el parasitismo del sector público. Quien más lejos ha llegado en este intento es César Molinas en su libro *Qué hacer con España*, para quien “la clase política española genera burbujas de manera compulsiva. Y lo hace no tanto por ignorancia o por incompetencia como porque en todas ellas captura rentas” (p. 173). Esta tesis campanuda merece un análisis crítico [136]. En primer lugar, cuando Molinas habla de “burbujas” en plural, ¿de cuántas está hablando? En el libro menciona la inmobiliaria, la de las energías renovables y la de las “infraestructuras innecesarias”. Pero ¿realmente los huertos solares y las infraestructuras inútiles (tipo aeropuerto de Castellón, autopistas radiales de Madrid y Ciudad de la Cultura en Santiago) son “burbujas”? Una burbuja consiste en que el precio de un activo aumenta ante la expectativa de que dicho precio continúe subiendo. Tiene, pues, un elemento de reflexividad o de profecía autocumplida (las burbujas funcionan en última instancia como un esquema Ponzi, los últimos en llegar son quienes más pierden). Si el precio de la vivienda se eleva como consecuencia del encarecimiento de los materiales de construcción, o de una fuerte demanda derivada de la presión demográfica, no decimos que haya una burbuja en el mercado. Hablamos de burbuja cuando la subida de precios no guarda relación con las magnitudes fundamentales relacionadas con el bien en cuestión. Mientras que es evidente que en España

ha habido una burbuja inmobiliaria, resulta muy forzado aplicar el concepto a las energías renovables o a las infraestructuras. En el caso de las energías renovables, no hubo aumentos de precios. El problema, más bien, tuvo que ver con un desafortunado Real Decreto, el 661/2007, que estableció un sistema de primas defectuoso [\[137\]](#). Fue una mala regulación, con consecuencias muy onerosas para las arcas del Estado y los consumidores, que se corrigió posteriormente. No tiene nada que ver con un comportamiento especulativo: se estableció un sistema errado de incentivos que los inversores aprovecharon. Que no fuera una burbuja no implica que no debamos criticar los efectos que se produjeron, en forma de sobreinstalación de huertos solares, pero no sirve de mucho mezclar las cosas asimilando un error regulativo a una burbuja de precios. En cuanto a las infraestructuras, es evidente que muchas de ellas se hicieron sin criterio económico alguno, pero no hubo tampoco burbuja en el sentido antes señalado. En España todas las capitales de provincia quieren tener su universidad, su palacio de congresos, su museo de arte, su estación de AVE, su obra de Calatrava, *etc.* Es evidente que se produjeron excesos de todo tipo y que sería mejor haber gastado todos esos recursos en inversiones más provechosas, pero no hubo una “burbuja” como tal. De los tres ejemplos que menciona Molinas para ilustrar su tesis fantástica de que los políticos españoles son generadores compulsivos de burbujas, solamente uno es válido.

En segundo lugar, Molinas afirma con la contundencia hispánica habitual que la causa por la que existen las burbujas es que los políticos españoles orientan su gestión a la captura de rentas. Cojamos las energías renovables y el sistema de primas: según Molinas, “estas primas generan muchas rentas y prebendas capturadas por la clase política” (p. 175). Sin embargo, no especifica nunca qué prebendas y rentas son esas, ni las cuantifica en momento alguno. ¿Qué prebendas podía sacar el Gobierno o el ministro de Industria de turno de las primas que se pagaban a los productores de energía fotovoltaica? Los economistas suelen ser tremendamente exigentes con los datos. Me resulta incomprensible que no hayan salido en tromba a denunciar la falta de precisión de Molinas en la presentación de sus tesis. En lugar de eso, nuestros economistas liberales se dedican a lanzarse piropos entre sí, haciendo creer a un público incauto que han descubierto el origen de nuestros males. Como bien sabrá el lector, pues se ha reproducido en todas partes, la tesis central de Molinas es que los políticos españoles son “elites extractivas”, expresión sobre la que luego tendré algo que decir: se dedican a extraer rentas en su

propio beneficio, al margen de las consecuencias negativas que ello pueda tener para el conjunto del país. Es una tesis sensacional: todos los políticos son iguales, son todos responsables de habernos metidos en el agujero a base de “detracer rentas de la mayoría de la población en beneficio propio” (p. 177). Molinas incluso afirma, con suma pretenciosidad, que él ha desarrollado una “teoría” de la clase política, pero en ningún momento se molesta en someterla a prueba empírica. ¿Cuáles son las rentas que extraen los políticos? ¿Cuánto pesan en el PIB? ¿Son un 0,1%, un 1% o un 10% del PIB? ¿Qué magnitud tiene el fenómeno? El silencio del autor sobre esta cuestión resulta bastante ilustrativo sobre el rigor con el que se presenta el argumento.

En tercer lugar, merece cuestionarse la tesis de que los responsables principales de la burbuja son los políticos. Si pensamos en la burbuja inmobiliaria, no hay duda de que las responsabilidades están algo más compartidas. Los sucesivos gobiernos podrían haber suprimido la desgravación fiscal por compra de vivienda y podrían haber tomado medidas más enérgicas para evitar la expansión del ladrillo. Pero recordemos que el principal instrumento para enfriar la economía, la fijación del tipo de interés, estaba en manos del Banco Central Europeo y que este siguió una política monetaria demasiado laxa para España, pero que en aquellos momentos convenía a Alemania, la economía más grande de la eurozona. Con tipos reales de interés negativos, como los que llegó a tener España, los incentivos de los hogares para comprar vivienda eran grandes. El crédito, también como consecuencia de nuestra entrada en la zona euro, fluía sin cesar: el exceso de ahorro de las economías del Norte servía para financiar el modelo de crecimiento del Sur basado en el consumo. El Banco de España, por su parte, podía haber endurecido las condiciones para la concesión de préstamos, pero esta institución se negó en repetidas ocasiones a reconocer que hubiera una burbuja en España: ¿lo hizo también porque extrae rentas de la sufrida población española? En 2011, *El Mundo* hizo pública la carta que la asociación de inspectores del Banco de España había dirigido a Pedro Solbes en 2006 informándole de la inacción de los responsables ejecutivos del Banco (entonces bajo la dirección de Jaime Caruana) ante la burbuja inmobiliaria [138]. El Banco, tanto con Caruana como luego con Miguel Ángel Fernández Ordóñez, parecía más preocupado por regañar a los sindicatos y exigir una mayor flexibilización del mercado de trabajo, asunto este que no entra dentro de sus competencias. También debieron tener alguna responsabilidad en la

burbuja las agencias de calificación, que no vieron ningún peligro ni riesgo excesivo, así como la legión de economistas que negaron su existencia [\[139\]](#).

Finalmente, y este es el punto más importante en tanto que revela el provincianismo intelectual de algunos de nuestros analistas, la burbuja inmobiliaria no fue solo un fenómeno español protagonizado por nuestra carpetovetónica elite extractiva. Hubo burbujas en otros lugares: en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Irlanda, en Rumanía, en Croacia y en otros países. ¿Está Molinas dispuesto a concluir que los políticos británicos o estadounidenses son también “elites extractivas”? ¿O que de todas las burbujas inmobiliarias la única causada por un problema de elites extractivas fue la española? Estaría bien que nuestros economistas liberales, de rocosas convicciones institucionalistas, reflexionaran sobre el hecho de que haya habido burbujas con sistemas institucionales radicalmente diferentes: un sistema presidencial en Estados Unidos, un sistema parlamentario en Gran Bretaña, sistemas electorales mayoritarios en estos dos países frente a un sistema proporcional en España, *etc.* En la sección de análisis político que coordino para *infoLibre*, *Luces Rojas*, publicamos al respecto un artículo de un joven investigador, Mircea Popa (doctor por la Universidad de Harvard), en el que planteaba una sencilla explicación de economía política sobre el surgimiento de “burbujas de ladrillo”: estas se dan con mayor probabilidad allá donde el votante mediano es propietario de un inmueble (es decir, en sociedades en las que hay un elevado porcentaje de propietarios de vivienda) [\[140\]](#). En ese caso, la revalorización de la vivienda le supondrá al votante mediano un beneficio, lo que significa que más de la mitad del electorado apoyará la formación de la burbuja y, por tanto, los políticos no tendrán incentivos para pincharla. Así se explica que países como Alemania, Japón o Suiza, con un porcentaje bajo de propietarios, no pasaran por la burbuja. La clave de esta sencilla explicación no radica en que las elites del país sean más o menos extractivas, sino en que tengan incentivos políticos para evitar o, eventualmente, pinchar, la burbuja de precios.

El libro de Molinas no es más que una versión muy estirada del famoso artículo “Una teoría de la clase política española”, publicado por *El País* el domingo 10 de septiembre de 2012 con gran fanfarria. El artículo cosechó un resonante éxito de público, con más de 40.000 *likes* en Facebook y casi 14.000 menciones en Twitter. Para muchos, Molinas había dado en el clavo: el origen de todos los problemas radicaba en una clase política que se había

adueñado de las instituciones del país y las ponía al servicio de la extracción de rentas en detrimento del interés general. Ya estaba señalado el culpable. En lugar de hablar de la “casta” (Pablo Iglesias aún no había irrumpido en los medios), se refería a una “elite extractiva” que nos impedía crecer como país. El concepto de elites extractivas se inspira libremente en la distinción que hicieron Daron Acemoglu y James Robinson entre instituciones inclusivas y extractivas en su ya célebre libro [\[141\]](#). Según Acemoglu y Robinson, las instituciones inclusivas se corresponden con las que se dan en los países desarrollados y democráticos, es decir, órdenes políticos pluralistas en los que se protegen los derechos de propiedad y el Estado provee bienes públicos. Las instituciones extractivas son todo lo contrario, no garantizan la competición ni política ni económica, dejan demasiado margen al Gobierno para actuar arbitrariamente y a largo plazo producen estancamiento económico. Los ejemplos de instituciones extractivas que aparecen en el libro son Zaire, la Unión Soviética, la antigua civilización maya, en fin, casos muy distantes con respecto a la realidad española del periodo democrático. Las tesis de Acemoglu y Robinson, en cualquier caso, no son la verdad revelada y están sujetas a fuerte controversia. Pero lo más grave es que la aplicación de su esquema a un país desarrollado como España resulta bastante forzada, se mire como se mire. Además, Molinas habla de elites, mientras que Acemoglu y Robinson se refieren a instituciones. Puede que Molinas no sea excesivamente original, pues en *The Economist* había aparecido un artículo el 14 de abril de 2012 en el que se empezaba a hablar de “elites extractivas” en lugar de instituciones y se sugería que en los países desarrollados dichas elites son los banqueros y los sindicalistas, responsables ambos del bajo crecimiento económico [\[142\]](#). Es probable que Molinas leyera aquel artículo y decidiera aplicarlo a España, desarrollándolo en forma de “teoría” de la clase política. El resultado fascinó al equipo directivo de *El País* (Javier Moreno, José Manuel Calvo y Carlos Yárnoz, a quienes Molinas agradece en el libro “su apoyo incondicional, que no ha conocido restricciones ni de su tiempo ni de espacio en las páginas de su periódico”); dicho equipo decidió darle máximo protagonismo al artículo, contribuyendo de forma decisiva a que unas ideas mal articuladas y pretenciosas, sin dato alguno que las corroborara, se transformaran en un punto de referencia en el debate sobre la crisis. El papanatismo de *El País* quedó retratado al considerar que aquel texto tenía gran valor intelectual. Afirmaciones rotundas que daban respuestas simplistas

a problemas complejos, envueltas con el papel celofán de Acemoglu y Robinson, terminaron dando el pego.

Quizá lo más sorprendente del artículo de Molinas fuera la parte final, en la que proponía una reforma del sistema electoral para acabar con las elites extractivas [\[143\]](#). El autor sugería que para romper la colusión de los dos grandes partidos extractores de rentas, PP y PSOE, nada mejor que cambiar nuestro sistema electoral proporcional por uno mayoritario, tesis que suscribe también Garicano en *El dilema de España* (cap. 9). El atractivo de un sistema mayoritario para estos economistas consiste en que con circunscripciones unipersonales se establece un vínculo más estrecho entre representantes y representados, de manera que los políticos tendrán menos incentivos para corromperse. Pero, a la vez, una fórmula mayoritaria consolidaría definitivamente el bipartidismo y los nuevos partidos quedarían con una representación muy inferior a la de sus resultados electorales. Así, el partido de Garicano, Ciudadanos, no obtendría apenas representación con reglas mayoritarias (igual que les sucede, por ejemplo, a los Liberal Democrats en Gran Bretaña). Esta es una de las regularidades mejor conocidas en la ciencia política, que recibe el título de “ley de Duverger”. Lo aprenden todos los estudiantes en su primer curso en esta materia. Que Molinas no fuera consciente de que el sistema mayoritario garantizaba la supervivencia del bipartidismo da muestra de la superficialidad con la que se opina sobre reformas institucionales en nuestro debate público. En su libro *Qué hacer con España* la propuesta mayoritaria se mantiene, aunque pierde protagonismo y la presenta con menos entusiasmo ante las numerosas críticas recibidas. Más allá de que Molinas no se parase a reflexionar sobre las consecuencias más obvias que tendría la adopción de un sistema mayoritario, es también cuestionable que las reglas electorales tengan un efecto poderoso sobre los niveles de corrupción en un país. Los trabajos empíricos al respecto no han podido determinar una influencia específica de dichas reglas en la corrupción.

Se ha hablado tanto de las “elites extractivas” que el término ha acabado utilizándose banalmente en el debate público para referirse a cualquier fresco o aprovechado al que se pilla con las manos en la masa. Es divertido leer en prensa cómo a quien antes llamábamos un jeta ahora es un miembro de la “elite extractiva”. Pero no solo en prensa. También puede encontrarse la dichosa expresión en los libros periodísticos que se escriben sobre la coyuntura española. Por ejemplo, José Antonio Zarzalejos, en *Mañana será*

tarde. Un diagnóstico valiente para un país imputado, con prólogo de Antonio Muñoz Molina, se refiere a “unas elites extractivas que capturan rentas en supuesta compensación por sus servicios a la sociedad” [144]. El lenguaje es tan impreciso que cualquier cosa puede ser una “captura” (atención al horroroso anglicismo) de rentas, desde las subvenciones públicas que recibe un partido político hasta un puesto en un consejo de administración.

El principal elemento retórico con el que destacar en la inacabable literatura regeneracionista sobre la crisis consiste en subrayar el momento crucial que vive el país. Para no alargar más de lo conveniente este capítulo, en lugar de seguir reproduciendo ejemplos sacados de libros como los que he mencionado hasta el momento, me permitiré la licencia de reconstruir con mis propias palabras el tenor de estas reflexiones: “Estamos en una encrucijada en la que nos jugamos nuestro futuro. Si no hacemos bien las cosas, acabaremos como Venezuela. El legado de las cuatro primeras décadas de democracia está cuestionado: España necesita una puesta a punto. Es urgente reformar la Constitución. Reclamemos un consenso como el de la Transición: si entonces se pudo, si entre todos se pactó la Constitución, los Pactos de la Moncloa y la Ley de Amnistía, ¿por qué no podemos ahora reformar mediante acuerdos amplios y transversales nuestro sistema autonómico, nuestro sistema educativo y nuestras instituciones políticas? De no tener éxito en nuestra empresa colectiva, perderemos el tren de la globalización, quedaremos relegados a un país en decadencia, que pudo haber estado en la vanguardia, pero que por no hacer las reformas necesarias quedó al margen de la gran revolución tecnológica que estamos viviendo. No está todo perdido: tenemos todavía una oportunidad de entrar en un tiempo nuevo. Pongámonos manos a la obra, acordemos un plan integral de reformas y reflotemos el país. Pidamos a los políticos un ejercicio de responsabilidad, exijámosles que dejen de lado sus rencillas pueriles y se pongan manos a la obra, es mucha la tarea que queda por delante. España lo ha conseguido en otros momentos de su historia y lo conseguirá de nuevo. España lo merece”. Etcétera, etcétera y etcétera.

Una valoración imparcial de la literatura reformista requiere echar la vista atrás y coger perspectiva. Ese ejercicio retrospectivo revela que muchas de las afirmaciones campanudas que en estos libros se realizan con tono perentorio para estos tiempos de crisis y congoja son idénticas a las que se ofrecían hace ya más de 25 años. Asombra comprobar cómo los diagnósticos y las soluciones que hoy se proponen para sacar a España de su postración

apenas han variado en las últimas décadas. Además de su falta de rigor, los libros a los que me he venido refiriendo en este capítulo ni siquiera son originales. Lo mostraré con un ejemplo.

En 1990 publicaron Justino Sinova y Javier Tusell un libro cuyo título bien podría remitir a nuestro tiempo actual: *El secuestro de la democracia. Cómo regenerar el sistema político español* [145]. En aquel año, la economía crecía con fuerza. La democracia española asistía a su primer periodo de crecimiento desde la muerte de Franco, tras más de 10 años de atonía económica (1977-1987). Por otro lado, los escándalos de corrupción no habían hecho su aparición con la intensidad con la que lo harían en la legislatura 1993-1996. En 1990 había saltado a la palestra el caso Juan Guerra, que acabaría arrastrando a su hermano Alfonso fuera del Gobierno de Felipe González. Un escándalo distinto, no de corrupción, sino de guerra sucia, el del GAL, seguía flotando en el ambiente. La huelga general del 12 de diciembre de 1988 había ocurrido no hacía tanto: la práctica totalidad de los trabajadores pararon aquel día reclamando una distribución más favorable de las rentas del crecimiento económico.

Las circunstancias, pues, eran bastante distintas. La democracia tenía entonces poco más de 13 años de antigüedad. Hoy tiene casi 40: nos encontramos ante un país atrapado en la unión monetaria, sin apenas margen para corregir las terribles injusticias que erosionan la legitimidad política del sistema (en forma de desigualdad, riesgo de pobreza, desahucios, ayudas generosas y poco transparentes a las entidades financieras), con un mercado de trabajo muy deteriorado, tanto por lo que toca al número de parados como por lo que se refiere a la precariedad y salarios de miseria de una buena parte de los trabajadores, con el descubrimiento de tramas de corrupción muy extendidas... y, sin embargo, los diagnósticos de entonces y de ahora suenan sorprendentemente parecidos.

Si se presentara este texto desligado de su fuente original, sería difícil fecharlo:

Meditar sobre el estado de nuestra democracia tiene especial sentido por la sencilla razón de que hay muchas cosas en ella que no marchan suficientemente bien. Los políticos y las instituciones necesitan un chequeo; y el clima ambiental, un aporte de aire fresco. [...] No es exagerado decir que la democracia española está afectada por una

cierta crisis. [...] Nuestra democracia está secuestrada: por la hegemonía de un partido político, por la idiosincrasia de la clase dirigente, por la falta de crítica y por un marco legal que a menudo la encorseta y le priva de flexibilidad y espontaneidad [\[146\]](#).

Salvo por la referencia a la hegemonía de un partido político, el PSOE, que a la sazón gozaba de mayoría absoluta, el resto de la cita podría pasar por un texto escrito durante los años de la presente crisis. Hubiera bastado una referencia al bipartidismo para que la coincidencia fuera casi perfecta.

Ya en 1990, movidos por su afán regeneracionista, los autores defienden la necesidad de “una segunda transición que nos libre de los males del presente” (p. 11) [\[147\]](#). Dicha transición solucionaría el control partidista de las instituciones del Estado: mencionan el Tribunal Constitucional, el Consejo de RTVE, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Universidades y las Cajas de Ahorro (p. 46). Esta segunda transición restablecería la ejemplaridad perdida de los políticos: “Al político en una democracia se le pide no solo que sea moral, sino que, en muchos aspectos, resulte ejemplar. [...] Si todos y cada uno de los políticos deben dar un cierto ejemplo, esta afirmación vale especialmente con todos ellos como colectividad” (p. 57). Incluso llegan a criticar el fenómeno de las “puertas giratorias”, que les parece poco edificante (p. 73). Sinova y Tusell se muestran también preocupados por la falta de confianza en las instituciones políticas que revelan las encuestas (p. 99). Son todos estos temas que sonarán muy familiares al lector de hoy interesado por la crisis política de España.

De la misma manera, la lista de propuestas que los autores ofrecen para regenerar la democracia recuerda mucho a lo que desde plataformas, partidos nuevos, tribunas y libros viene defendiéndose estos días: cambio de la ley de financiación de los partidos (p. 262); medidas para revitalizar el Parlamento (incluyendo la reforma del Reglamento del Congreso) (pp. 283-284); la reforma electoral (pp. 286-288); el cierre del sistema autonómico (pp. 293-94); y una reforma de la Justicia (pp. 295-296). Sinova y Tusell no mencionaron la reforma educativa, si lo hubieran hecho la lista habría sido estrictamente contemporánea.

Con este análisis no pretendo defender la tesis de que ninguna de estas reformas sea necesaria. Al revés, me encantaría que muchas de ellas se llevaran a la práctica y tuvieran éxito. Pero da que pensar el hecho de que, en

circunstancias y momentos muy distintos, la literatura reformista o regeneracionista siempre ande con las mismas propuestas. Mi principal crítica, en cualquier caso, ha consistido en mostrar que la mayor parte de las propuestas se formulan sin haber realizado un estudio previo sobre la cuestión, careciendo, por tanto, de soporte empírico, y, sobre todo, sin pararse a pensar en los factores que impiden que el país cambie en la dirección que sus autores propugnan. Suponer que son las “elites extractivas”, la transición o el bipartidismo lo que impide que España tenga un sistema educativo excelente y una política limpia y eficaz resulta, según he intentado argumentar en estas páginas, infundado. Nuestros reformistas proporcionan unos diagnósticos simplistas, que no tienen en cuenta ni los aspectos distributivos y de justicia social que toda reforma requiere para ser puesta en práctica con un mínimo de consenso social ni los aspectos sociales y de largo plazo que pueden acabar neutralizándola. Súmese a todo esto un enfoque muy insular, en el que España es el principio y final de todas las preocupaciones, sin que se preste mayor atención a la perspectiva comparada, y ya tenemos todos los elementos que configuran el tipo de análisis sobre la crisis que ha dominado en nuestro país durante estos años. Merecíamos algo mejor.

[108](http://blogs.elpais.com/juan_cruz/2013/03/todo-lo-que-era-s%C3%B3lido-de-mu%C3%B1oz-molina.html) . Juan Cruz, “Todo lo que era sólido, de Muñoz Molina”, *El País*, Blogs Cultura, 17/3/2013, en http://blogs.elpais.com/juan_cruz/2013/03/todo-lo-que-era-s%C3%B3lido-de-mu%C3%B1oz-molina.html

[109](http://www.revistadelibros.com/articulos/la-democracia-naufragada) . Álvaro Delgado Gal, “La democracia naufragada”, *Revista de Libros*, 15/3/2013, en <http://www.revistadelibros.com/articulos/la-democracia-naufragada>

[110](http://www.sevilla.org/ayuntamiento/presupuestos-municipales/presupuesto-municipal/ano-2012/presupuestos-de-gastos) . He extraído los datos de <http://www.sevilla.org/ayuntamiento/presupuestos-municipales/presupuesto-municipal/ano-2012/presupuestos-de-gastos>

[111](#) . En un artículo más reciente, el autor sigue defendiendo lo mismo, solo que en términos todavía más exagerados. Se plantea esta pregunta retórica: “¿En qué país se gasta mucho más dinero público en subvenciones a las corridas de toros y a las procesiones y a los carnavales y a los sanfermines y a los rocíos y a las tomatinas y a las danzas vernáculas que en la investigación científica?”. Antonio Muñoz Molina, “Elogio del conocimiento”, *tintaLibre*, 30, noviembre de 2015, pp. 26-30.

[112](#) . José Carlos Díez, “El Pura Sangre español: la historia de los tres choques y de los tres mitos”, *Economía Aragonesa*, 32, 2007, pp. 79-104, p. 92.

[113](#) . Véase un testimonio de primera mano en el libro de Jorge Dezcallar, *Valió la pena*, Barcelona, Península, 2015, cap. 9.

[114](http://www.joanabonet.com/2011/08/jose-luis-rodriguez-zapatero-viaje-a-ny-2/) . La entrevista de Joana Bonet con Zapatero se puede encontrar en <http://www.joanabonet.com/2011/08/jose-luis-rodriguez-zapatero-viaje-a-ny-2/>. Véase también Javier Valenzuela, *Viajando con ZP*, Barcelona, Debate, 2007, pp. 233-34.

[115](#) . Jon Juaristi, “Feminismo”, *ABC*, 23/10/2005.

[116](#) . Joana Bonet, “Soy rojo (intrahistoria)”, *El Mundo*, 20/4/2006.

- [117](#) . Véase Paloma Aguilar, “Las políticas de la memoria”, en Anna Bosco e Ignacio Sánchez-Cuenca (eds.), *La España de Zapatero. Años de cambios, 2004-2008*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2009, pp. 153-178.
- [118](#) . Desde posiciones muy distantes, tanto Robert Shiller como Steve Keen anticiparon la crisis con bastante exactitud. También Robert Brenner, el historiador marxista, había descrito la burbuja y su inevitable explosión.
- [119](#) . Véase John Kenneth Galbraith, *Breve historia de la euforia financiera*, Barcelona, Ariel, 1991.
- [120](#) . Miguel Sebastián, *La falsa bonanza. Cómo hemos llegado hasta aquí y cómo podemos intentar que no se repita*, Barcelona, Península, 2015.
- [121](#) . Fernando Savater, “Que decidan ellos”, *El País*, 23/4/2013.
- [122](#) . Javier Marías, “En los años de la distracción”, *El País*, 10/3/2013.
- [123](#) . Jordi Gracia, “Guerra de mitos”, *El País*, 17/4/2013.
- [124](#) . Ignacio Echevarría, “Críticos y ‘comprometidos’”, *El Cultural*, 3/5/2013.
- [125](#) . Fernando Vallespín y Joan Subirats, *España/Reset*, Barcelona, Ariel, 2014; Javier Santirso, *España 3.0. Necesitamos resetear el país*, Bilbao, Deusto, 2014.
- [126](#) . César Molinas, *Qué hacer con España. Del capitalismo castizo a la refundación de un país*, Barcelona, Península, 2013; Luis Garicano, *El dilema de España*, Barcelona, Debate, 2014.
- [127](#) . Una excepción importante en estos años de crisis es el *Primer Informe sobre la Desigualdad en España* (Fundación Alternativas, 2013), dirigido por Jesús Ruiz-Huerta. En otras ciencias sociales, si se venía hablando con insistencia sobre este asunto, véase, por ejemplo, José Saturnino Martínez, *Estructura social y desigualdad en España*, Los Libros de la Catarata, 2013.
- [128](#) . Javier Ayuso, “Cerrar la brecha”, *El País*, 1/3/2015.
- [129](#) . Ignacio Sánchez-Cuenca, *La impotencia democrática*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2014.
- [130](#) . José Saturnino Martínez, “Fracaso escolar y comunidades autónomas”, en Manuel de Puelles (ed.), *El fracaso escolar en el Estado de las Autonomías*, Wolters Kluwer, 2012. Véase también su artículo “La Historia en PISA”, *eldiario.es*, 4/12/2013, en http://www.eldiario.es/zonacritica/Historia-PISA_6_203739626.html
- [131](#) . José Saturnino Martínez, “Fracaso escolar, clase social y política educativa”, *El Viejo Topo*, nº 238, 2007, pp. 44-49.
- [132](#) . Ignacio Jurado, “Ciudadanos y el sueño danés”, *eldiario.es*, 17/3/2015, en http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/Ciudadanos-sueno-danes_6_367523276.html
- [133](#) . El máximo se alcanzó en 2007, con el 92,8%. Véase *European Economy*, Statistical Annex, otoño de 2014, p. 26, en http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/statistical_annex_autun
- [134](#) . César Molinas y Elisa de la Nuez, “¿Por qué hay que cambiar los partidos políticos?”, *El País*, 27/5/2013. Ferrán Martínez, “¿Cuántos políticos hay en España?”, *eldiario.es*, 29/5/2013, en http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/politicos-Espana_6_137596242.html. En su libro, Molinas habla de 300.000 personas “cuyo puesto de trabajo —de director general o de conserje— ha sido obtenido por motivos políticos”: César Molinas, *Qué hacer con España*, p. 171. Esta otra cifra tampoco tiene sustento empírico alguno. A continuación afirma que la administración española está hipertrofiada, a pesar de que tenemos un porcentaje de trabajadores en el sector público considerablemente menor que la media de Europa occidental.
- [135](#) . Juan Rodríguez Teruel, “Los ministros del sur de Europa tienen más estudios universitarios”, *eldiario.es*, 6/3/2014, en http://www.eldiario.es/agendapublica/nueva-politica/ministros-sur-Europa-estudios-universitarios_0_235877230.html
- [136](#) . Publiqué una reseña crítica del libro: “Las ideas castizas de César Molinas sobre las élites”, *tintaLibre*, 9, diciembre de 2013, pp. 16-17.
- [137](#) . Véase Sebastián, *La falsa bonanza*, pp. 166-167.

- [138](#) . *El Mundo*, 21/2/2011, reproduce la carta. Véase <http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/21/economia/1298251668.html>
- [139](#) . Véase Sebastián, *La falsa bonanza*, pp. 220-225.
- [140](#) . Mircea Popa, “¿Por qué sólo algunos países tuvieron burbujas inmobiliarias?”, *infoLibre*, 20/2/2014, en http://www.infolibre.es/noticias/luces_rojas/2014/02/21/por_que_solo_algunos_paises_tuvieron_burbuja
- [141](#) . Daron Acemoglu y James Robinson, *Why Nations Fail?*, Nueva York, Crown, 2012.
- [142](#) . Buttonwood, “The Question of Extractive Elites”, *The Economist*, 14/4/2012.
- [143](#) . Sobre esta cuestión, véase Pablo Simón, “Élites extractivas y sistema electoral”, *eldiario.es*, 26/2/2013, en http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/Elites-extractivas-sistema-electoral_6_105399464.html
- [144](#) . José Antonio Zarzalejos, *Mañana será tarde. Un diagnóstico valiente para un país imputado*, Barcelona, Planeta, 2015, p. 31.
- [145](#) . Justino Sinova y Javier Tusell, *El secuestro de la democracia. Cómo regenerar el sistema político español*, Barcelona, Plaza & Janés, 1990.
- [146](#) . Sinova y Tusell, *El secuestro de la democracia*, p. 10.
- [147](#) . Véase también p. 143.

CONCLUSIONES

EL OCASO DE LOS FIGURONES

En sociedades desarrolladas y tecnológicamente avanzadas como la nuestra, es lógico que la esfera pública esté formada por una cacofonía de voces y un exceso de información. La llegada de Internet ha generado un aumento exponencial de blogs, artículos de análisis y opinión, plataformas digitales de todo tipo, especializadas y generalistas, y todo ello al alcance de un clic. Hace no tanto, el simple acceso a la prensa extranjera era un privilegio disfrutado por unos pocos; hoy, basta con encender el ordenador o el móvil para poder leer la prensa de casi todo el planeta.

La información fluye a gran velocidad y a veces los temas debatibles se olvidan antes de ser plenamente comprendidos, quedando aplastados por novedades incesantes. Además, en la sociedad digital ya no hay unas instancias centrales que fijen un orden de prioridades en torno a las cuales la ciudadanía pueda coordinarse. Antiguamente, unos pocos periódicos y emisoras de radio y televisión podían organizar y canalizar el debate de un país: todo el mundo leía, oía y veía los mismos contenidos, es decir, todo el mundo hablaba más o menos de los mismos asuntos, y lo hacía con unas referencias comunes. En el presente, la dispersión es mucho mayor, los temas son más variados y las fuentes mucho más plurales. Hay más información, pero está también más fragmentada.

Un lector de periódico de hace 20 años podía dedicar una hora entera a leer el ejemplar del día. En la actualidad, ya casi nadie lee así. Se picotea en las redes sociales; la gente curioseas y entra en los muchos medios digitales existentes, dedicándole unos pocos minutos a cada uno. En un periódico de los de antes, un día cualquiera podía haber un par de artículos de opinión y un par de columnas. Hoy, surge un tema nuevo y en 24 horas cabe encontrar en Internet más de 30 o 40 artículos de opinión al respecto, examinando todos los ángulos posibles del asunto del que se trate.

Una reacción típica ante un cambio de esta magnitud consiste en dejarse arrastrar por la nostalgia y la melancolía. Así sucede con aquellos que comparan nuestro debate público, caótico y polifónico, con ejemplos sublimes, como los diálogos socráticos de la Grecia clásica o el debate constitucional norteamericano del siglo XVIII. Entonces, razona el nostálgico, a pesar de que no había Internet ni móviles ni demás zarandajas, o precisamente por todo ello, el intercambio de argumentos brillaba con una luz que hoy nos resultaría cegadora. Esta actitud, casi de duelo, no parece provechosa para enfrentarnos al momento actual, pues las circunstancias excepcionales que dieron lugar a conversaciones públicas como aquellas de los clásicos no van a repetirse en nuestra época, caracterizada por una “democratización” o “igualación” en las opiniones que circulan por los medios y las redes sociales. Los episodios históricos más sobresalientes en la deliberación colectiva fueron posibles gracias a un principio de aristocracia intelectual que hoy ya nadie aceptaría.

Aunque no vayamos a tener grandes tribunos como los de antes, necesitamos, no obstante, criterios para orientarnos en la selva de la información y la opinión. Y esos criterios no pueden venir del caduco figurón intelectual que, adoptando las formas del “macho discursivo”, opina alegremente, con osadía y suficiencia, sobre cualquier cuestión que despierte su interés o esté de actualidad. Valga el siguiente ejemplo: uno de nuestros intelectuales más ubicuos y severos, José Antonio Marina, concede una entrevista en *El Español* y ofrece su opinión sobre los siguientes asuntos: la reforma educativa, la campaña electoral de las últimas elecciones, el terrorismo de ISIS, los criterios que guían al votante en unas elecciones, la integración de los musulmanes en Francia, la crisis de Cataluña y la calidad de nuestra democracia [148]. ¿Realmente tiene algo propio que decir sobre todas estas cosas? ¿Son ideas de su propia cosecha originadas a partir de un estudio previo de la cuestión o son reflexiones más o menos espontáneas nacidas de la lectura de la prensa? Esta forma de intervenir en el debate se ha quedado anticuada, me parece. Como anticuado resulta el estilo de nuestras elites intelectuales, que sigue siendo retórico y alambicado; su enfoque, castizo y literario; y sus opiniones, demasiado personalistas e insuficientemente analíticas. Aunque sea forzar un poco la analogía, padecemos una cierta “cultura de amiguetes”, en la que unos figurones con egos inflados se han convertido, con la complicidad inestimable de los medios de comunicación, en

“referentes” de nuestro debate colectivo.

La mejor forma de superar estas prácticas viciadas y robustecer el intercambio de argumentos, ideas y datos en nuestra esfera pública pasa por consensuar unos niveles de exigencia y rigor. No hacen falta grandes figuras que marquen un camino, como si su obra fuera la luz de un faro que guía a ciudadanos extraviados. Ante la abundancia de textos e intervenciones que saturan el espacio deliberativo, los filtros a aplicar no pueden proceder de la autoridad que se conceda a unos intelectuales que opinan impunemente sobre todo, sino del acuerdo ampliamente compartido sobre los límites de lo que resulta admisible en el ejercicio de la opinión y el análisis.

Dichos límites no podrán eliminar del todo el componente de hipocresía, amiguismo y frivolidad que está presente en nuestro debate colectivo. Quienes participan en el mismo son seres humanos, con sus ambiciones y debilidades y, por lo tanto, no podemos suponer que solo les guía la verdad y el bien común en sus opiniones. Desean ser admirados, aspiran a ser influyentes y quisieran ser recordados en el futuro. A mi juicio, sería absurdo pasar por alto la condición humana y plantear como objetivo una discusión científica, aséptica, en la que solo valiera la fuerza de los hechos y la coherencia de los argumentos. Un cierto nivel de subjetivismo y arbitrariedad estará siempre presente. De hecho, esos elementos pueden hacer más vivo y colorista el intercambio de opiniones. Pero aunque no haya posibilidad de eliminar enteramente las ambiciones y debilidades de la clase intelectual, sí cabe intentar contenerlas mediante normas y reglas que estipulen lo que resulta inaceptable en la esfera pública.

Podemos imaginar una esfera pública con filtros más exigentes que los aplicados en España. El punto de partida no es bueno, pues en nuestro país prima el personalismo, la originalidad y la voluntad de estilo. Estos rasgos son fiel reflejo del peso que tiene la literatura y el ensayo en la producción cultural. En estos dos ámbitos, siempre hemos tenido grandes creadores. El problema comienza cuando las actitudes y el estilo propios de esos géneros se trasladan al debate público. Tanto la literatura como el pensamiento son actividades en buena medida solitarias e intimistas, en las que el autor construye un mundo propio, desarrollando una obra única e intransferible, que es trasunto de su personalidad intelectual. Sin irnos muy lejos en el tiempo, algunos de nuestros pensadores más brillantes se caracterizan justamente por haber ido produciendo ideas de forma totalmente individualista, al margen de

los demás, sin confrontarlas con nadie. En ese espléndido aislamiento, florece el pensador irrepetible, partidario del monólogo interior, de avanzar al margen de lo que digan o hagan sus colegas. Surge así el intelectual en el que su obra y personalidad se confunden, capaz de escribir volúmenes larguísimos con pensamiento original. Algunos nombres señeros que vienen de inmediato a la cabeza por su condición genialoide son Rafael Sánchez Ferlosio, Agustín García Calvo y Gustavo Bueno. Este último, cuya obra conozco razonablemente bien, es la encarnación misma del energúmeno: hombre de una inteligencia y conocimientos portentosos, dominado por ideas furiosas y extravagantes, ha ido elaborando un sistema filosófico propio, único tanto en contenidos como en forma. En la fase final de su carrera, ha querido intervenir en el debate público con libros sobre la televisión, la democracia, el nacionalismo, las ideologías políticas, la gestión de Zapatero, la inserción de España en Europa y otros temas similares. Son volúmenes mayormente ilegibles, llenos de ideas absurdas y disparates reaccionarios, que reflejan con suma precisión los estragos del aislamiento intelectual. En una comunidad intelectual algo más articulada, con unas normas comunes y unas prácticas consolidadas de intercambio de ideas, extravíos como estos de Gustavo Bueno no tendrían cabida. En España, sin embargo, siempre ha habido una querencia por estas figuras un tanto quijotescas, que construyen una obra a su manera, originalísima e intransferible. Surgen, de este modo, autores que son como islas incomunicadas en un océano de letras. Cada uno escribe desde su dominio, sin aparentar interés alguno por lo que puedan pensar sus colegas. Se encierran en proyectos ambiciosos, de largo alcance, que muy pocos leerán en su tiempo, pero con la secreta esperanza de que en el futuro alguien redescubra su obra y la ponga en el lugar que merece.

Frente al individualismo extremo del literato y ensayista que participa en el debate público con una voz propia y fácilmente reconocible, cabe oponer la visión “comunitarista” del conocimiento y la verdad propia de la ciencia. La investigación científica, frente al ensayismo, es una empresa necesariamente colectiva, en la que intervienen multitud de personas comprometidas con unos métodos comunes, unas prácticas consensuadas y unas preguntas cuyas respuestas todos tratan de encontrar en un proceso competitivo. Michael Polanyi fue uno de los primeros pensadores en caracterizar la naturaleza social del conocimiento científico y en destacar su forma de legitimidad tradicional: tradicional en tanto que la confianza que se establece entre todos

aquellos que participan en el proceso investigador se configura a partir de la transmisión generacional y personal de las habilidades y las prácticas necesarias en la producción del saber [\[149\]](#). La idea hizo fortuna y se popularizó posteriormente a través del celeberrimo libro de Thomas Kuhn sobre las revoluciones científicas [\[150\]](#).

Evidentemente, las diferencias entre nuestra deliberación colectiva y el conocimiento científico son muchas. No creo que nadie pretenda organizar la esfera pública según los protocolos de la investigación. El debate político no es una cuestión de ciencia. Sin embargo, algunos de sus elementos sí pueden ser de interés, sobre todo como contraste frente al enfoque del ensayismo individualista que resulta tan fatigoso en nuestro país aplicado a los asuntos públicos. Sin ir más lejos, en el debate político circulan, como he insistido a lo largo de este libro, afirmaciones de contenido causal, en las que se establecen razones por las que ciertos sucesos ocurren. Es inevitable, pues, que en nuestro debate se enfrenten distintas visiones sobre las causas y las consecuencias de fenómenos muy diversos, desde el paro hasta el terrorismo. Una de las tareas más exigentes y difíciles en las ciencias sociales consiste en establecer relaciones causales. No estaría de más que los intelectuales más generalistas se asomaran a las dificultades que entraña concluir que un fenómeno específico es la consecuencia de una o varias causas. Si así lo hicieran, serían algo más prudentes en sus afirmaciones.

Si en nuestra esfera pública hubiera un compromiso más firme con el conocimiento y la investigación, los argumentos políticos que circulan por la sociedad tendrían un mayor grado de refinamiento y coherencia interna. Parece imprescindible que quien se lance a opinar sobre las reformas políticas que necesita España, o sobre la naturaleza del nacionalismo, o sobre el estado de nuestro sistema educativo, ya sea escritor o no, ya tenga una formación u otra, estudie un poco, intente averiguar lo que se sabe al respecto y sea consciente del valor que su aportación puede tener en relación con lo ya sabido. Unas precauciones tan sencillas como estas tendrían consecuencias enormes en nuestro debate, pues acabarían con lugares comunes que se extienden sin freno y se terminan asimilando como conocimiento cierto a base de repetirse en todas partes.

Igualmente, un ejercicio más intenso y honesto de la crítica produciría efectos muy saludables. Si quienes escriben en el debate público hicieran oír de vez en cuando una discordancia razonada con las opiniones ajenas, los

autores se verían obligados a elaborar argumentaciones más sólidas. Parte de la impunidad intelectual que hay en nuestro debate público se debe a que los desacuerdos, en las pocas ocasiones en que llegan a expresarse, se ventilan en términos personales mediante el sarcasmo y la acusación *ad hominem*, sin un verdadero intercambio de razones y puntos de vista. Así, con la excusa de evitar “trifulcas estériles”, que solo llegan a suceder cuando a un autor alguien le toca las narices más de la cuenta, no se consuma el intercambio de razones. Sin embargo, el mecanismo más eficaz contra la opinión arbitraria es la expectativa de que dicha opinión pueda desencadenar una reacción crítica.

Asimismo, es preciso que los lectores apliquen de forma sistemática la prueba de la relevancia a toda intervención pública. Dicha prueba consiste en determinar si el autor está añadiendo algo nuevo y de valor o está mareando la perdiz, haciendo gala de erudición, o repitiendo argumentos y datos que otros muchos han expuesto anteriormente. Cuando un autor no tiene una contribución propia que hacer, ya sea porque otros se le hayan adelantado, ya sea porque no se le ocurra nada de su propia cosecha, mejor callarse.

Finalmente, la autoridad de los grandes intelectuales debería ser puesta en cuarentena. Con un espíritu más crítico, y también más irreverente, es fácil comprobar que muchas de las cosas que dicen algunos de nuestros intelectuales mejor valorados por el *establishment* son ocurrencias malamente construidas. En este libro he ofrecido numerosos textos que a mi juicio entran con todo derecho en esta categoría. En ocasiones, es hasta doloroso tener que mostrar la osadía de tantos intelectuales que se aficianan a las grandes generalizaciones y los pronunciamientos tajantes.

Estos cuatro elementos (estudio previo, crítica abierta, garantía de valor añadido y cuestionamiento de la autoridad) son un buen punto de partida para revitalizar nuestra conversación colectiva sobre los asuntos públicos. En cierto modo, ya está sucediendo. Tengo la impresión de que en los últimos años empieza a ser visible una transformación profunda. Los “sospechosos habituales” que intervienen en columnas, tribunas, tertulias, etc., mantienen seguramente sus legiones de seguidores incondicionales, pero me parece que sus pronunciamientos e intervenciones tienen cada vez menos influencia. En comparación con las nuevas voces que han ido surgiendo, las opiniones políticas de los Savater, Cercas, Muñoz Molina, Juaristi, Azúa, Vargas Llosa, Marías, Espada, etc., tienen a estas alturas algo de pintoresco. Siempre es agradable leer su prosa, resulta entretenido estar al tanto de sus obsesiones,

pero es difícil tomárselos muy en serio cuando hablan de política. Lo cual no impide que su obra literaria o ensayística merezca los elogios más encendidos.

Frente a los figurones de siempre, con su ego hinchado y su opinión tajante e idiosincrásica, van surgiendo aquí y allá autores mejor preparados y más especializados, menos visibles, pero más numerosos, con menor sello personal, pero mayores dosis de análisis y reflexión, menos brillantes, pero más rigurosos. Tal vez sus personalidades no resulten tan arrolladoras, pero tienen más recursos intelectuales.

Nuestra conversación colectiva sobre política debería ser más abierta e inclusiva y estar más inspirada por los ideales que rigen la investigación. Para ello, para acercarnos a ese modelo, creo necesario criticar la desfachatez con la que opinan tantos escritores e intelectuales en España.

[148](#) . Entrevista a José Antonio Marina, *El Español*, 20/12/2015, en http://www.lespanol.com/saberes/20151219/87991224_0.html

[149](#) . Véase, por ejemplo, la recopilación de artículos de Michael Polanyi, *Knowing and Being*, Chicago, University of Chicago Press, 1969.

[150](#) . Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago, University of Chicago Press, 1962.

Tabla de contenidos

[Portada](#)

[Introducción](#)

[Capítulo 1. La maldición del escritor](#)

[Capítulo 2. La obsesión nacional](#)

[Capítulo 3. La crisis: merecíamos algo mejor](#)

[Conclusiones. El ocaso de los figurones](#)